



67 MAR/ABR 2011

NEW LEFT REVIEW

Daniel Finn *Irlanda, ¿cambio de rumbo?*

Jules Boykoff *Las contraolimpiadas*

Benno Teschke *Decisiones e indecisiones*

Ronald Fraser *Cómo se perdió la República*

Gregory Elliott *La senda del viejo topo*

Étienne Smith *Las agonías del Congo*

Horit Herman Peled y Yoav Peled
¿Post-postsionismo?



Artículos

- 5 *Daniel Finn*
 39 *Jules Boykoff*
 57 *Benno Teschke*
 91 *Horit Herman Peled*
 y Yoav Peled
- 111 *Ronald Fraser*
 125 *Gregory Elliott*
 133 *Étienne Smith*
- Irlanda, ¿cambio de rumbo?
 Las contraolimpiadas
 Decisiones e indecisiones
 ¿Post-postsionismo?
- Cómo se perdió la República
 La senda del viejo topo
 Las agonías del Congo

Crítica

Editor de la edición en castellano
Traducción

Carlos Prieto del Campo
 Iría Álvarez Moreno, José María Amoroto Salido, Irene Montero Sabín, Cristina Piña Aldao

Editor
Editorial Committee

Susan Watkins
 Tariq Ali, Perry Anderson, Gopal Balakrishnan, Emilie Bickerton, Robin Blackburn, Robert Brenner, Malcolm Bull, Alexander Cockburn, Mike Davis, Tom Mertes, Francis Mulhern, Julian Stallabrass, Jacob Stevens, Tony Wood, JoAnn Wypijewski

Deputy Editor
Publishing Director
Subscriptions Director
Assistant Editor
Online Publisher

Tony Wood
 Kheya Bag
 Johanna Zhang
 Kenta Tsuda
 Rob Lucas

© New Left Review Ltd., 2011
 © Ediciones Akal, S. A., 2011
 para lengua española
 Sector Foresta, 1
 28760 Tres Cantos
 Madrid - España
 Tel.: 918 061 996
 Fax: 918 044 028
www.akal.com
 ISSN: 1575-9776-67
 Depósito legal: M-2599-2000
 Impreso en Publidisa



GOBIERNO
 DE ESPAÑA

MINISTERIO
 DE CULTURA

Esta revista ha recibido una subvención de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España, para la totalidad de los números editados en el año 2011.

CONTENIDOS

DANIEL FINN: Irlanda, ¿cambio de rumbo?

En este excelente ensayo, Daniel Finn disecciona las consecuencias políticas y económicas del *crack* de 2008 a ambos lados de la frontera irlandesa. Austeridad amenazante y sectarismos persistentes en Irlanda del Norte; en el Sur la caída del tigre celta acarrea la descomposición del dilatado predominio de Fianna Fáil y la emergencia de un nuevo Sinn Féin como partido con representación en toda Irlanda.

JULES BOYKOFF: Las contraolimpiadas

Siempre la encarnación del orden internacional del momento –imperialismo victoriano, rivalidad de la Guerra Fría, *Pax Americana*–, las Olimpiadas se han unido a la OMC y al G20 como objetivo de las protestas antiglobalización. Lecciones para Londres de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 celebrados en Vancouver, donde artistas, activistas y organizadores indígenas se han opuesto al espectáculo circense de los cinco anillos.

BENNO TESCHKE: Decisiones e indecisiones

Si el pensamiento liberal ha intentado esterilizar la «mente peligrosa» de Carl Schmitt, las revisiones recientes de su pensamiento han localizado en el mismo anticipaciones de la arrogancia imperial contemporánea en su análisis de la justicia de los vencedores. Benno Teschke advierte contra tales «rehabilitaciones» detectando una lógica fascista subyacente a lo largo de la multifacética obra del pensador alemán.

HORIT HERMAN PELED Y YOAV PELED: ¿Post-postsionismo?

Las elisiones y ocultaciones de tres recientes obras sobre el carácter pasado, presente y futuro de Israel y de su régimen de ocupación. Tras las exploraciones deleuzianas de un «sistema de control» o las reconstrucciones del discurso de los «pioneros», se perfilan intentos de aislar el sionismo y sus mitos fundadores del análisis de sus orígenes de colonia de asentamiento.

RONALD FRASER: Cómo se perdió la República

Ronald Fraser reseña el libro de Julián Casanova, *The Spanish Republic and Civil War*. Soberbia evaluación del breve florecimiento de la República y de su belicosa caída de la mano de una nueva generación de estudiosos que se enfrenta a su controvertida historia.

GREGORY ELLIOTT: La senda del viejo topo

Gregory Elliott reseña el libro de Eric Hobsbawm, *How to Change the World*. El más célebre de los historiadores comunistas británicos analiza la tradición marxista. Implementación, legados y perspectivas de las ideas de El Moro.

ÉTIENNE SMITH: Las agonías del Congo

Étienne Smith reseña el libro de Gerard Prunier, *From Genocide to Continental War*. Ambicioso intento de explicar la década de guerra del Congo por un observador y participante en la alta política del continente.

AUTORES

JULES BOYKOFF: enseña Ciencia Política en la Pacific University, Oregón

GREGORY ELLIOTT: profesor visitante en el Universidad de Newcastle; su libro más reciente es *Hobsbaum. History and Politics* (2010); véase también *NLR* 41.

DANIEL FINN: estudiante de Historia de la izquierda republicana en la University College Cork.

RONALD FRASER: su último libro publicado es *Napoleon's Cursed War* (2008); nuevas ediciones de su obra *In Hiding* y *In Search of a Past* se publicaron en 2010; véase también *NLR* 55.

HORIT HERMAN PELED: artista multimedia; enseña en Oranim College.

YOAV PELED: enseña Ciencia Política en la Universidad de Tel Aviv; coautor de *Being Israeli* (2002); véase también *NLR* 29, 38.

ÉTIENNE SMITH: actualmente enseña en la Universidad de Columbia; autor de *L'Afrique: histoire et défis* (2009).

BENNO TESCHKE: enseña Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex; autor de *The Myth of 1648* (2003)

IRLANDA, ¿CAMBIO DE RUMBO?

Consecuencias políticas y económicas de la crisis

Con frecuencia Irlanda ha ido a la zaga del desarrollo político y cultural de otras partes de Occidente. Resulta poco sorprendente, pues, que las insinuaciones del inminente «fin de la historia irlandesa» no comenzaran a aflorar hasta el comienzo del nuevo siglo. Un acuerdo de paz que ponía punto final al más prolongado conflicto europeo desde 1945 hacía concebir esperanzas de que Irlanda del Norte pronto se asemejaría más a Yorkshire o a Renania que al Líbano o a Bosnia. Al sur de la frontera, décadas de subdesarrollo parecían haber sido superadas en el corto espacio de unos cuantos años de euforia. Y, si los dos Estados irlandeses todavía carecían de uno de los rasgos determinantes de la política europea moderna —una división entre izquierda y derecha, apoyada en un electorado con preferencias estrechamente vinculadas a la posición de clase—, ¿no sugeriría esto que Irlanda se adelantaba por una vez a los acontecimientos, anticipando la próxima americanización de la vida política de Europa?

Desde septiembre de 2008 la crisis global ha vertido un jarro de agua fría sobre tales sueños. El Estado del sur va en caída libre, destruyendo puestos de trabajo a un ritmo vertiginoso y viéndose forzado a aceptar un humillante «rescate» de la UE y del Fondo Monetario Internacional, cuyos términos no harán sino agravar la crisis económica. La recesión ha puesto cruelmente al descubierto las imperfecciones del modelo del «tigre celta» y ha bajado los humos a sus patrocinadores políticos. El futuro plan de austeridad de los conservadores y liberal-demócratas, mientras tanto, amenaza la economía de Irlanda del Norte, que depende desproporcionadamente de la inversión estatal para mantener su nivel de vida. Esto someterá al gobierno de poder compartido de la región a una intensa presión, poniendo a su vez a prueba la determinación de los reticentes socios de la coalición para mantenerse sujetos al arnés, mientras acometen los recortes impuestos desde Londres. Este ensayo examinará las consecuencias económicas y políticas de la crisis, de norte a sur. Resulta prematuro aventurar cuál será el impacto a largo plazo, pero está claro que la extraña trayectoria histórica de Irlanda tiene un largo camino por delante antes de alcanzar el final de su recorrido.

IRLANDA



1. UN MODELO EN DECLIVE

Durante gran parte de las dos últimas décadas, la República de Irlanda fue alabada como la niña bonita del neoliberalismo. Entre 1993 y 2000, el PNB irlandés creció un promedio del 9 por 100 anual; el desempleo —que había alcanzado un máximo de 17 por 100 en la década de 1980— había desaparecido prácticamente en las postrimerías del siglo. Una nación que se había mantenido en la ignominia de la marginalidad económica, mientras sus más grandes y ricos vecinos vivían los *trente glorieuses*, se catapultaba de la noche a la mañana por encima de sus cabezas, alcanzando incluso el hito psicológicamente vital de una renta per cápita superior a

la de Gran Bretaña. Los periodistas extranjeros se apresuraron a alabar el milagro irlandés, que podía atribuirse con facilidad a su buena disposición para ponerse la camisa de fuerza dorada y abrazar la lógica del capitalismo global. Los gurús neoliberales, de Thomas Friedman a George Osborne, exhortaron al resto de Europa a «perseguir al relampagueante duendecillo» por la senda de impuestos bajos, regulación laxa y flexibilidad de los mercados de trabajo¹. Después de haber presenciado cómo Irlanda pasaba de ser considerada un caso perdido a transformarse en un modelo de excelencia económica, ¿quién se atrevería a discutir la validez de la fórmula?

El paquete de medidas impuestas por la UE y el FMI en diciembre de 2010 ha supuesto la puntilla a tal modelo. Con un desempleo del 13 por 100 y habiendo registrado el PIB los mayores descensos de la historia –el 7 por 100, solo en 2009–, la República irlandesa ha tenido que suscribir un préstamo de miles de millones de euros a un interés leonino del 5,8 por 100, que será empleado inmediatamente para devolver el dinero a los bancos alemanes, franceses y británicos. Esta carga obedece a la decisión adoptada por el gobierno irlandés en septiembre de 2008 de ofrecer una garantía ilimitada de los pasivos acumulados por su podrido sistema bancario y a la negativa de los Estados europeos más importantes a considerar la posibilidad de cargar las pérdidas a los «titulares de bonos preferentes», a saber, los susodichos bancos. Lo más probable es que al Estado irlandés le resulte imposible atender al reembolso de intereses, generando inestabilidad adicional en la eurozona y anulando las perspectivas de recuperación en Irlanda.

Los términos del acuerdo sitúan bajo una luz irónica uno de los asuntos más importantes que han ocupado el debate político irlandés durante los años del tigre celta. Quien lo expresó con mayor fortuna fue Mary Harney –líder del tatcherista Partido Demócrata Progresista y veterana de la coalición dirigida por el Fianna Fáil que se ha mantenido en el poder desde 1997–, cuando afirmó que Irlanda se encontraba «más próxima a Boston que a Berlín»: más en consonancia con el modelo económico angloamericano que con las aspiraciones al Estado del bienestar de la Europa continental. Los comentaristas irlandeses adoptaron la manida consigna de Harney, aunque aquellos liberales de izquierda para quienes la UE representaría una forma de capitalismo más humano y progresista situaron el acento en el lado inverso. Ahora Boston y Berlín han llegado a la ciudad, marchando al mismo paso, y hay pocas opciones entre ambos. De hecho, el FMI se ha mostrado de algún modo más cabal que la UE, aunque solo sea porque no considera imperativo defender los intereses de los gigantes bancarios europeos. Una buena medida del trauma experi-

¹ Thomas Friedman, «Follow the leapin' leprechaun», *The New York Times*, 1 de julio de 2005; George Osborne, «Look and learn from across the Irish Sea», *The Times*, 23 de febrero de 2006.

mentado se encuentra en el hecho de que incluso *The Irish Times* se haya sentido forzado a distanciarse en un estilo *yeatsiano* vulgar de los nuevos amos de las finanzas:

Tal vez suscite extrañeza que *The Irish Times* se pregunte si es por esto por lo que murieron los hombres de 1916: un rescate de la canciller alemana y una mínima muestra de cortesía del canciller británico [...]. Habiendo logrado la independencia política de Inglaterra para ser los dueños de nuestros propios asuntos, hemos sometido ahora nuestra soberanía a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional².

Las dos fases del tigre

Las explicaciones de esta debacle deben partir de la distinción entre las dos fases del «tigre celta». La primera estuvo guiada por una afluencia de inversión sin precedentes en sectores clave de la industria por parte de multinacionales estadounidenses, que giró en torno a las exportaciones como acicate principal del crecimiento económico. La segunda fase se inició tras la recesión estadounidense de 2001, que provocó la reorientación de la actividad económica hacia la construcción y las finanzas, y generó una burbuja inmobiliaria sin parangón en la historia reciente. Las primeras décadas de la República –así como del Estado Libre que la precedió– habían estado caracterizadas por políticas de sustitución de importaciones, las cuales habían alcanzado el límite de su potencial en la década de 1950. Con Seán Lemass como jefe de gobierno (1959-1966), el partido dominante Fianna Fáil abrió la economía de par en par y ofreció atractivas deducciones fiscales al capital extranjero. Pero fue la adhesión a la Comunidad Económica Europea, en 1973, lo que sentó las bases para el *boom* posterior. En la década de 1980 Irlanda se convirtió en receptora de oleadas crecientes de fondos estructurales, mientras los grandes agricultores cosechaban los beneficios de la Política Agrícola Común.

Para las compañías estadounidenses en busca de localizaciones rentables para sus inversiones, la República podía ofrecer entonces dos ventajas

² Editorial: «Was it for this?», *The Irish Times*, 18 de noviembre de 2010. Algunos intelectuales europeístas han sido incapaces de aceptar la evidencia, mostrando así su reticencia a destimar la visión benigna de la Unión Europea. Un ejemplo llamativo fue la respuesta de Colm Tóibín al editorial de *The Irish Times*: «Hay dos cosas que han ocurrido durante el transcurso de mi vida por las que todavía siento una suerte de veneración. Una es el Acuerdo del Viernes Santo y la otra es la Unión Europea. [...] Así que el jueves, cuando *The Irish Times* mencionaba a la “canciller alemana”, no se me despertó automáticamente el sentimiento de que esta persona era una especie de fuerza maligna en el mundo. En cambio, me figuré a una persona racional y prudente, sensata y profundamente inteligente. Del mismo modo, cuando *The Irish Times* mencionaba “una mínima muestra de cortesía del ministro de Hacienda británico” tampoco sentí la menor vergüenza. Considero que el tono del canciller británico ha sido comprensivo y razonable». Colm Tóibín, «Looking at Ireland, I don't know whether to laugh or cry», *The Guardian*, 20 de noviembre de 2010.

sustanciales: la pertenencia a la CE, lo que daba acceso a las compañías asentadas en su territorio al nuevo Mercado Único, y un tipo impositivo especial del 10 por 100 sobre el beneficio industrial (sustituido finalmente por un impuesto de sociedades de tipo único del 12,5 por 100). El impacto de este generoso régimen fiscal en las finanzas públicas se vio compensado parcialmente por los 10 mil millones de euros de fondos estructurales europeos recibidos entre 1989 y 1999, lo que incrementó el PIB en casi un 2 por 100 durante la década de despegue³. La cuota de inversión industrial estadounidense en la economía local aumentó de un 32 por 100 en 1990 a un 68 por 100 en 1997. La inversión extranjera directa se concentraba en unos cuantos sectores, en particular en la informática, la industria farmacéutica y la ingeniería electrónica. Dell construyó la mayor de sus fábricas europeas en tierra irlandesa, a la que se unió un tropel de gigantes de las nuevas tecnologías. Entre 1995 y 1999, las corporaciones multinacionales fueron responsables directas del 85 por 100 del crecimiento económico total⁴. Un resultado de esta dependencia de las compañías de titularidad extranjera para impulsar la economía irlandesa fue la creciente divergencia entre el PIB y el PNB: a finales de la década, el PNB estaba situado casi un 20 por 100 por debajo. Como es lógico, el papel desempeñado por las multinacionales en el *boom* de la década de 1990 expuso peligrosamente la salud de la economía irlandesa a cualquier variación de las condiciones que la habían convertido en un destino tan atractivo para la inversión. Pocas esperanzas había de que la industria autóctona tomase el relevo, como señalaba un articulista en 2003:

La gran diferencia entre el sector de titularidad extranjera y el autóctono reside en que el nivel de valor añadido bruto generado por empleado es más de cinco veces superior en el primero que en el segundo. En 2001, el valor añadido bruto por empleado de las compañías de titularidad irlandesa fue de 44.700 euros, con un incremento del 10 por 100 en términos nominales. Pese a este fuerte crecimiento, la brecha se hizo más amplia, ya que el valor añadido bruto generado por las compañías extranjeras aumentó el 12 por 100, situándose en 226.000 euros por empleado⁵.

Mientras que en 2001 las multinacionales exportaron casi el 90 por 100 de su producción, las compañías de titularidad irlandesa vendieron menos del 40 por 100 de lo que producían en el extranjero. Al contrario que los genuinos tigres asiáticos, el modelo celta no produjo sus propias empresas industriales líderes que arrastraran la economía.

³ David Hegarty, «Framework for the evaluation of the Structural Funds in Ireland», National Development Plan/Community Support Framework Evaluation Unit, Dublín, 2003.

⁴ Denis O'Hearn, «Macroeconomic policy in the Celtic Tiger: a critical reassessment», Colin Coulter y Steve Coleman (eds.), *The End of Irish History? Critical Reflections on the Celtic Tiger*, Manchester, 2003, p. 38.

⁵ Fintan O'Toole, *After the Ball*, Dublín, 2003, p. 162.

Tan seguro como una casa

El aterrador cambio de tesitura se inició con el estallido de la burbuja estadounidense de las nuevas tecnologías. El número de empleos en el sector industrial irlandés, que había crecido año tras año desde 1995 hasta 2001, comenzó entonces a disminuir cayendo de 251.000 a 223.400 en 2007⁶. El crecimiento anual de las exportaciones, cuya media se había situado por encima del 17 por 100 entre 1995 y 2000, se las vio y se las deseó para alcanzar el 5 por 100 durante los cinco años siguientes⁷. La expansión de la UE mermó la ventaja fiscal irlandesa, al ofrecer los nuevos Estados miembros procedentes del Este acuerdos más lucrativos y salarios mucho más bajos: en 2008 Dell decidió cerrar la emblemática planta de Limerick y desplazar la producción a Lodz. No obstante, el final de la expansión económica no se produjo de la noche a la mañana, pese al desgaste de la infraestructura industrial irlandesa. El sector bancario se situó por delante de la industria en cuanto a creación de empleos, y en 2008 el 14 por 100 de la mano de obra estaba empleada en las finanzas.

La mayor parte de esta expansión se concentró alrededor del Centro Internacional de Servicios Financieros, un satélite de la City de Londres situado en la zona portuaria de Dublín, cuyo régimen regulador era irrisoriamente insuficiente, lo que indujo a los políticos británicos a hablar del «Liechtenstein del Liffey». Los datos económicos también mejoraron gracias a la cada vez mayor utilización de Irlanda como una respetable cámara de compensación para los precios de transferencia de las multinacionales. Los bancos canalizaron tanto capital como les fue posible hacia otro de los pilares que sustentaban la segunda fase del tigre: un sector de la construcción totalmente recalentado que en 2007 representaba prácticamente el 23 por 100 del PNB. El precio medio de la vivienda nueva subió de 67.000 euros en 1991 a 334.000 euros en 2007, momento en el que se estaban construyendo 21 viviendas por cada 1.000 ciudadanos (incluso en España no pasó de las 15). La construcción se convirtió también en la principal fuente de empleo del sector privado, incrementándose el número de puestos de trabajo en la industria un 59 por 100 entre 2000 y 2008⁸.

Alguien podría haber calibrado la debacle que iba a provocar todo este montaje, en caso de producirse una crisis global: los bancos irlandeses habían tomado prestadas vastas sumas de dinero de los mercados internacionales, por lo que podían continuar prestando a los promotores inmobiliarios y permitir que sus coeficientes de capital alcanzaran mínimos sin

⁶ Kieran Allen, *Ireland's Economic Crash*, Dublín, 2009, p. 36.

⁷ Peadar Kirby, *Celtic Tiger in Collapse. Explaining the Weaknesses of the Irish Model*, Basingstoke, 2010, p. 35.

⁸ Véase K. Allen, *Ireland's Economic Crash*, cit., p. 44; P. Kirby, *Celtic Tiger in Collapse. Explaining the Weaknesses of the Irish Model*, cit., p. 41. El empleo en los servicios financieros aumentó un 43 por 100 durante el mismo periodo, mientras que el empleo industrial se contrajo un 9 por 100.

precedentes. Cuando Lehman Brothers se estrelló en septiembre de 2008, se desató la tormenta. El gobierno de Brian Cowen, presa del pánico –y viéndose seriamente comprometido–, ofreció una garantía total sobre los pasivos de las instituciones financieras irlandesas, exponiendo a sus ciudadanos a un potencial batacazo de dimensión varias veces superior al PIB anual de la nación. Poco después, el gobierno dirigido por el Fianna Fáil decidió nacionalizar el Anglo Irish Bank, el tercer mayor banco del Estado, y apuntalar a sus dos principales competidores mediante gigantescas inyecciones de liquidez. El Anglo Irish Bank se especializó en la concesión de préstamos masivos a una reducida clientela: quince de sus clientes acumulaban deudas con el banco de al menos 500 millones de euros cada uno. Las pérdidas de más de 12 mil millones de euros que sufrió el banco en 2009 fueron las más importantes de la historia empresarial irlandesa.

Una vez que se puso en marcha la garantía bancaria, el principal objetivo del gobierno de Cowen fue apuntalar a toda costa el sistema financiero privado. El ministro de finanzas irlandés, Brian Lenihan, se jactó en un principio de haber conformado el «rescate más barato del mundo». A medida que fueron saliendo gradualmente a la luz los podridos cimientos de la banca, el coste previsto de la garantía se elevó exponencialmente: estimaciones realistas lo sitúan actualmente en algún punto entre los 50 y 70 mil millones de euros (en 2008 el PIB irlandés era de algo más de 200 mil millones de euros). Cowen y Lenihan desaprovecharon la oportunidad que se les presentó en 2008 de anular la garantía, teniendo como tuvieron posibilidades legales de hacerlo, ya que tres de los bancos habían ocultado información esencial sobre su solvencia en claro incumplimiento de la Ley del Banco Central de 1971. Pero, como señaló el economista Morgan Kelly, hacerlo hubiera implicado un «desagradable enfrentamiento con el Banco Central Europeo». En cambio, «los bancos alemanes y franceses, cuya solvencia constituía la principal preocupación del BCE, recuperaron su dinero», mientras «los altos directivos de los bancos que causaron la crisis continúan disfrutando de sus suntuosas recompensas. La única dificultad a la que nos enfrentamos es que el compromiso indefinido contraído por el gobierno de cubrir las deudas de los bancos excede ampliamente la capacidad presupuestaria del Estado irlandés»⁹.

Este subsidio ilimitado concedido a los bancos irlandeses y a los titulares de bonos europeos se ha implementado a expensas de cualquier plan para el fomento o mantenimiento del empleo que pudiera tener el gobierno. Mientras los economistas de otros países se preguntan qué sucederá cuando expiren los diversos estímulos financieros, sus homólogos irlandeses no tienen preocupaciones similares: nunca hubo un paquete de estímulos de partida. Durante los dos primeros años de la crisis, el gobierno dirigido por el Fianna Fáil sustrajo 15 mil millones de euros de la economía en una se-

⁹ Morgan Kelly, «If you thought the bank bailout was bad, wait until the mortgage defaults hit home», *The Irish Times*, 8 de noviembre de 2010.

rie de presupuestos de austeridad regresiva. La agresión al salario social ha venido acompañada por la estridente idea general de que tales recortes no tienen por qué acarrear consecuencias funestas para las personas que dependen de los servicios públicos: hay margen suficiente para seguir haciendo ajustes, ya que Irlanda fue indebidamente derrochadora en el gasto durante los años de expansión económica.

Este consenso presta poca atención al tedioso asunto de reunir pruebas. Incluso en el punto álgido del *boom*, la República de Irlanda tenía pocas razones para alardear de su política social. Se situaba en el segundo puesto por la cola en las tablas de pobreza y desigualdad de los países de la OCDE; solo Estados Unidos salía peor parado. La desigualdad aumentó durante el periodo de máximo crecimiento económico, ascendiendo el número de hogares cuyos ingresos se situaban un 50 por 100 por debajo de la renta media del 18 por 100 en 1994 al 24 por 100 en 2001. Otros índices de referencia se desplazaron en la dirección opuesta: la proporción de gasto del gobierno en protección social con relación al PIB ascendía al 20 por 100 en 1993, pero en 2000 se había desplomado hasta el 14 por 100 (apenas la mitad de lo que marcaba la media de la UE)¹⁰.

Incluso la fiable y ortodoxa OCDE no encontró mucho donde rascar cuando en 2008 se le encomendó la tarea de inspeccionar la Administración pública irlandesa: «Entre 1995 y 2000, la tasa real de crecimiento del gasto público fue del 5 por 100, un ritmo considerablemente más lento que el del crecimiento del PIB, que creció al 7,5 por 100». Las políticas implementadas por el Fianna Fáil ya habían reducido el número total de funcionarios en proporción a la población activa, y el salario global de los funcionarios en proporción al PIB¹¹. Este es el «abotargado» sector público irlandés, que ahora se halla avocado a atravesar un periodo de austeridad indefinida, mientras los titulares de prensa ingenian artificiosas diatribas contra los funcionarios del sector público mostrando una monomanía digna de mejor causa: a un columnista no se le ocurrió una pulla más hiriente que lanzar contra los obispos católicos que amparaban a los pedófilos que comparar sus acciones con «la peor clase de ideario de los sindicatos de la Administración pública»¹². La descalificación resultó tan atroz que el propio asesor económico del gobierno, Alan Ahearne, se sintió obligado a protestar:

Mucha de la retórica empleada por los medios de comunicación para referirse al salario y a la reforma del sector público debe considerarse como un intento de los comentaristas peor informados por distraer la atención del autén-

¹⁰ Peadar Kirby, «Globalization, the Celtic Tiger and social outcomes. Is Ireland a model or a mirage?», *Globalizations*, diciembre de 2004, p. 216.

¹¹ Informes de la Gestión Pública de la OCDE, *Ireland. Towards an Integrated Public Service*, París, 2008, pp. 15-16.

¹² Eilís O'Hanlón, «Man of cloth recast as just a jobsworth», *The Sunday Independent*, 21 de marzo de 2010.

tico origen de las penurias económicas por las que atravesamos. El desastre en el que se encuentra inmersa la economía irlandesa deriva en gran medida de la burbuja del precio de la vivienda, no de los problemas de la Administración pública. Probablemente no sea una coincidencia que algunos de los críticos hoy más vocingleros contra el sector público se encuentren entre quienes colaboraban con más furia del *boom* inmobiliario¹³.

Esta acometida se ha reanudado como consecuencia del acuerdo UE-FMI. Sería equivocado creer que los nuevos directores de la economía irlandesa han empujado al gobierno de Dublín a seguir una senda que éste hubiera preferido no pisar: sus sugerencias han sido aceptadas con algo que se aproxima mucho al júbilo. Durante los próximos tres años habrá que sustraer otros 15 mil millones de euros de la economía, con 6 mil millones de euros de recortes concentrados solo en el presupuesto de Lenihan de diciembre de 2010. Este paquete de recortes final, que será el último que Lenihan acometa como ministro de Finanzas, superó con creces las cotas de mezquindad alcanzadas por sus ofertas anteriores. Un *boom* desfigurado por la desigualdad ha dado paso a una crisis económica marcada por los estándares victorianos del reaccionarismo social. Si David Cameron y Nick Clegg necesitan un modelo por el que guiarse, no tendrán que mirar demasiado lejos.

¿Se acabó la fiesta?

El compromiso inquebrantable del Fianna Fáil de proteger un sistema bancario, aun a sabiendas de su total corrupción, y su inexorable determinación de hacer que el peso de la crisis recaiga en el segmento más bajo de la pirámide social suscitarán naturalmente preguntas sobre su hegemonía electoral, siendo un partido al que se ha descrito acertadamente como la institución secular más importante del Estado moderno irlandés. En la década de 1980, un historiador hacía esfuerzos por encontrar analogías europeas con respecto a su extraordinario predominio político: solo los socialdemócratas suecos, los unionistas del Ulster y la democracia cristiana italiana podían incluirse en la misma categoría¹⁴. Dos décadas más tarde, ésta última se ha desvanecido en la memoria, los Unionistas del Ulster se han visto totalmente eclipsados y los socialdemócratas suecos ocupan los bancos de la oposición, mientras que el Fianna Fáil se las ha ingeniado para perpetuarse durante una generación más. El Partido ha estado en el gobierno durante sesenta de los setenta y nueve años transcurridos desde que se hiciera con el poder en 1932. Únicamente en dos ocasiones ha caído su voto por debajo del 40 por 100, y aun entonces solo ligeramente.

¹³ In Fintan O'Toole, «Popular thinking on crisis swept aside», *The Irish Times*, 13 de abril 2010.

¹⁴ Dick Walsh, *The Party: Inside Fianna Fáil*, Dublín, 1986, p. 3.

Los orígenes del Partido residen, por supuesto, en las complicadas circunstancias de la independencia del país. El proceso de radicalización entre 1914 y 1918, a consecuencia de la brutal represión de la Rebelión de Pascua, produjo una victoria aplastante de los nacionalistas republicanos del Sinn Féin [«Nosotros mismos»] en las elecciones de Westminster de 1918; el Partido apartó a un lado a los nacionalistas conservadores partidarios de la ley de autonomía legislativa y marginó a los unionistas respaldados por Londres, haciéndose con 75 de los 105 escaños de la Cámara de los Comunes «irlandesa». El líder del Sinn Féin, Éamon De Valera, proclamó como es debido la República de Irlanda en 1919, iniciando negociaciones con Londres mientras las guerrillas republicanas hostigaban a las fuerzas de seguridad británicas. El acuerdo mutuo establecido en el Tratado de 1921 —el estatus de Dominio, que obligaba a los parlamentarios de Dublín a jurar obediencia al rey británico— aceptaba la partición de la isla, confirmándola mediante la Ley del Gobierno de Irlanda de George Lloyd en 1920: bajo el dominio de la Corona, los seis condados del noroeste serían administrados desde Belfast; los veintiséis restantes, desde Dublín. El Tratado fue ratificado por el Dáil, el parlamento de Dublín, en 1922, estableciendo el Estado Libre Irlandés; pero dividió en dos al Sinn Féin. El sector partidario del Tratado se impuso a sus oponentes por medio de una cruenta, aunque breve, guerra civil; los políticos partidarios del Tratado fundaron el partido conservador Fine Gael [«Raza irlandesa»], reforzado por la afluencia del movimiento fascista de los Camisas Azules en la década de 1930. Lo que quedó del Sinn Féin volvió a dividirse en 1926, cuando De Valera y sus seguidores hicieron las paces con el nuevo régimen. Estos se reagruparon bajo la bandera del Fianna Fáil [«Soldados de Irlanda»] que se alzó como partido mayoritario del Dáil en 1932 y que ha continuado dominando ininterrumpidamente el paisaje político a partir de entonces. Desde 1938 hasta 1989, el Fianna Fáil solía acaparar generalmente el 44 por 100 de los votos preferentes, mientras el Fine Gael languidecía por debajo del 35 por 100, y el anémico Partido Laborista Irlandés hacía esfuerzos por alcanzar el 15 por 100¹⁵.

La hegemonía del Fianna Fáil ha reposado, en parte, en la imagen populista que ha alimentado cuidadosamente desde su nacimiento. Su liderazgo ha reivindicado con frecuencia su natural inclinación hacia el centro izquierda, apodándose incluso «Partido Laborista de Irlanda», aunque un solo vistazo a su historial en el gobierno lo confirma como una formación de centro derecha. En la década de 1930, la retórica del Fianna Fáil tenía un tinte inequívocamente radical, lo que garantizó al partido una base sólida entre los pequeños agricultores y entre la clase obrera de las ciuda-

¹⁵ Los candidatos del Fianna Fáil han recibido con frecuencia más votos procedentes de la clase obrera que toda la izquierda irlandesa junta. En las elecciones de 1977 —sin duda un buen año para el Fianna Fáil— el porcentaje de votos que obtuvieron entre obreros cualificados y no cualificados fue del 54 y el 47 por 100 respectivamente, mientras que el Partido Laborista Irlandés logró el 11 y el 16 por 100. Paul Bew, Ellen Hazelkorn y Henry Patterson, *The Dynamics of Irish Politics*, Londres, 1989, p. 167.

des. Esta base se consolidó mediante la ejecución de reformas sociales, cuyas limitaciones hubieran resultado más evidentes de no haber contrastado tan favorablemente con la suprema indiferencia ante la miseria social del régimen anterior. También se vio afianzada mediante redes de clientelismo astutamente trazadas, que proporcionaban riqueza suficiente como para garantizar lealtad y gratitud personal.

La izquierda ausente

La tarea del Fianna Fáil también se vio facilitada por las deficiencias de la izquierda irlandesa. Una serie de factores estructurales lastraron pesadamente el porvenir de cualquier fuerza de izquierda. En la época de la independencia, el Estado del sur carecía prácticamente por completo de base industrial y no adquirió una mayoría urbana hasta la segunda mitad del siglo. La vertiginosa emigración arrastró a los potenciales descontentos hacia Gran Bretaña, Australia o Estados Unidos, y en la década de 1920 un asombroso 43 por 100 de la población nativa irlandesa vivía fuera del país¹⁶. La cultura religiosa conservadora recibió así un impulso excepcional en su prolongada asociación con las cuestiones de la identidad nacional y de la resistencia a la opresión (Polonia, quizá, sea la única analogía directa a este respecto). Aunque estos factores representaron una pesada carga, no habrían tenido por qué resultar insuperables necesariamente. Después de todo, han surgido movimientos de izquierda mucho más exitosos en países con iglesias poderosas y reaccionarias, grandes poblaciones agrícolas, o en los que la vida política estaba dominada por cuestiones nacionales. Es posible que a la izquierda irlandesa le haya tocado una mala baza, pero también es cierto que, por lo general, ha sido bastante torpe jugando sus cartas.

Para explicar esto es necesario partir, una vez más, de los problemas que afectaron al movimiento por la independencia. En 1919, mientras el clamor a favor de la soberanía nacional resonaba de Moscú a Versalles, un Sinn Féin apoyado por un incontenible mandato popular se enfrentó a un oponente gravemente debilitado por el cansancio de la guerra, la agitación obrera y la crisis económica; el unionismo como fuerza hegemónica conocía su fin. ¿Por qué se rindió el movimiento irlandés tan pronto aceptando la partición y el estatus de Dominio, en lugar de continuar luchando hasta lograr un resultado más favorable? Un factor subjetivo determinante radica con seguridad en la línea divisoria que separaba el liderazgo político y el militar, la cual ha seguido influyendo decisivamente en la política republicana hasta la actualidad, un cisma este que para los revolu-

¹⁶ Esto contrasta con las cifras del 15 por 100 de Noruega, el 14 por 100 de Escocia y el 11 por 100 de Suecia de la década de 1920. Véase Terence Brown, *Ireland. A Social and Cultural History, 1922-2002*, Londres, 2004, p. 10. Brown señala: «La continua diáspora irlandesa, a partir del periodo de hambruna, hizo que la población se mantuviera como un todo prácticamente estable durante la mayor parte del periodo moderno».

cionarios cubanos o vietnamitas habría resultado desconcertante. La razón de esto radica en parte en el muy temprano surgimiento del movimiento irlandés, más próximo a los ideales de 1848 que a las revueltas anticoloniales de inspiración socialista que sacudieron el siglo xx.

El líder feniano James Stephens (1825-1901) fue uno de los revolucionarios más capaces de su tiempo; pero, habiéndose formado en la clandestinidad republicana parisina, heredó de ésta la predilección por el enfoque conspirativo y blanquista de la revolución. Esto aseguró que el levantamiento fallido de 1867 fuera indigno del movimiento que Stephens había construido. En las décadas siguientes, Michael Davitt capitaneó una ruptura parcial con este modelo político, sacando a la luz la actividad política de un sector del movimiento feniano a través de la Liga Agraria. Pero Davitt fue anatematizado por la mayoría de la Irish Republican Brotherhood (IRB), que seguía siendo una organización secreta, a la que solo podía accederse mediante juramento; y fue incapaz de impedir que Charles Parnell cosechara los frutos políticos de la agitación promovida por Liga Agraria en beneficio del Home Rule Party y de que la utilizara para cimentar su alianza con Gladston en Westminster. El potencial de una agitación política masiva, que no habría mostrado respeto alguno por las conveniencias del orden constitucional británico, quedó abortado.

En vísperas de la Gran Guerra, la Irish Republican Brotherhood [Hermandad Republicana Irlandesa] era una secta minúscula e irrelevante; las autoridades británicas habrían sin duda considerado a la sindicalista Unión General de los Trabajadores y del Transporte de Jim Larkin y James Connolly como una amenaza mucho mayor contra el orden establecido. La crisis de la Autonomía Legislativa, que precedió inmediatamente a la Primera Guerra Mundial, dio a los republicanos la oportunidad de asumir el liderazgo de un auténtico movimiento de masas –los Voluntarios Irlandeses, constituidos para defender al autogobierno irlandés de la violenta resistencia unionista–, actuando a través de secretas intrigas a espaldas de sus miembros. Resultaba típico del enfoque político de la IRB que muchos Voluntarios ignorasen que estaba planeándose una insurrección contra la autoridad británica hasta el mismo momento en que estuvieron en sus puestos el día de la Rebelión de Pascua. Solo después de que la insurrección fuese aplastada, Michael Collins asimiló las lecciones militares de 1867 y 1916, rompiendo con el enfoque estático de la guerra revolucionaria que había garantizado su derrota en sendas ocasiones. Su experimento pionero en la guerra de guerrillas ofreció un modelo que los movimientos anticoloniales de Asia y de África estudiarían con entusiasmo. Pero los nuevos comandantes del IRA que siguieron a Collins en la aplicación de las tácticas de guerrilla cuando se reanudó la lucha, ignoraron por lo general el ámbito político, dejándolo en manos de hombres como De Valera y Arthur Griffith, que hubieran preferido ver al IRA levantarse, luchar y ser masacrado para que fuera reconocido como un ejército caballerosamente burgués y no como una banda de rufianes y de trapicheros.

Otorgar a tales hombres la responsabilidad exclusiva de dirigir las negociaciones con Gran Bretaña constituía el camino más seguro para que el movimiento independentista se viese defraudado. Los republicanos comprendían todavía peor la resistencia laboral contra Gran Bretaña, que tanta importancia tuvo: la huelga general en contra del reclutamiento obligatorio, el soviet de Limerick, y el boicot al Ejército británico por los ferroviarios fueron todos orquestados por el movimiento de la clase obrera. Los republicanos ortodoxos concluyeron que los obreros habían cumplido meramente con su deber como patriotas y no extrajeron conclusión alguna sobre la dimensión de clase que tuvo la lucha antiimperialista.

Era de prever que las personalidades de la sociedad irlandesa, que habían trasladado sus lealtades del Home Rule Party al Sinn Féin al darse cuenta de que la marea de opinión nacionalista era imparable, aceptarían un arreglo aunque éste no estuviera a la altura de los objetivos republicanos: su preocupación principal en 1920-1921 consistía en establecer una nueva autoridad política que pudiera mantener el descontento obrero y agrario a raya y defender su posición en la jerarquía social. Tales elementos no tenían la menor intención de arriesgarse a que se produjeran nuevas agitaciones por mor de la Partición o del Juramento. Nada de esto debe sorprender ni afligir; lo que resulta chocante, no obstante, es la incapacidad de los republicanos contrarios al Tratado para comprender lo que estaba sucediendo. Un pequeño grupo de socialistas, situados en el bando de oposición al Tratado, observaron la naturaleza de clase de la escisión, y el comandante del IRA, Liam Mellows, apuntó en la misma dirección al identificar a la gente «con intereses económicos en el país» como la base de apoyo al Tratado, antes de ser ejecutado por el Estado Libre en 1922. Más típica resultó la actitud de Liam Lynch, el jefe del Estado mayor del IRA: cuando el Partido Comunista de Irlanda, todavía en ciernes, le exhortó a adoptar un programa de reivindicaciones políticas y económicas, que con toda seguridad habría inducido a la opinión pública a polarizarse en función de su clase, Lynch se limitó a replicar que él era un soldado, no un político, y siguió adelante con una resistencia puramente militar y moral en contra del Tratado, cuyo fracaso estaba garantizado.

Los republicanos no fueron los únicos a los que debe culparse por este enfoque condenado al fracaso. Tras la ejecución de Connolly por su papel en la Rebelión de Pascua, sus presuntos herederos en el liderazgo de la Unión General de los Trabajadores y del Transporte y del Partido Laborista abjuraron por completo de su responsabilidad de proporcionar a la clase obrera una voz independiente. El error de no participar en las elecciones de 1918 fue la primera de las muchas concesiones que se hicieron al nacionalismo burgués, que culminó con el apoyo al gobierno partidario del Tratado por parte de los laboristas (en aquella época Larkin estaba cumpliendo condena en Nueva York por agitación contra la guerra, por lo que no tuvo capacidad de influir en el rumbo que estaban tomando los acontecimientos hasta su regreso a Irlanda). Esto cuestiona la credibilidad de quienes sugieren, como han hecho algunos historiadores radicales, que duran-

te este periodo se podría haber producido una revolución socialista en Irlanda si los dirigentes del movimiento obrero organizado hubieran sido mejores. Pero no es ciertamente una ilusión imaginar que podría haber surgido un movimiento de izquierdas más fuerte, al que hubiera correspondido un papel importante en la oposición al Tratado. Esto hubiera hecho que la política del nuevo Estado se inclinase en una dirección muy distinta.

Los achaques del laborismo

La conducta del laborismo durante este periodo marcó la pauta de los prácticamente ochenta años siguientes de su existencia. Decir que el laborismo irlandés, como su homólogo británico, ha tenido un historial pobre sería darle en verdad un trato excesivamente amable. Resulta revelador que en la década de 1940, cuando el gobierno de Attlee ocupaba el poder en Londres, los dirigentes del laborismo irlandés estaban profundamente preocupados ante la posibilidad de que pudiese llegar a pensarse que los dos partidos laboristas tenían algo en común y de que se vieran asociados al peligroso radicalismo de Attlee y Bevin. El Partido Laborista Irlandés optó por encogerse de hombros ante el conservadurismo que reinaba en el panorama político, incluso cuando su propio futuro se vio comprometido a causa de este servilismo. Ha sido típicamente el socio callado de coalición, proporcionando sostén a los gobiernos conservadores del Fine Gael, durante las ocasionales temporadas en que el Fianna Fáil ha estado en la oposición¹⁷.

Ha habido dos ocasiones en la historia del laborismo en que éste se alzó como fuerza independiente de izquierdas, desafiando a los dos partidos conservadores con un programa propio: una vez en la década de 1940 y otra más en la de 1960. En ambas ocasiones se obtuvieron progresos electorales significativos aventajando al Fianna Fáil como partido mayoritario en Dublín; y en ambas ocasiones el experimento terminó en un patético fracaso. En la década de 1940, el laborismo sucumbió ante el chantaje de una escisión de derechas urdida por elementos reaccionarios del movimiento sindical, purgó a sus miembros más activos y regresó mansamente al redil. En la década de 1960, la dirección del partido consintió que se amañaran los votos durante un congreso bochornoso para desbancar a un sector de izquierdas que había deparado al partido la cuota de votos más alta de toda su historia, fraguando una alianza con el Fine Gael que condujo al laborismo a una drástica pérdida de apoyo¹⁸. Estas experiencias

¹⁷ La media ha sido de tres años por década durante el periodo de posguerra: 1948-1951; 1954-1957; 1973-1977; 1982-1987; 1994-1997.

¹⁸ Se puede encontrar una explicación brillante de esto en Niamh Puirseil, *The Irish Labour Party 1922-73*, Dublín, 2007. Después de abandonar la postura en contra de la coalición y de participar en dos gobiernos dirigidos por el Fine Gael, la cuota de voto nacional del laborismo cayó de un 17 por 100 en 1969 a un 6 por 100 en 1987 (con un descenso del 28 por 100 al 7 por 100 en la capital de la nación).

inducen a pensar que las concesiones continuadas que el laborismo ha rendido a la ideología conservadora no se explican como un medio desafortunado pero inevitable de adaptarse a unas circunstancias que escapaban a su control, tal como aseveran frecuentemente sus dirigentes. La pusilanimidad del partido ha perjudicado sus propias perspectivas y ha afianzado el conservadurismo de la política irlandesa. También ha resultado de inestimable utilidad para el Fianna Fáil, cuyos dirigentes pocas veces se muestran tan contentos como cuando pueden mofarse del laborismo por su moderación y respetabilidad. A Seán Lemass le deleitaba especialmente esta línea de argumentación:

Supé a través del diputado [laborista] Tully que alguien acusó al Partido Laborista de estar volviéndose «rojo», lo que hirió profundamente sus sentimientos. ¿Podría desvincularme de una vez por todas de cualquier insinuación por el estilo? El Partido Laborista es, y ha sido siempre, el elemento más conservador de nuestra comunidad. Lejos de estar volviéndose «rojo», el Partido Laborista está sonrojándose [...] el Partido Laborista es una formación de hombres afales, respetables, dóciles e inofensivos; nunca parlamento alguno fue honrado con una formación más inofensiva¹⁹.

De hecho, en cualquier momento que el Fianna Fáil se ha enfrentado a un serio desafío planteado por la izquierda, procedente bien del laborismo o de otras fuerzas políticas, ha abandonado con presteza la postura de «centro derecha» y no ha tardado en enseñar los dientes como una formación esencialmente conservadora. Aunque durante sus primeras dos décadas en el poder el Fianna Fáil, como cualquier movimiento nacionalista que se precie, afirmó sin ambages estar por encima de las sórdidas divisiones de clase, no dejó de cultivar una burguesía nacional a la que protegió tras un muro de aranceles y a la que dulcificó la sumisión irlandesa al capital británico. Tras la ruptura con el modelo proteccionista en la década de 1950, se rebajó este objetivo: entonces la prioridad era elevar el PIB asegurándose una expansión más amplia de la inversión extranjera y de los mercados de exportaciones.

El estilo empleado por la dirección del Partido cambió enormemente durante el citado periodo, pasando del austero tradicionalismo de De Valera a la opulencia de Charles Haughey, quien se hizo con las riendas del Fianna Fáil a finales de la década de 1970. Siendo entonces un deber patriótico de los capitanes de la industria irlandesa hacerse más ricos, difícilmente podría culparse a Haughey de extraer la conclusión de que también él debía aspirar al próspero estilo de vida que corresponde al líder de una nación. Pero los escándalos de corrupción en los que Haughey se vio envuelto llegaron a poner en peligro la imagen populista del Fianna Fáil, que no podía soportar muchas más revelaciones acerca de sobres de papel atestados de billetes. Para reparar el daño infligido por Haughey, sus su-

¹⁹ P. Bew, E. Hazelkorn y H. Patterson, *The Dynamics of Irish Politics*, cit., p. 142.

cesores lavaron la imagen del Partido seleccionando a Bertie Ahern como nuevo líder en 1994. Hábil agente político, con un don para hablar en público durante horas sin llegar a transmitir ninguna información, Ahern adoptó una actitud pragmática para distanciarse del descrédito en el que había caído Haughey, e incluso reivindicó ser uno de los pocos socialistas que quedaban en la vida política irlandesa. Pero esta operación de lavado de cara no alteró en nada el poder del dinero para modelar a su antojo la toma de decisiones al más alto nivel: las transacciones puras y duras de la era Haughey se sustituyeron simplemente por una relación más eficaz entre las élites políticas y económicas, siguiendo las mejores costumbres de las democracias capitalistas. En el lenguaje liso y llano que Ahern con tanto ahínco se esforzó en evitar, el Fianna Fáil sustituyó los turbios favores personales de la época de Hughey por una corrupción sistemática y organizada, haciendo gala de una sumisión ciega a las empresas que resultaba inédita incluso dentro de los estándares de la época.

Esta orientación de clase fundamental determinó la estrategia del Fianna Fáil durante los recientes años de intenso crecimiento económico. Ahora que la crisis económica le ha sometido a un escrutinio sin precedentes, la cúpula del partido debe arrepentirse amargamente de la despreocupación con la que actuó durante los buenos tiempos. Una cosa es descubrir que el 40 por 100 de las donaciones recibidas por el Partido entre 1997 y 2007 procedían de constructores y promotores inmobiliarios. Otra, enterarse del vínculo existente entre la política y la empresa que, de ser representado por un grupo teatral brechtiano de agitación, resultaría imperdonablemente didáctico: a saber, lo bien surtida que estaba la carpa del Fianna Fáil en la edición anual de las carreras de caballos de Galway por un elenco encantadoramente vulgar de personalidades del sector de la construcción, que estaban ansiosas por firmar un nuevo cheque para sus benefactores políticos. Estando tan bien documentado el sórdido nexo entre el Fianna Fáil y el complejo banca-construcción, pocos se sienten inclinados a considerar su gestión de la crisis como desinteresada, objetiva y neutral. No hay duda de que Brian Cowen daría cualquier cosa porque un único detalle informativo dejase de ser de dominio público: el hecho de que se dirigía a Seán Fitzpatrick –desacreditado antiguo presidente del Anglo Irish Bank, convertido hoy en figura de odio nacional al descubrirse los engaños y la corrupción en los que se vio envuelto– como «Seánie».

La hegemonía política que el Fianna Fáil ha mantenido continuamente durante los últimos veinte años no ha dejado traslucir el cambio que ha tenido lugar en la base sobre la que se asienta su apoyo al ceder paso las lealtades tribales heredadas de la generación anterior a una forma de adhesión mucho más pragmática²⁰. Tras tropezar accidentalmente con la fama de ser competentes y aterrizar nuevamente en el cargo justo en el

²⁰ En 1981 la proporción de indecisos era de menos del 40 por 100; en 2002 había aumentado hasta el 75 por 100. Véase K. Allen, *Ireland's Economic Crash*, cit., p. 31.

momento en que la economía hacía grandes progresos, el Fianna Fáil regresó al poder en 2007 gracias a un electorado ansioso ante lo que le deparaba el futuro y con miedo a que la situación se complicase verdaderamente. Ahora que tanto la seguridad que infundía como su honestidad han perdido toda credibilidad, el Partido atraviesa por graves apuros. La fuerza le venía con frecuencia del clientelismo fuertemente arraigado en el sistema político irlandés, haciendo gala de un consumado talento natural para resolver cuestiones de campanario. Pero este recurso resulta inadecuado cuando todas las preocupaciones locales deben observarse a la luz de la crisis nacional²¹.

II. EL ASILO DE POBRES DE GRAN BRETAÑA

A primera vista, puede parecer que el horizonte económico resplandece más intensamente del otro lado de la frontera: Irlanda del Norte no ha sufrido una caída tan brusca como la de su vecino del sur, pero esta posición aparentemente envidiable es en sí misma una consecuencia de su largo declive. El corazón industrial de Belfast y del Valle Lagan –hogar en tiempos de los más grandes astilleros del mundo– ha seguido el mismo camino que las zonas industriales de Sheffield y Detroit. Este desgaste de su tradicional poderío económico ha tenido el efecto perverso de proteger a Irlanda del Norte de los peores estragos de la crisis global. La región se ha beneficiado de la presencia estabilizadora de un sector público de extraordinarias dimensiones: ningún miembro de la OCDE tiene a más del 25 por 100 de su población activa contratada por el Estado, pero en Irlanda del Norte el sector público es responsable del 30 por 100 de los puestos de trabajo. Esto es posible gracias a la inyección de fondos que Irlanda del Norte recibe de Westminster: si se le retirara este apoyo financiero, la economía de la región se desplomaría en cuestión de semanas.

²¹ Se ha insinuado que el responsable de los problemas actuales es el propio sistema electoral: «Si el ciclo de grandes altibajos de los últimos treinta años nos ha enseñado algo es que nada llegará a cambiar hasta que abandonemos el sistema de distritos electorales que fomenta la política parroquial, sacrificando el bien común en favor de estrechos intereses. Deshacernos de nuestro sistema electoral [...] traería consigo una auténtica revolución en las formas de actuación políticas», Shane Coleman, «Politicians are a part of the solution», *Sunday Tribune*, 12 de diciembre de 2010. Puede que sea cierto que a los políticos irlandeses se les asigna con frecuencia el papel de representar a los votantes individuales ante las entidades estatales, y es posible que el sistema electoral haga que los horizontes se vuelvan todavía más estrechos, al ser su carácter proporcional más competitivo que los sistemas de votación mayoritarios. El sistema de representación proporcional mediante voto único transferible –distritos multinominales en los que los votantes marcan a sus candidatos según su orden de preferencia– fue introducido en Gran Bretaña en 1920 (como en el caso de la transición del *apartheid* en Sudáfrica, la protección de las minorías era una cuestión prioritaria). Puede que haya razones merecidas para que se lleve a cabo una reforma electoral; pero establecer vínculos entre esta necesidad de cambio y el declive económico es una estafa descarada para distraer la atención de la relación existente entre las personalidades políticas y económicas: ni los banqueros ni los promotores inmobiliarios aguardaban en las oficinas de las circunscripciones municipales para conseguir favores de los diputados del Fianna Fáil.

Tal dependencia del apoyo exógeno no es un subproducto exclusivo del declive industrial. El impacto de las tendencias de la economía global que devastaron los centros productivos del fordismo clásico se vio acompañado por una guerra de baja intensidad: según determinadas estimaciones, el conflicto por sí solo fue responsable nada más y nada menos que de la destrucción de un 25 por 100 de los empleos en la producción²². En el mismo periodo, sucesivos gobiernos británicos incrementaron las cotas de apoyo financiero con la esperanza de que la economía sirviese para compensar el fracaso de los esfuerzos políticos. Aunque el sub Estado ha dependido siempre del apoyo externo para hacer cuadrar sus cuentas, el deslizamiento hacia una forma perversa de dependencia de los subsidios británicos no se inició hasta el estallido de la lucha armada a finales de la década de 1960. En 1970 la subvención anual era de menos de 100 millones de libras; en 1985, había llegado a 1.700 millones de libras, unas 1.100 libras por cada habitante. Como resultado de todo esto, la población de Irlanda del Norte llegó a disfrutar de un nivel de vida muy por encima de lo que cabría esperar de la productividad de su esfera económica.

Puede que la guerra haya agravado los problemas del sector productivo, pero su fin no ha arrojado ningún claro «dividendo de paz». Durante los primeros años del milenio, el desempleo había disminuido sustancialmente, pero la poco ortodoxa estructura de la economía continuaba prácticamente inalterada. Los esfuerzos por imitar al Estado del sur mediante la captación de inversión extranjera, han resultado infructuosos en su mayor parte: un estudio concluía que la República recibía veinte veces más inversión extranjera directa que Irlanda del Norte en proporción a su tamaño, una brecha en gran medida atribuida al tipo mucho más bajo del impuesto sobre sociedades de la primera²³. Políticos unionistas y nacionalistas han aceptado por igual esta explicación monocausal del superior rendimiento de la economía del sur, algo que subyace tras la reivindicación por la armonización de los tipos impositivos a uno y otro lado de la frontera. Hasta el momento, el Tesoro británico se ha opuesto a lo que el Reino Unido consideraría una desviación sin precedentes en la política económica regional²⁴. La descripción en la década de 1980 de Irlanda del Norte como una «economía de asilo para pobres» todavía tiene sentido:

Una gran parte de su población está en paro. Aquellos que no lo están se ocupan esencialmente de servir o de controlar a los demás, a través de las prestaciones de salud, educación, distribución minorista, construcción, seguridad

²² Bob Rowthorn y Naomi Wayne, *Northern Ireland. The Conflict*, Cambridge, 1988, p. 94.

²³ Jim Smyth y Andreas Cebulla, «The glacier moves? Economic change and class structure», Colin Coulter y Michael Murray (eds.), *Northern Ireland after The Troubles. A Society in Transition*, Manchester, 2008, p. 180.

²⁴ Como en el caso de su vecino del sur, la economía de Irlanda se ha beneficiado del apoyo de la UE, recibiendo 1.700 millones de libras entre 1989 y 1999: una prueba suficiente de que la financiación de Bruselas no basta para remediar a largo plazo las debilidades estructurales sin la ayuda de otros estímulos.

o servicios sociales [...]. Como el típico asilo para pobres, está soportada por los impuestos recaudados en una comunidad externa, ofreciendo muy poco a cambio. Si se la forzara a vivir por sus propios medios, Irlanda del Norte experimentaría una caída catastrófica de los niveles de vida²⁵.

Las palabras del procónsul británico, Peter Hain, tienen una carga amenazante. En 2006, Hain alertó de que «no hay perspectivas de que el *statu quo* prevalezca», insistiendo en que «la forma actual de la economía no es sostenible a largo plazo. Tenemos que volvernos más competitivos, menos dependientes de un sector público abotargado a base de enormes subsidios estatales»²⁶. Pocas dudas puede haber de que sus opiniones expresaban un consenso bipartidista que agrupa a la clase política británica, que confía en que la Irlanda posconflicto resulte una carga mucho más leve. Cameron dio voz a tales pensamientos durante la campaña electoral británica, y Osborne se ha trazado como objetivo realizar en Irlanda del Norte unos recortes estimados en 4.000 millones de libras durante los próximos cuatro años²⁷. Puede que el impacto directo de la crisis en Irlanda del Norte haya sido menos catastrófico que en otros lugares, pero al extremarse la determinación de reconsiderar la ayuda de la que depende la región, sus consecuencias a largo plazo pueden resultar devastadoras.

Como de costumbre, en Irlanda del Norte no pueden plantearse iniciativas económicas sin señalar su probable mediación comunitaria. Tradicionalmente, la pobreza ha recaído con especial intensidad sobre la minoría católica: en 1971 la tasa de desempleo entre los varones católicos ascendía al 17 por 100, frente al 6 por 100 de los protestantes; una década más tarde, las cifras eran del 30 y del 12 por 100 respectivamente. La tendencia de los últimos años ha conducido a una nivelación moderada de los mencionados desequilibrios intercomunitarios, si bien los católicos continúan en condiciones notablemente peores que los protestantes: aunque la proporción de aquellos respecto a las personas que perciben rentas bajas se redujo de un 58 a un 55 por 100 desde comienzos de la década de 1990 hasta finales de la misma, ésta última cifra continúa siendo desproporcionadamente elevada²⁸. Una relativa oscilación de las pautas de desempleo a favor de los católicos refleja el declive del sector industrial (la construcción naval y la producción de máquina-herramienta fueron bastiones protestantes tradicionalmente), el crecimiento experimentado por

²⁵ B. Rowthorn y N. Wayne, *Northern Ireland. The Conflict*, cit., pp. 98-99.

²⁶ J. Smyth y A. Cebulla, «The glacier moves? Economic change and class structure», cit., p. 188.

²⁷ Se ha calculado que el 40 por 100 más pobre de la población perderá más de un 5 por 100 de sus ingresos netos como resultado de los cambios fiscales y de las prestaciones sociales que se introducirán entre 2010 y 2015. Véase Institute for Fiscal Studies, «The Impact of Tax and Benefit Reforms to be Introduced between 2010-2011 and 2014-2015 in Northern Ireland», Londres, 2010, p. 9.

²⁸ J. Smyth y A. Cebulla, «The glacier moves? Economic change and class structure», cit., p. 185. Los mismos autores realizaron una investigación que identifica a un 36 por 100 de los hogares católicos como «pobres», al tiempo que sitúa a un 25 por 100 de los hogares protestantes en la misma categoría.

el sector servicios y el impacto de las leyes antidiscriminación en las políticas de contratación.

Plantear la situación comparativa de protestantes y católicos en Irlanda del Norte sin tomar en consideración las divisiones intracomunitarias resulta ahora menos lícito que nunca. Desde luego, siempre resultó desencaminado hablar de «protestantes» como de un bloque uniforme que acapara privilegios en tanto que colectivo: es posible que los unionistas de clase obrera hayan recibido una porción mayor del desgraciadamente insuficiente pastel, pero sus ventajas sociales difícilmente podían compararse con las de la burguesía Orange. La repercusión de la posición de clase en la determinación de los logros sociales ha aumentado sustancialmente desde que se iniciara el enfrentamiento armado a finales de 1960. Los católicos de clase media han sacado provecho del espacio abierto por el movimiento de los derechos civiles en la década de 1960, copando una cuota cada vez mayor de los empleos especializados y de los puestos directivos, especialmente dentro de la Administración pública. La clase obrera protestante, por otro lado, han sufrido un retroceso al agotarse los puestos de trabajo destinados a operarios cualificados. Trece de los quince distritos administrados por el gobierno municipal, en los que los resultados escolares han sido más desfavorables, se sitúan en zonas donde residen protestantes de clase obrera.

Un determinismo económico de corte ingenuo sugeriría que estos reajustes producidos con respecto a la clase y a las diferencias étnicas, plantean un panorama favorable para el surgimiento de una unión transcomunitaria de la clase obrera, en pos de una programa económico radical o al menos progresista. En la medida en que los asuntos económicos sigan siendo planteados y comprendidos desde una perspectiva comunitaria, en lugar de afrontarlos desde una visión de clase, este halagüeño panorama continuará siendo una quimera. Hace un cuarto de siglo Geoffrey Bell alertaba de que «sería socialismo de la peor calaña imaginar que confinarles a las estrecheces económicas de los católicos forzaría a los trabajadores protestantes a replantearse completamente sus convicciones más arraigadas»²⁹. Esa advertencia no ha perdido valor alguno, ahora que la «igualdad de la miseria» parece quedar a un tiro de piedra.

Lealtad equivocada

Estas tendencias socioeconómicas se perfilan contra un sistema político obcecadamente polarizado a lo largo de líneas sectarias. El Acuerdo del Viernes Santo de 1998 estableció una Asamblea de Irlanda del Norte que funcionaría en virtud del consociativismo, requiriendo el apoyo de una mayoría de ambas comunidades para tomar todas las decisiones impor-

²⁹ Geoffrey Bell, *The British in Ireland: A suitable case for withdrawal*. Londres, 1984, p. 72.

tantes³⁰. Tras cincuenta años de dominio exclusivo de los unionistas después de la partición seguidos de otros veinticinco de autoridad directa desde Londres tras el derrumbamiento del sistema de Stormont en 1972, estaba previsto que la comunidad católica/nacionalista se alzara al fin en la administración de Irlanda del Norte con una voz estructurada y proporcional (la proporción entre protestantes y católicos en la población de la región es de 55 a 45 aproximadamente, habiendo crecido la parte católica a ritmo constante con el paso del tiempo). Pero las esperanzas de que pronto se formase un gobierno estable de poder compartido cedieron paso a una prolongada confrontación entre el Sinn Féin y el líder unionista y partidario del Acuerdo, David Trimble, en torno a la deposición de las armas del IRA. La asamblea quedó interrumpida en 2002; la administración directa desde Londres se reanudó. Cuando las siguientes elecciones restituyeron al PDU, contrario al Acuerdo del Viernes Santo, junto al Sinn Féin como partidos mayoritarios, daba la impresión de que la suspensión sería permanente: el dirigente octogenario del Partido, Ian Paisley, había pasado toda su carrera denunciando el gobierno de poder compartido fuera cual fuese el partido nacionalista, eso con independencia de que fuera el brazo político del IRA.

Su drástica conversión a un acuerdo para compartir el poder durante las conversaciones de Saint Andrews en 2006 se ha atribuido a la propuesta efectuada por el Tesoro británico, demasiado buena como para ser rechazada, así como a las concesiones realizadas por el Sinn Féin en materia de competencias en materia de policía. A la postre, Paisley fue víctima de su propio éxito: tras ver coronada una vida dedicada a la oposición destructiva, ascendiendo finalmente a la cúpula de la jerarquía unionista, el demagógico reverendo se vio forzado a reconocer que ningún gobierno de Londres aceptaría regresar al viejo sistema de autoridad sectaria, en manos de una sola de las comunidades, arriesgándose con ello a avivar una nueva insurgencia republicana, justo cuando se había logrado controlar la anterior. Si quería gozar de los frutos de su triunfo político, Paisley iba a tener que decir que «sí» por vez primera. En mayo de 2007, un nuevo gobierno tomó posesión del cargo en Stormont, con Paisley como primer ministro y Martin McGuinness del Sinn Féin como viceprimer ministro. El líder del PDU fue sustituido al año siguiente por su pupilo Peter Robinson: los incondicionales del PDU consideraban la relación de Paisley con McGuinness excesivamente cordial, al tiempo que su hijo Ian ocasionaba dificultades adicionales, al desatar un revuelo que involucraba a promotores inmobiliarios de oscura reputación, comprometiendo su propia posición en la jerarquía del Partido y debilitando el control del clan Paisley sobre el mismo. Desde entonces, el propio Robinson se ha visto

³⁰ Los miembros de la Asamblea son elegidos mediante el sistema de representación proporcional de voto único transferible vigente en la República, aunque en Irlanda del Norte todavía se elige a dieciocho representantes para la Cámara de los Comunes de acuerdo con el sistema de votación mayoritario.

sacudido por un escándalo, en el que está involucrada su esposa –también política del PDU–, que liga irregularidades financieras a una situación de intenso bochorno personal, si bien ha logrado contener hasta el momento los desafíos lanzados por los inamovibles opositores al gobierno de poder compartido. Estando el unionismo dividido y desmoralizado, el Sinn Féin se ha convertido en el partido de mayores dimensiones, coronando los sondeos de opinión en las elecciones al Parlamento Europeo en 2009, y haciéndose con el mayor número de votos, aunque no de escaños, en las elecciones generales británicas de 2010.

Muchos fueron los que anticiparon la fragmentación en dos bloques sectoriales, que correrían en paralelo a líneas de clase, como consecuencia de los alto el fuego decretados por los grupos paramilitares en la década de 1990. Los partidarios de izquierda del Acuerdo del Viernes Santo tenían la esperanza de que unionistas y nacionalistas de clase obrera, que habían circunscrito sus discrepancias a cuestiones de índole constitucional tras haber aceptado el marco establecido por el Acuerdo, encontrasen una voz propia en asuntos sociales y económicos, con el fin de desafiar a las elites comunitarias establecidas. Los partidos instituidos por paramilitares lealistas –Fuerza de Voluntarios del Ulster y la Asociación en Defensa del Ulster– fueron identificados como posibles catalizadores de este proceso en el seno del bloque unionista. El brazo político de Fuerza de Voluntarios del Ulster, el Partido Unionista Progresista, parecía un candidato especialmente prometedor para desempeñar este papel: liderado por David Ervine, un antiguo paramilitar enormemente elocuente, se identificaba a sí mismo como «socialista», reconocía la discriminación a la que fueron sometidos los católicos durante el antiguo régimen de Stormont y hablaba sobre la necesidad de establecer una política de clase. Hay que reconocer que los conocimientos del PUP en materia de socialismo debían más a Ernest Bevin que a John Maclean, pero incluso la política tradicional del laborismo británico representaría una desviación fundamental en el seno del unionismo.

Cuando los representantes lealistas interrumpieron con abucheos al veterano y fanático de Paisley, mientras éste denunciaba la «capitulación» del Acuerdo del Viernes Santo, en 1998, parecía posible que una oleada de insubordinación social se esparciese entre la clase obrera protestante por primera vez desde el momentáneo florecimiento del Partido Laborista de Irlanda del Norte en la década de 1960. Diez años después aquellas esperanzas han resultado infundadas. El cambio principal experimentado en el seno del unionismo ha sido el derrumbe del otrora hegemónico Partido Unionista del Ulster al enfrentarse al desafío lanzado por el PDU de Paisley, quien le acusó de traición, apostasía y transigencia con el programa nacionalista. También ha habido un factor de clase en la rivalidad existente entre los Unionistas del Ulster y el PDU: el primer partido ha sido considerado merecidamente como un vehículo de la burguesía, de la gran burguesía y de la todavía mayor burguesía, mientras que la mayor parte del grupo que conformaba la jefatura del PDU provenía de la clase

media baja, dirigiendo parte de su fuego contra el unionismo de «clase alta», tal como lo practicaban las damas y los caballeros del Partido Unionista del Ulster³¹. Ahora bien, el PDU ha sido capaz de lanzar este mensaje de resentimiento de clase sin por ello dejar de comprometerse totalmente con la economía neoliberal. Desde que se produjera el cambio total de postura política de 2007, los sucesores de Paisley en la jerarquía del PDU han gastado considerablemente más tiempo preocupándose por el partido descaradamente retrógrado Voz Unionista Tradicionalista que por el lealismo de clase obrera.

De hecho, probablemente nunca los paramilitares lealistas ofrecieron un punto de partida prometedor para corriente progresista alguna. El objeto principal de su campaña había sido el asesinato al azar de civiles católicos, y reclutaron a los cuadros apropiados para desarrollar tales actividades. Desde la firma del Acuerdo del Viernes Santo, muchos de estos mandos han degenerado en una narcoburguesía lumpen, que mantiene una relación parasitaria con las comunidades en las que opera. Este deslizamiento hacia un burdo mundo de todoterrenos, cadenas de oro y sofás de cuero fue simbolizado por el comandante de la Asociación de Defensa del Ulster de Shankill Road, Johnny Adair, cuya egomanía alimentada por las drogas provocó toda una serie de altercados violentos. Los elementos lealistas de Belfast han añadido recientemente un nuevo ingrediente a su mezcla de gangsterismo patriotero al organizar ataques contra inmigrantes de Europa del Este, que forzaron a docenas de gitanos a abandonar la ciudad temiendo por sus vidas en 2009. Aunque puede que la presencia de tales elementos antisociales y destructivos impida a los paramilitares lealistas plantear un programa político positivo dirigido a la clase obrera protestante, se encuentran en una posición firme para bloquear la emergencia de cualquier fuerza alternativa que pudiera amenazar su dominio. A Mark Langhammer, un concejal laborista independiente, entre cuyos distritos se cuenta el bastión lealista de Rathcoole, le volaron el coche por órdenes del jefe local del ADU, John Gregg, al que dedicaba palabras sorprendentemente generosas:

Gregg, de hecho, no era el peor de todos, en el sentido de que no vivía por todo lo alto ni te restregaba el dinero en la cara, pero se creía todo lo que decía sobre la necesidad de mantener el control de la ADU. La bomba fue un mensaje, un disparo de advertencia dirigido a mí³².

Gregg fue asesinado más tarde por partidarios de Johnny Adair. El dramaturgo Gary Mitchell también se vio forzado a abandonar su casa de Rathcoole tras sufrir un ataque con cócteles molotov de los paramilitares, una

³¹ Este tema estaba subordinado por completo al triunfalismo sectario y al alarmismo que representaron las especialidades de Paisley durante la mayor parte de su vida política, y que no debería confundirse con ningún tipo de análisis de clase progresista.

³² Ian Wood, *Crimes of Loyalty. A History of the Ulster Defence Association*, Edimburgo, 2006, p. 269.

irónica recompensa por sus esfuerzos dedicados a transmitir la experiencia de una comunidad a la que no le sobran las representaciones culturales favorables. Impotentes en gran medida para incidir en estas tendencias destructivas, los representantes del lealismo político se han visto no obstante contaminados por esta relación. La sucesora de Ervine como líder del Partido Unionista Progresista, Dawn Purvis, ha dimitido recientemente del partido, manifestando la convicción de que el UVF no está dispuesto a abandonar la criminalidad y a convertirse en un actor político más. Sostuvo con pesadumbre que la mayoría de los miembros de la Fuerza Voluntaria del Ulster han continuado votando al PDU, ignorando el trabajo realizado por Ervine y sus socios.

También debe prestarse atención al entorno político en un sentido más amplio. La suspensión de la Asamblea de Irlanda del Norte durante buena parte de la década anuló cualquier perspectiva de desafiar el historial social y económico de los partidos unionistas burgueses. Las decisiones más importantes del plan de austeridad se tomarán en Londres, aunque se «delegue» la responsabilidad de implementarlas. Pero todavía queda una pregunta esencial por hacer: ¿puede reconciliarse la ideología del propio unionismo con la política de izquierdas? El unionismo siempre ha sido proclive a glorificar los rasgos más arcaicos y reaccionarios del orden político británico. Convenciendo a los protestantes de clase obrera de que el Estado ya es «suyo», ha actuado durante largo tiempo como barrera de las movilizaciones que podrían plantear demandas ante el mismo. Los lealistas que se oponen al Acuerdo del Viernes Santo suelen quejarse de que en la nueva Irlanda del Norte se está reprimiendo la cultura unionista. Sería más exacto decir que los propios unionistas están reprimidos por esta cultura.

Mr. Adams va a Washington

Del otro lado de la división comunitaria, daría la impresión de que el resultado ha sido muy diferente. El Sinn Féin, brazo político del IRA, está ahora firmemente establecido como voz dominante del nacionalismo católico de Irlanda del Norte. Pero esta victoria institucional no comporta un triunfo de los ideales republicanos tradicionales. En casi todos los aspectos, el Sinn Féin ha vuelto la espalda a aquello por lo que el IRA decía estar luchando a lo largo de la «larga guerra»: sus líderes han aceptado la partición y la continuidad de la autoridad británica en Irlanda del Norte, han desmantelado su aparato militar, han reconocido a la policía y a los tribunales y han denunciado la violencia contra las tropas británicas. Los gritos de «capitulación» de los opositores republicanos al Acuerdo del Viernes Santo no son solo una recriminación por esta mutación ideológica, sino también elogios ambiguos a la creciente madurez y realismo de los líderes Provos («Provisionales»), en boca de los principales comentaristas. El punto de partida de cualquier análisis serio debe ser la debilidad política del movimiento republicano, una vez que éste

comenzó a contemplar la posibilidad de establecer una estrategia de desarme en la década de 1980.

Los Provisionales siempre tuvieron una base de apoyo mucho más escasa que los movimientos nacionalistas revolucionarios de Sudáfrica o de Palestina. En Irlanda del Norte solo los apoyaba una minoría de la población católica y en el Sur no eran más que una fuerza absolutamente marginal. La campaña militar del IRA se veía maniatada por estas limitaciones políticas. Los cargamentos de armas procedentes de Libia no podían compensar las escasas reservas de partidarios activos con las que podían contar los Provisionales. Al transcurrir una nueva década, sin evidencias de que el IRA fuera capaz de expulsar al Estado británico de Irlanda del Norte, y con toda una generación de mandos languideciendo en prisión, los estrategas republicanos tuvieron que reconsiderar sus opciones. Tal como lo expresó el responsable de prensa del Sinn Féin Richard McAuley en 1992: «No podremos desarrollar nuestro pleno potencial mientras la guerra continúe en marcha en el Norte y mientras el Sinn Féin mantenga su posición con respecto a la lucha armada y a la violencia»³³.

Estas consideraciones apuntaban hacia un alto el fuego del IRA que, según lo esperado, se produjo en 1994. En ese momento, Gerry Adams ya había avanzado un largo trecho en sus objetivos de consolidar un «frente pan nacionalista», estrechando lazos con el estrictamente constitucionalista Partido Socialdemócrata y Laborista, el Fianna Fáil y el lobby irlandés-estadounidense de Washington. Tal como sugirió un crítico radical, la formación de una alianza de estas características acarrearía inevitablemente un alto precio: «Esta es una alineación impresionante en cuanto a su influencia política general, pero como coalición solo podrá mantenerse unida dentro de los confines de un programa conservador. Puede que sirva para que la comunidad católica logre algún avance con respecto a los protestantes en el Norte, pero no deparará ningún cambio social radical para nadie»³⁴.

Un observador parcial

Adams y sus aliados han abandonado la esperanza de imponer la retirada británica en una sola legislatura; pero todavía intentan asegurar que el control británico sobre Irlanda del Norte se vaya diluyendo, a través de una combinación de soberanía conjunta entre Londres y Dublín, unas estructuras políticas transfronterizas dinámicas y una declaración del gobierno británico a favor de una Irlanda unida y en la que se comprometa a convencer a los unionistas de su conveniencia. Estas ambiciones, no obstante, tropiezan con la posición inamovible de la clase dirigente bri-

³³ Henry Patterson, *The Politics of Illusion: A Political History of the IRA*, Londres, 1997, p. 239.

³⁴ Eamonn McCann, *War and Peace in Northern Ireland*, Dublín, 1998, p. 155.

tánica y con el temor de los aliados del Sinn Féin en el «frente pan-nacionalista» a excederse en la presión contra este consenso. En los debates sobre la historia reciente de Irlanda del Norte se ha descuidado durante mucho tiempo la cuestión de la política estatal británica. En el pasado, autores republicanos y socialistas incurrieron con frecuencia en el error de describir al unionismo del Ulster como una mera marioneta de la clase dominante británica, pero desde entonces el péndulo ha oscilado mucho en la dirección contraria, y la visión ahora en boga presenta a la elite londinense como un espectador perplejo que observa las reyertas entre dos tribus irlandesas. Se ha concedido gran importancia a las manifestaciones de Peter Brooke, ministro de Thatcher para Irlanda del Norte, en las que afirmaba que Londres no tenía «estrategias egoístas u otros intereses» en la región, una aseveración que, desde entonces, ministros y funcionarios británicos repitieron en incontables ocasiones. No hay que descartar necesariamente estas manifestaciones, mientras se analicen con cuidado. El valor económico de Irlanda del Norte para el Estado británico es insignificante y los imperativos estratégicos, tan apremiantes durante la primera mitad del siglo xx, han desaparecido en la era que siguió a la Guerra Fría. Pero Brooke se cuidó de sostener que Gran Bretaña fue *políticamente* neutral, y no sin razones, ya que John Major y Tony Blair continuaron pregonando su apoyo a la Unión tan enérgicamente como se pudiera desear.

Pocos Estados se muestran entusiasmados con la idea de renunciar a parte de su territorio nacional o de compartir su control con un vecino. Esta es la opinión que se esconde detrás de la insistencia en que el cambio constitucional no tendrá lugar sin el apoyo de una mayoría dentro de Irlanda del Norte. El «principio de consentimiento», considerado ahora casi universalmente como un axioma democrático de lo más evidente, resta importancia a la naturaleza problemática de la autodeterminación cuando existe un debate acerca de la unidad política en la que ésta debería plantearse. El Estado británico ha postulado el pacto de partición de la década de 1920 como piedra angular de cualquier acuerdo de paz, lo que es en sí misma una intervención inequívocamente partidista. Este pacto no era otra cosa que un intento sincero de reconocer la existencia de lealtades nacionales enfrentadas entre los habitantes de la isla: más de un tercio de la población inicial de Irlanda del Norte rechazaba su legitimidad y en dos de sus seis condados, en la segunda mayor de sus ciudades y en aproximadamente la mitad de su área geográfica hubo mayorías nacionalistas. No han existido muchas unidades políticas posibles con una base de consenso popular tan exigua, ahora más erosionada por el crecimiento de la población nacionalista. La partición —ciertamente en la forma en que fue adoptada— no significó un esfuerzo por aplicar los principios de Wilson, sino una victoria del bloque unionista conservador en su empeño por mantener la bandera de la Unión ondeando sobre todo el territorio que pudiera pacificarse con seguridad.

No se trata aquí simplemente de un recuento de errores históricos: se suscitan interrogantes en torno al «principio de consentimiento» que ningún gobierno británico se ha dignado a afrontar. Los republicanos –incluidos aquellos que se oponían a la campaña del ejército provisional– siempre han defendido que la unidad de autodeterminación debería ser la isla entera, no ese pequeño Estado recortado en su esquina nordeste. Puede cuestionarse este punto de vista con el argumento práctico de que la oposición unionista a un Estado que agrupe a Irlanda al completo sería tan acusada que la haría ingobernable. No obstante, Londres nunca ha aportado este argumento –plausible, aunque no irrefutable– como justificación racional de su postura: los políticos y diplomáticos británicos, simplemente ignoraban la perspectiva republicana de la autodeterminación, inclinados como estaban a creer que el sentido común no admitía otra conclusión que la suya propia. También descartaron cualquier intento de llegar a una soberanía compartida entre los dos Estados, expresando el «nunca, nunca, nunca» de la respuesta de Thatcher a las aspiraciones nacionalistas, aunque en un tono ciertamente más moderado³⁵. Los aspectos con respecto al tema transfronterizo del Acuerdo del Viernes Santo fueron adecuadamente descritos como «deplorablemente vagos», en virtud de los más provechosos análisis de la nueva administración política³⁶. El binacionalismo se queda en una aspiración y el papel «consultivo» asignado a Dublín, de acuerdo con los términos del Acuerdo del Viernes Santo, consiste precisamente en esto: los gobiernos británicos son libres de ignorar cualquier recomendación planteada por los políticos irlandeses y así lo han hecho reiteradamente.

Esta desigual relación de poder se ha mostrado de modo más evidente en la práctica de Londres en materia de seguridad. Se asignó a una comisión presidida por Chris Patten la tarea de elaborar un anteproyecto para la reforma policial, el cual se excluyó de las negociaciones del Acuerdo del Viernes Santo. El gobierno de Blair se encargó de diluir sus propuestas antes de presentar la legislación en Westminster, mientras permitía a las fuerzas de seguridad del Estado encargarse del proceso de reformas y mantenerlo dentro de límites seguros. No sería exacto proclamar que el reconstituido PSNI [Servicio de Policía de Irlanda del Norte] no se diferencia en nada del antiguo RUC [Policía Real del Úlster]: ha habido cambios significativos, aunque estos cambios se deban a modificaciones en las necesidades del Estado británico, puesto que ya no tiene que hacer frente a una insurrección republicana a gran escala. El nombre y los símbolos del cuerpo se han cambiado para que ya no se identifiquen tan es-

³⁵ Thatcher estaba respondiendo al informe del Nuevo Foro de Irlanda, una asamblea de nacionalistas irlandeses no violentos, convocada por el gobierno de Dublín en 1980 con el propósito explícito de aislar a los Provisionales. Sus propuestas de cambio constitucional –un Estado único en Irlanda, un Estado federal o la soberanía conjunta de Londres y Dublín– fueron desestimadas por el gobierno británico y el habitual talento de Thatcher para endulzar la píldora quedó muy en evidencia.

³⁶ Jonathan Tonge, *The New Northern Irish Politics?*, Basingstoke, 2005, p. 264.

trechamente con el unionismo, y se han hecho esfuerzos considerables para ampliar la presencia católica entre sus oficiales: se supone que los nuevos reclutamientos habrán de ser al 50 por 100. Existe ahora una Junta de Policía Civil que incluye a políticos nacionalistas, y la jerarquía del PSNI intentará sin duda tenerlos contentos, si es que eso es posible. Pero los temas incluidos en amplio término de «la seguridad nacional» no deben ser notificados a la Junta.

El significado práctico de esta laguna quedó claro en marzo de 2009, cuando el entonces jefe supremo de la policía, Hugo Orde, solicitó el despliegue del Regimiento Especial de Reconocimiento en Irlanda del Norte. La turbia historia de las fuerzas especiales británicas en la región permitió a Martin McGuinness manifestar, de manera francamente exagerada, que «muchas de esas fuerzas constituyeron para la comunidad un peligro mayor que cualquier otro grupo», calificando la decisión de Orde de «estúpida y peligrosa»³⁷. Pero los partidos nacionalistas ya no eran capaces de manejar el problema. La polémica se vio eclipsada por los ataques mortales perpetrados poco después por «disidentes» republicanos contra soldados británicos, dejando patente cuál era la aportación de este militarismo republicano sin salida a los intentos de salvaguardar el *statu quo*.

Las innovaciones legislativas en la «guerra contra el terrorismo» en el Reino Unido facilitaron al PSNI instrumentos que su predecesor hubiera envidiado: sobre todo, la detención sin cargos durante veintiocho días y la potestad aleatoria de «parar y registrar», utilizadas con creciente regularidad. El Sinn Féin insistió en la exigencia del cumplimiento pleno del informe Patten y se negó durante años a participar en el Consejo Policial, pero en 2006 capituló ante las presiones de todo tipo que pretendían reforzar al PSNI, antes de que éste pudiera ceder parte del poder al PDU. La decisión llegó en un momento de extrema debilidad para el movimiento provisional y dejó a los republicanos leales a Gerry Adams en una posición tal que se esperaba de ellos que defendieran las acciones de la policía sin protestar ni enfrentarse a las acusaciones unionistas de socavar la lucha contra el terrorismo.

Los límites últimos de la reforma de la seguridad quedaron bruscamente en evidencia cuando el juez canadiense Peter Cory presentó su informe sobre el asesinato del abogado nacionalista Pat Finucane en 1989. Las denuncias de la complicidad del Estado en el asesinato se alzaron casi inmediatamente tras la muerte de Finucane: el comando de la Asociación para la Defensa del Ulster, que llevó a cabo el asesinato, estaba compuesto exclusivamente por agentes del gobierno. Durante las conversaciones mantenidas para asegurar el cumplimiento del Acuerdo del Viernes Santo, el gobierno británico se ofreció a realizar una investigación sobre la

³⁷ «Forces are a treath: McGuinness», BBC News, 6 de marzo de 2009.

muerte de Finucane si un tribunal internacional lo juzgaba necesario. Tras descubrir significativas evidencias de conspiración, Cory advirtió que se consideraría «una cínica quiebra de la buena fe» el hecho de que el gobierno de Blair no llevara a cabo una investigación pública³⁸. Se demostró que este era un riesgo que Blair estaba dispuesto a correr cuando su gobierno se apresuró a poner en marcha una legislación que haría imposible la obtención de pruebas efectivas. A la Defensora del Pueblo en la policía Nuala O'Loan se le permitió arrojar algo de luz sobre la relación simbiótica entre la rama especial del RUC y los paramilitares leales, pero ni se podía pensar en autorizar una investigación que pudiera lesionar la reputación del ejército y de los servicios de inteligencia británicos, que se necesitaban para labores importantes en nuevos campos de batalla.

La coalición Sinn Féin-PDU parece haberse estabilizado después de afrontar el pasado año una crisis aparentemente definitiva. Los equipos que lideran ambos partidos invirtieron un gran capital político en conseguir que el compromiso subsistiera y con ello lograron contener a la oposición en el cauce deseado. Aunque en un futuro próximo podrían esperarse nuevas turbulencias, lo más probable es que las elites políticas unionistas y nacionalistas continúen repartiéndose cada porción de poder que Londres decida asignarles. En el ámbito presupuestario, la cuerda se tensará en cada momento y las políticas permanecerán congeladas según un patrón sectario que aportará escasos cambios a ambos conjuntos de la clase trabajadora: el Acuerdo del Viernes Santo no creó ciertamente la división comunitaria en Irlanda del Norte, pero tampoco ofrece una vía plausible para su desaparición o, siquiera, su disminución a medida que pase el tiempo. Los momentos históricos anteriores en los que pareció posible superar el estancamiento sectario –de 1790 a 1960– se produjeron cuando la escena internacional había dado un giro a la izquierda. Sin un cambio de ese tipo en los próximos tiempos, las razones para el optimismo son escasas. Hay que dar ciertamente la bienvenida al fin de la guerra, pero la paz que ha seguido ofrece pocos motivos de alegría.

III. ¿EL ESLABÓN DÉBIL DE EUROPA?

¿Aportará el sur su propia contribución a un giro más amplio hacia la izquierda? A comienzos de 2009, después de tres meses de crisis financiera, Brian Lenihan se sintió lo bastante seguro para alardear: «Los pasos dados han impresionado a nuestros socios en Europa, que están asombrados de nuestra capacidad de sufrimiento. En Francia tendrías motines si intentaran hacer lo mismo»³⁹. La misma evaluación del carácter irlandés –con un juicio de valor bastante diferente– la hicieron los manifestantes griegos que

³⁸ *Cory Collusion Inquiry Report. Patrick Finucane*, Londres, 2004, p. 109

³⁹ Anne Lucey, «Europe "amazed" at steps taken in budget: Lenihan», *The Irish Times*, 27 de abril de 2009.

cantaban: «Nosotros no somos Irlanda, nosotros resistiremos»⁴⁰. La actuación del gobierno de Lenihan, entre tanto, podría verse acertadamente como un intento de llevar su afirmación al límite de su destrucción. Con todo, hasta ahora el malestar social ha sido ciertamente mínimo y sin duda insuficiente para forzar un cambio en la política del gobierno.

Los defectos innatos de la izquierda irlandesa ya han sido reseñados. Aunque muchos de los factores causantes de esta flaqueza han pasado ya a la historia, hay un legado de debilidad que sigue estando presente: no podemos hablar de una tradición de lucha como las de Grecia y Portugal. La combatividad del movimiento sindical se ha visto socavada por décadas de corporativismo conocido como «acuerdo social». A los líderes empresariales ese sistema asociativo les pareció un camino útil para limitar los incrementos salariales en un momento en que el desempleo era demasiado bajo para proporcionarles el necesario instrumento de chantaje. Más significativo todavía fue el efecto anestésico que tuvo en el movimiento obrero organizado la renuncia por parte de los sindicatos a cualquier forma de conciencia de sí mismos como movimiento social dotado de una concepción específica y radical opuesta a las fuerzas dominantes de la sociedad irlandesa. El precio a pagar fue llamativamente bajo: la República no tiene ni una mínima ley de reconocimiento de la libertad sindical y los años de «acuerdo» fueron testigos de una erosión constante de la solidez sindical en el sector privado.

Ahora que las colas de desempleo están consiguiendo disciplinar a la fuerza de trabajo mejor de lo que lo haría cualquier acuerdo nacional, el capitalismo irlandés ha decidido lanzar un ataque frontal contra el movimiento sindical en sus últimos reductos. La jerarquía sindical se ha resistido durante mucho tiempo a reconocer estos hechos y sus movilizaciones vacilantes, cuyo objetivo era asegurarse la vuelta a la mesa de negociación, fueron ignoradas por el gobierno. Cada vez que se ha hecho un llamamiento a una manifestación –las más recientes referentes al acuerdo UE-FMI–, se ha registrado una vigorosa afluencia, seguida de meses de inactividad. Los elementos europeístas de los movimientos sindicales tendrán que abandonar sus ilusiones respecto al papel progresista de la Unión Europea si quieren plantear una oposición seria al programa de austeridad dictado por Bruselas. La izquierda radical, a la que le encantaría organizar una campaña de protesta más continuada, dispone de una influencia social muy limitada y se ha mostrado incapaz de movilizar multitudes sin el apoyo oficial de los líderes sindicales.

En la actualidad, los ojos de todos están puestos en las próximas elecciones generales. El liderazgo de Cowen se ha desintegrado en circunstancias grotescas y su sucesor –desconocido cuando se escribe este texto– no ten-

⁴⁰ Helena Smith, «Athens protest: "We are at war with them, as they are with us"», *The Guardian*, 10 de febrero de 2010. He oído una variante del mismo planteamiento de boca de un unionista sindical dando un mitin: «Estoy seguro de que todos conocéis el chiste: ¿Cuál es la diferencia entre Islandia e Irlanda? Dos letras y seis meses. Pues bien, la verdadera diferencia es ésta: ellos derribaron el gobierno y nosotros no».

drá tiempo de reparar los daños. Una medida del declive del Fianna Fáil es el hecho de que un resultado del 20 por 100 se pueda considerar ahora una recuperación aceptable: en otro tiempo, cuando el Partido llegó al poder, estos resultados hubieran sido recibidos con el espanto que los cristianos reservan al Apocalipsis. El primer sondeo de opinión que siguió al acuerdo UE-FMI situaba al Partido en el cuarto lugar, con un 13 por 100, tras el Fine Gael, los laboristas y el Sinn Féin. Dado el amplio apoyo social de que dispuso el Fianna Fáil a lo largo de su historia, el mazazo que se avecina implicará una distribución de votos por todo el espectro político. Un sistema de partidos que ha permanecido llamativamente estable desde 1930 parece estar abocado a sacudidas y reestructuraciones sin precedentes; que esta reconfiguración favorezca o no a la izquierda dependerá mucho de las estrategias que adopten las partes que la componen. En el momento de redactar este artículo, los laboristas parecen estar en situación de obtener la cuota de votos más alta desde la fundación del Estado, por encima del Fianna Fáil. Sin duda, tal como observó el corresponsal político de *The Irish Times*: «El apoyo conjunto a favor de los laboristas, el Sinn Féin, independientes y otras fuerzas políticas alcanza ahora el 51 por 100, ofreciendo la expectativa de un bloque de izquierdas, de liderazgo laborista, como alternativa a la coalición entre Fine Gael y laboristas»⁴¹. El giro hacia el laborismo parece constituir más un síntoma que un agente de cambio: la evolución que se registra en el Partido y su orientación actual parecen sugerir más su preferencia por la vía tradicional de coalición con el Fine Gael que el intento de formar el primer gobierno irlandés de centro-izquierda. El laborismo se ha posicionado como el principal oponente del Fianna Fáil y ha cosechado algunas reprimendas de los comentaristas políticos por su «populismo» y «falta de realismo». La dirección del Partido ya ha comenzado a virar sus velas en respuesta a tales críticas y puede esperarse que llegue mucho más lejos una vez en el poder.

El cuarto bloque

El resultado más probable de la votación es una coalición Fine Gael-Laborismo, con una mayoría sólida, que tendrá que enfrentarse por un lado a un Fianna Fáil desmoralizado y desacreditado y por el otro a un «cuarto bloque» situado a la izquierda del laborismo, y cuyas perspectivas parecen más amplias tras los sondeos recientes⁴². La situación podría ser prometedora para la izquierda, pero mucho dependerá del tamaño del

⁴¹ Stephen Collins, «Fianna Fáil facing meltdown», *The Irish Times*, 16 de diciembre de 2010.

⁴² Tal como ha destacado un simpatizante del Fianza Fáil, «parece que la hostilidad antisistema y el ánimo de cambio en ciertos sectores del electorado, sobre todo entre los jóvenes, busca, más allá del Partido Laborista, otras alternativas [...] Los candidatos del “cuarto bloque” obtuvieron más de la mitad de los votos en aproximadamente un tercio de las circunscripciones en 2007, lo que significa que el impulso necesario para un cambio real no tiene por qué ser enorme». Noel Whelan, «SF and left-wing independents set to burst out of blocs», *The Irish Times*, 11 de diciembre de 2010.

«cuarto bloque» y del peso relativo de sus heterogéneos componentes, que, en términos ideológicos, abarcan desde la socialdemocracia hasta el trotskismo. Por muy amplio que sea este bloque, su componente principal será el Sinn Féin: el Partido está en posición de conseguir su mejor resultado en el sur desde la ruptura con De Valera en 1920.

El Sinn Féin fue el único partido en el Parlamento que se opuso categóricamente al acuerdo UE-FMI y sacó adelante un sólido programa de izquierda al comienzo de la última crisis. Aunque por parte de los gurús conservadores se acusa con frecuencia al Partido de ser una organización «marxista», su naturaleza ideológica es mucho más ambigua y contradictoria de lo que sugiere esta etiqueta. Desde la derrota de las fuerzas antitratado en la Guerra Civil, ha habido repetidos intentos de combinar republicanismo con políticas socialistas. Las organizaciones más significativas a la izquierda de la socialdemocracia, desde el Congreso Republicano en la década de 1930 al Partido de los Trabajadores en la de 1980, surgieron todas de esta supuesta síntesis. El estilo conspiratorio y militarista de la tradición republicana ha dado con frecuencia al traste con tales esfuerzos, mientras la tarea fundamental de terminar la revolución nacional inducía a los republicanos de izquierdas a posponer la lucha por el socialismo en tanto se alcanzara «la República».

Bajo el liderato de Gerry Adams, el Sinn Féin siguió por lo general este camino: su estrecha relación con el Congreso Nacional Africano le sirvió para legitimar una estrategia que dispensa al movimiento de toda obligación de perseguir los objetivos socialistas al norte de la frontera¹³. Sus activistas en el sur han procurado ahora adoptar una perspectiva de izquierdas seria, y el Partido ha encontrado su nicho en el hacinado espacio político del sur, a la izquierda del laborismo, recogiendo el apoyo en las zonas de clase trabajadora de Dublín que el Partido Laborista había abandonado en su intento de alcanzar la respetabilidad de acuerdo con el modelo de Blair. Las figuras de más peso del Partido en Dublín pronunciaron críticas mordaces, aunque cuidadosamente formuladas, contra los líderes del Norte después de las decepcionantes elecciones generales de 2007¹⁴. El Sinn Féin goza de la situación especial que le confiere el ser el único partido, de los implementados en toda Irlanda, que dispone de un respaldo significativo en ambos Estados. Las disfunciones derivadas de te-

¹³ Varios líderes prominentes del CNA han visitado Belfast para prestar apoyo a los líderes del Sinn Féin en las fases cruciales del proceso de paz; esto es la continuación de una relación que data de la década de 1980 y que ha sido una continua fuente de indignación para los políticos conservadores que pensaban que era con ellos con quienes debían haberse reunido los «estadistas» del CNA.

¹⁴ Una de estas figuras —el presidente del Sinn Féin de Dublín— ha publicado recientemente un artículo fascinante sobre las políticas republicanas y de izquierdas en la Irlanda actual, notable tanto por las críticas en clave hacia su partido como por sus estimulantes reflexiones sobre las tribulaciones de la izquierda irlandesa: Eoin Ó Broin, *Sinn Féin and the Politics of Left Republicanism*, Londres, 2009.

ner que conciliar la intervención en paisajes políticos tan radicalmente dispares quedan ahora claramente en evidencia, cuando el Partido denuncia los recortes en el sur y los aplica en el norte: fórmulas del tipo de la «revolución democrática nacional», tomadas de sus aliados internacionales, han llegado ya al límite de su elasticidad. Es difícil predecir el uso que hará el Sinn Féin de su mayor cuota de poder tras las elecciones: una actuación poderosa de las fuerzas más radicales agrupadas en la Alianza de la Izquierda Unida –de ideología fundamentalmente trotskista, especialmente las secciones irlandesas de la antigua Tendencia Militante y el Partido Socialista de los Trabajadores, que gozan de un cierto peso en algunas partes del país– incrementará la presión para mantener un rumbo de izquierdas. Será necesario, ante todo, poner fin a la pasividad que evocaba la petulante bendición de Lenihan, si la crisis del Fianna Fáil se convierte en la una crisis de las políticas conservadoras en general.

Perspectivas

Aunque los laboristas y el Fine Gael han atacado los términos del acuerdo establecido por el Fianna Fáil con los acreedores extranjeros de Irlanda, la apuesta más segura es que el nuevo gobierno, una vez en ejercicio, se excusará lamentando su impotencia para modificar esos términos. En tal caso, será inevitable otra crisis dentro del próximo año más o menos. El acuerdo UE-FMI no será operativo, ni en sus propios términos. A parte del sufrimiento que causará a una amplia franja de población, su resultado más probable será el de hundir la economía irlandesa en su conjunto. Añadir la carga del reembolso de unos intereses gravosos a un Estado que ya está luchando por sacar la cabeza fuera del agua asegurará el colapso. Las previsiones de crecimiento que sustentan el último plan del gobierno carecen de una verosimilitud siquiera aparente. Tal como argumentaban los expertos del *think-tank* TASC [Acción por el Cambio Social] en su análisis del presupuesto de Lenihan de diciembre:

El Ministerio de Finanzas predice que el PIB crecerá un 1,7 por 100 en 2011 y un promedio del 3 por 100 anual a lo largo del periodo 2012-2014. Estos cálculos de crecimiento implican un incremento de las exportaciones del 4,6 anual, en un momento en que nuestros principales socios comerciales prevén obtener tasas de crecimiento de menos de la mitad de estas cifras. Dado el abultado exceso de deuda, la incertidumbre en el sector bancario y la ausencia de crédito que seguirán constriñendo nuestra economía doméstica, no está claro por qué razón se espera que Irlanda supere a otras economías avanzadas [...]. Si el crecimiento que se produce es inferior al que prevé el Ministerio de Finanzas, el déficit general del Estado seguirá siendo superior al nivel de crecimiento nominal en 2014 y el índice de endeudamiento seguirá avanzando en una dirección insostenible⁴⁵.

⁴⁵ TASC, *Response to Budget 2011*, Dublín, 2010, pp. 3-4.

Irlanda va camino de una quiebra soberana, tal como ya han advertido analistas independientes del país y del extranjero⁴⁶. La única salida del caos actual, tanto para la economía irlandesa como para la europea, es imponer una sanción a los titulares de bonos que, dedicados a una actividad comercial especulativa, esperan ahora de los fondos públicos una compensación ilimitada por sus pérdidas de juego. Si las pérdidas sufridas por los bancos privados se excluyeran de la deuda nacional, Irlanda tendría una posibilidad razonable de estabilizar sus finanzas en los próximos años. Hasta que se de ese paso, las previsiones de recuperación son irrisorias. Si los titulares del poder en Dublín tuvieran la suerte de poseer un mínimo de valentía y visión, hubieran emprendido el camino hacia Lisboa, Atenas y Madrid urgiendo a sus compañeros de piara a formar un bloque dentro de la UE que fuera capaz de hacer frente al ruinoso sometimiento impuesto por los titulares de bonos. Pero por el contrario han malgastado el último año en asegurar a sus ciudadanos que «Irlanda no es Grecia», hasta que se llegó al punto en que el primer ministro griego se sintió obligado a declarar que «Grecia no es Irlanda». Se está haciendo ya tarde para establecer tales alianzas, pero sin ellas, la lista de estos ahorcados por separado se extenderá sin duda mucho más allá de la periferia de la eurozona.

20 de enero de 2011

⁴⁶ David McWilliams, «Bailout will sink Ireland before we can even swim», *The Irish Independent*, 1 de diciembre de 2010; Wolfgang Munchau, «Will it work? No. What can Ireland do? Remove the bank guarantee and default», *The Irish Times*, 2 de diciembre de 2010.

LAS CONTRAOLIMPIADAS

Caminando por East Hastings Street, en el Downtown Eastside de Vancouver, una fresca mañana de enero de 2010 me encontré con un desconcertante grupo de paneles blancos en el lateral exterior del rehabilitado edificio Woodward. Los paneles mostraban un estallido de rechazo: escuetas frases en letras grandes del tipo de «¡QUE NO!», «HE DICHO QUE NO», «NI DE COÑA», «DE NINGUNA MANERA, JOSÉ». Cuatro letreros decían simplemente «NO». Más adelante descubrí que se trataba de una instalación del artista de Vancouver Ken Lum creada específicamente para ese lugar para la Audain Gallery de la Simon Fraser University, que cuestionaba la «Ordenanza Municipal de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010», aprobada por el Ayuntamiento de Vancouver en vísperas de las Olimpiadas. Ésta prohibía los letreros, carteles y pancartas que no «celebrasen» los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 y no «creasen o fomentasen un ambiente y un entorno festivos». La ordenanza criminalizaba los signos contra las Olimpiadas y concedía a las autoridades canadienses el derecho a eliminarlas del dominio público y privado.

El mes siguiente retorné a Vancouver para ver cómo se iba configurando la movilización contra las Olimpiadas. Al pasear por las inmediaciones de la Villa Olímpica en los días previos a los Juegos, uno se encontraba con una contradictoria mezcla de cordial entusiasmo deportivo y ostentoso estado de vigilancia. El lugar bullía de vivaces turistas, atletas, funcionarios olímpicos y periodistas con cámaras y acreditaciones de prensa balanceándose en sus cuellos; todo estaba plagado de azul verdoso, uno de los alegres colores testados en grupos de discusión sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010. Al mismo tiempo, daba la impresión de estar entrando en una especie de zona de represión perfectamente ordenada. Agentes de la recientemente formada Unidad de Seguridad Integrada de Vancouver —encabezada por la Real Policía Montada del Canadá y conformada por más de 20 fuerzas del orden— se agrupaban en cada esquina y patrullaban las bulliciosas calles en las inmediaciones de la ensenada de False Creek. Se colocaron cámaras de vigilancia sobre postes a intervalos regulares en el recinto. Los helicópteros zumbaban en lo alto. Cazas CF-18 Hornet cruzaban el cielo silbando. Y lonas imitando el estilo de Christo y Jeanne-Claude, también en azul verdoso olímpico, envolvían las vallas

metálicas que encauzaban a la gente hacia las zonas permitidas a la vez que ocultaban retazos del denominado espacio público.

Músculos y dinero

Los Juegos Olímpicos se han convertido en el mayor acontecimiento mediático y de marketing del mundo; las grandes empresas compiten por asociarse con la «marca olímpica» con la esperanza de que sus campañas lleguen a miles de millones de personas en todo el mundo. En un lugar intermedio entre la empresa multinacional y la institución global, el Comité Olímpico Internacional (COI) se asienta en el corazón de una estructura entrelazada de organismos nacionales e internacionales, asociaciones deportivas y empresas patrocinadoras; durante las últimas décadas los Juegos, de Verano y de Invierno, han recibido la bendición de las Naciones Unidas, que ritualmente con cada Olimpiada aprueban una resolución nunca respetada sobre una Tregua Olímpica. El COI sopesa las candidaturas para ser la sede de los Juegos, presentadas por los Comités Olímpicos Nacionales. Con sede en Lausana, Suiza, en donde está registrado como una ONG sin ánimo de lucro, y gozando de exenciones fiscales allá donde pisa, el COI obtuvo un beneficio de 383 millones de dólares de las Olimpiadas de Verano de Pekín de 2008, tras distribuir una parte importante de los 2.400 millones del total de ingresos a otras partes del «Movimiento Olímpico». No está sometido a ninguna auditoría contable; el destino final de gran parte de los ingresos que llegan a las arcas del COI continúa siendo un misterio y no hay datos sobre los salarios de sus directivos¹.

Los Juegos Olímpicos modernos son un invento del aristócrata francés Pierre de Coubertin (1863-1937), un excéntrico anglófilo que vio en el cultivo del deporte de la Rugby School de Thomas Arnold la fórmula mágica de la preponderancia imperial británica². Aquí, en esta mezcla de rigurosa disciplina y exhibición viril, se encuentra la manera de reanimar a la nación francesa tras la humillación de la Guerra franco-prusiana. Coubertin era un claro partidario del darwinismo social de su tiempo: «La teoría de la igualdad de derechos de todas las razas humanas conduce a una línea política contraria a todo progreso en las colonias»; «la raza superior tiene toda la razón al negar a la raza inferior ciertos privilegios de la vida

¹ Tripp Mickle, «IOC cashes in on Beijing», *Sports Business Journal*, 13 de julio de 2009; Christopher Saw, *Five Ring Circus*, Gabriola Island (BC), New Society Publishers, 2008, p. 72.

² «Arnold, el mayor pedagogo de la modernidad, es el gran responsable de la presente prosperidad y de la prodigiosa expansión de este país. Con él el deporte penetró en un excelente colegio privado y lo transformó; y desde el día en que la primera generación modelada por sus manos fue lanzada al mundo, el Imperio británico adquirió una nueva imagen». Pierre de Coubertin, «The Olympic Idea», *Discourses and Essays*. Stuttgart, Olympischer Sport-Verlag, 1967, p. 8; citado en Ljubodrag Simonović, *Fascism and Olympism*, p. 14, disponible en la página web de Cirque Minime.

civilizada». No era menos claro en lo referente a la cuestión judía: «inteligentes y astutos para los negocios», quizá, pero «en el fondo de sus corazones siguen siendo asiáticos» cuyo papel en la historia ha sido «insignificante»³. Su inspirada aportación consistió en unir el deporte imperial a las grandes exposiciones universales de aquel momento –las primeras Olimpiadas se celebraron de hecho como atracciones secundarias dentro de las exposiciones universales– y añadir los extras de cánticos seudoclásicos, estandartes y coronas de laurel. En 1896 el COI, presidido por Coubertin, organizó los primeros Juegos. Desde el comienzo, Thomas Cook fue la agencia de viajes oficial de las Olimpiadas y el empresario estadounidense de ropa deportiva Albert G. Spalding pronto se sumó a filas, ganando de este modo abundantes oportunidades de publicidad por emplazamiento.

Los Juegos se aplazaron durante la gran muestra de virtud viril que estalló en 1914 y languidecieron en la década de 1920, si bien en 1924 se les sumaron los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero Coubertin se mostró encantado con el entusiasmo que demostraba la Alemania nazi en sus preparativos para las Olimpiadas de Berlín de 1936: «Iluminados por la fuerza y la disciplina de Hitler», deberían de servir de modelo para los Juegos posteriores⁴. Igualmente entusiasta era el protegido de Coubertin, que más tarde se convertiría en presidente del COI, el magnate inmobiliario de Chicago Avery Brundage (1887-1975), quien desafió las protestas antifascistas al decir en un mitin en Madison Square Garden, en 1936: «Podemos aprender mucho de Alemania. Nosotros, también, si deseamos preservar nuestras instituciones, tenemos que acabar con el comunismo. Nosotros, también debemos avanzar para frenar el deterioro del patriotismo»⁵. Como presidente del COI de 1952 a 1972, Brundage fue un entusiasta de las selecciones nacionales exclusivamente blancas de la Sudáfrica del *apartheid* y tenía una manifiesta debilidad por la España franquista, llegando a celebrar el congreso del COI de 1965 en Madrid donde el mismo Generalísimo leyó el discurso de apertura. Brundage respondió con un excesivo elogio de los excelentes conocimientos de Franco sobre los principios del amateurismo⁶. De hecho el sucesor de Brundage, y al que

³ Pierre de Coubertin, «Histoire universelle», vol. 2, p. 447.

⁴ Hans Joachim Teichler, «Coubertin und das Dritte Reich», *Sportwissenschaft*, 1982, p. 12, citado en L. Simonović, «Fascism and Olympism», cit., p. 3.

⁵ «Brundage extols Hitler regime», *The New York Times*, 5 de octubre de 1936. El mitin de 20.000 personas terminó cantando «The Star-Spangled Banner», «Deutschland Ueber Alles» y la canción de Horst-Wessel. Tal como le había dicho a la Asociación de Comercio de Chicago en 1929, Brundage aguardaba con entusiasmo «el desarrollo de una nueva raza de hombres, movidos por los principios de deportividad adquiridos en el campo de juego [...] una raza físicamente fuerte, mentalmente alerta y moralmente firme: una raza sobre la que nadie se imponga». Citado en Maynard Brichford, «Avery Brundage and Racism», conferencia en la University of Western Ontario, octubre de 1998, p. 131.

⁶ «Proclamation of Opening by the Head of the Spanish State, Generalissimo Franco»; y «Address by President Avery Brundage to 63rd Session of the IOC», *Bulletin of the International Olympic Committee*, Lausana, 1965, pp. 64-66.

concedió su apoyo, Juan Antonio Samaranch (1920-2010), presidente del COI de 1980 a 2001, fue un falangista que se consideraba a sí mismo «franquista al 100 por 100» hasta la muerte del dictador⁷.

Los Juegos habían pasado por una etapa turbulenta antes de que Samaranch tomara el mando: las Olimpiadas de 1968 en la ciudad de México serían recordadas por los saludos de los victoriosos atletas estadounidenses del *Black Power*, con restos de gas lacrimógeno flotando sobre el estadio mientras la policía reprimía brutalmente a los estudiantes que se manifestaban fuera del recinto. Los Estados del África negra organizaron boicots contra el *apartheid* en 1972 y 1976, y la masacre del equipo israelí y de sus captores palestinos en la fallida intervención de la policía alemana eclipsó los Juegos Olímpicos de Múnich. La respuesta de Samaranch y de sus colegas fue aumentar los ingresos mediante la subasta de los derechos de retransmisión, proclamando, por supuesto, que no ha lugar para la política en el deporte. Las «Olimpiadas de Reagan» de 1984 en Los Ángeles marcaron las pautas para el futuro: una exuberante orgía de las empresas patrocinadoras televisada globalmente con una mascota oficial diseñada por Disney.

A partir de este momento el COI se convirtió en el gigante transnacional que conocemos hoy en día, surcando las aguas de los enormes flujos de ingresos generados por los contratos de retransmisión de las Olimpiadas y por el programa de patrocinio empresarial «Los Socios Olímpicos» (Coca-Cola, McDonald's, Dow Chemicals, Visa y Panasonic), que otorga a éstos los derechos de uso de la marca registrada de los cinco anillos olímpicos del COI y les permite inundar los mercados globales con mercancías acreedoras de la «auténtica» marca olímpica. En los estadios el dopaje se extendió tanto que incluso el COI se vio forzado a prestarle atención y crear su propia Comisión de Ética. A tono con los tiempos, los Juegos más recientes han combinado burbujas de crédito alimentadas por el endeudamiento con la oportunidad de un abrazo simbólico de la «comunidad internacional». Los Juegos de Atenas de 2004 incurrieron en costes de cerca de 7.200 millones de euros, una significativa contribución al déficit griego. Las Olimpiadas de Beijing de 2008 ofrecieron una fiesta de presentación en sociedad para el nuevo miembro del capitalismo: solamente la ceremonia de inauguración costó 100 millones de dólares; naturalmente, el COI, ahora dirigido por el patrón de yate y burócrata deportivo belga Jacques Rogge, hizo la vista gorda ante la fuerte represión en el Tíbet en aquel momento.

Si bien los Juegos Olímpicos han representado siempre la triunfal lógica política del momento —el clásico alarde de fuerza imperialista, la ri-

⁷ Hijo de un potentado del sector textil, Samaranch se casó con una mujer de rancio abolengo económico y en 1991 le fue concedido por Felipe González un título aristocrático por el trabajo de toda su vida. Véase Andrew Jennings, «Why Juan Antonio's right arm is more muscular than his left», en *transparencyinsport.org*; Dave Zirin, «Burying Juan Antonio Samaranch», *Huffington Post*, 22 de abril de 2010.

validad entre bloques de la Guerra Fría, la Pax Americana—, en la actualidad generan normalmente un recrudecimiento de las protestas políticas allá adonde van. La carta oficial del COI prohíbe la expresión de la oposición a las Olimpiadas, estipulando en su Norma 52 que «ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial queda permitida en ningún emplazamiento, recinto u otra área olímpicos». No obstante, cuando las Olimpiadas aterrizan en una ciudad sede de los Juegos, pronto les sigue la protesta. Las cumbres globales como las de la OMC o las del G-20 se convirtieron en el centro de una gran ola de activismo internacional a partir de Seattle. Los Juegos también se han revelado como la encarnación de un inexplicable orden mundial de poder, riqueza y espectáculo causando un permanente daño social en el entorno urbano.

Alianzas de acontecimientos

Los activistas de Vancouver se unieron tempranamente a la oposición a las Olimpiadas. El activismo surgió en 2002 —antes incluso de que la ciudad fuese elegida de entre las candidatas a sede olímpica—, pero fue multiplicándose durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010. Y mientras que el *Vancouver Sun* tachaba a los manifestantes de ser un grupo de «quejicas y protestones» incapaces de «morderse la lengua ni en una ocasión especial», los activistas en contra de las Olimpiadas presentaron una vehemente crítica: el dinero de los contribuyentes se estaba despilfarrando en una fiesta deportiva de dos semanas y media en lugar de ir a parar a servicios sociales indispensables; las libertades civiles se veían amenazadas por una fuerza policial ampliamente militarizada; y las Olimpiadas se estaban celebrando sobre un terreno indígena (Coast Salish) que no había sido cedido⁸. Grupos como la Coalición No Juegos 2010 señalaban los peligros del complejo olímpico-industrial y comenzaron un proyecto de educación pública a largo plazo para desmitificar la aparente naturaleza del «todos salimos ganando» de los Juegos. La Coalición del Impacto en la Comunidad adoptó en un principio una postura neutral, antes de cambiar de parecer cuando las contradicciones de acoger las Olimpiadas se volvieron demasiado pronunciadas como para minimizarlas. Grupos ya existentes como Nadie Es Ilegal y el Comité Contra la Pobreza ofrecieron un análisis radical del tsunami olímpico, junto a grupos religiosos, ecologistas y de indígenas también involucrados. Streams of Justice, el Power of Women Group, No 2010 Olympics on Stolen Native Lands, Van.Act! y el Native Youth Movement fueron otros instigadores fundamentales. Muchos integrantes de estos grupos también trabajaron con la Red de Resistencia Olímpica, una coalición descentralizada, no jerárquica y antiautoritaria.

⁸ Barbara Yaffe, «PM's strategy of controlling message fails to silence opponents», *Vancouver Sun*, 12 de febrero de 2010.

El activismo de Vancouver se acerca más a la noción de organización que Tom Mertes describe en el movimiento por la justicia global —una serie de alianzas y coaliciones continuadas, cuyas convergencias son contingentes— que al antiguo modelo de movilizaciones basadas en solidaridades sociales continuadas⁹. De hecho, sería más acertado llamar a la resistencia contra las Olimpiadas una «alianza en torno a un acontecimiento», ya que el activismo apenas continúa con el paso del tiempo y el cambio de lugar. Conscientes de esta distinción, los activistas coordinadamente le dieron a sus acciones el nombre de «una convergencia de movimientos» en torno al «momento olímpico» en lugar de denominarse un «movimiento social», término que tiende a homogeneizar la heterogeneidad y exagerar la continuidad¹⁰. Los movimientos van encontrando modos de organizarse con mayor flexibilidad, espontaneidad y solidaridad lateral, y la resistencia contra los Juegos Olímpicos en Vancouver es un excelente ejemplo de estas dinámicas.

En febrero de 2003 a los votantes de Vancouver se les ofreció un plebiscito para evaluar el apoyo público a la celebración de los Juegos. A pesar de que los promotores a favor de las Olimpiadas se gastaron 700.000 dólares para persuadir a los habitantes de la ciudad —140 veces más que los del bando del «No»— solamente un 26 por 100 de los ciudadanos con derecho a voto lo hicieron a favor, con una participación del 40 por 100¹¹. Este débil apoyo a los Juegos, aunque anunciado a bombo y platillo por la prensa, no hizo nada por frenar la oposición. Una mezcla poco usual de activistas unió sus fuerzas —disidentes indígenas, defensores de la lucha contra la pobreza, ecologistas, anarquistas, defensores de las libertades civiles y múltiples combinaciones de los anteriores— dando como resultado una solidaridad transversal entre la oposición a los Juegos. La resistencia fue más allá del circuito de las ONG y formó dos líneas de contraataque, una que operaba dentro de las esferas de influencia del poder institucional y la otra que ejercía presión desde el exterior mediante la acción directa.

Resistencia indígena

Los activistas indígenas jugaron un papel fundamental. Merece la pena subrayar que las Naciones Originarias mantienen una relación única con el Estado canadiense en la Columbia Británica. Cuando las colonias británicas se confederaron en provincias canadienses en 1867 el gobierno britá-

⁹ Tom Mertes, «Grass-Roots Globalism», *NLR* 17, septiembre-octubre de 2001, p. 108 [ed. cast.: «Globalismo de base», *NLR* 17, noviembre-diciembre de 2002].

¹⁰ El término «alianza en torno a un acontecimiento» [*event coalition*] pertenece a Sidney Tarrow, *The New Transnational Activism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. Véase también la discusión sobre nuevas formas organizativas en Donatella della Porta y Sidney Tarrow (eds.), *Transnational Protest and Global Activism*, Nueva York, Rowman and Littlefield, 2005.

¹¹ Helen Jefferson Lenskyj, *Olympic Industry Resistance: Challenging Olympic Power and Propaganda*, Albany (NY), New York University Press, 2008, p. 65.

nico ya había firmado tratados con grupos indígenas de acuerdo con la Proclamación Real de 1763, que establecía que únicamente la Corona podría obtener tierras indígenas. Cuando la Columbia Británica entró a formar parte de la Confederación en 1871, solamente se habían firmado quince tratados de este tipo, quedando sin resolver el derecho de propiedad sobre las tierras indígenas en el resto de la región. Con la excepción del Tratado 8, negociado en 1899, y del Tratado de Nisga'a, que se completó en el año 2000, ese derecho a la propiedad de los indígenas sobre su suelo todavía no ha expirado legalmente en la Columbia Británica¹². Carente de una relación regulada mediante tratados, la Columbia Británica, en opinión del intelectual indígena Taiaiake Alfred, continúa «en una dinámica permanente de colonialismo y resistencia»¹³. En 2010 esta dinámica se manifestó con toda su fuerza en el activismo contra las Olimpiadas.

Ecologistas y activistas de las Naciones Originarias unieron fuerzas en lo que llegaría a conocerse como el Bloqueo de Eagleridge Bluffs para oponerse a la expansión de la autopista «del Mar al Cielo» que conecta Vancouver y Whistler. A finales de mayo de 2006 la venerable anciana de las Naciones Originarias y activista Harriet Nahanee fue detenida junto a la veterana ecologista Betty Krawczyk. A pesar de su avanzada edad las metieron en la cárcel sin contemplaciones. En febrero de 2007 con Krawczyk y Nahanee todavía pudriéndose entre rejas, dos activistas interrumpieron la «Ceremonia Olímpica de Cuenta Atrás» escenificada por el comité organizador oficial de Vancouver (VANOC). El defensor de la lucha contra la pobreza David Cunningham y el disidente indígena Gord Hill saltaron espontáneamente al escenario, cogieron el micrófono y lanzaron las consignas de «Viviendas, no Juegos» y «A la mierda el 2010». Tristemente Harriet Nahanee había contraído una pulmonía estando en la cárcel y murió un mes más tarde. En marzo de 2007 los activistas causaron una gran conmoción cuando se hicieron con la enorme bandera olímpica que ondeaba en el Ayuntamiento. Poco después un grupo autodenominado la Sociedad de Guerreros Nativos hizo pública una fotografía de tres activistas enmascarados posando delante de la bandera con una foto de Nahanee.

Las personas pertenecientes a las Naciones Originarias tenían buenos motivos para dudar de que durante las Olimpiadas se les fuera a tratar con respeto. Para la clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de Montreal 1976 nueve Naciones Originarias acordaron participar en una «ceremonia conmemorativa», en la que a sus 200 representantes se les sumaron 250 bailarines no indígenas luciendo trajes y pinturas, en un esfuerzo de ha-

¹² Véase Hamar Foster y Alan Grove, «Trespassers on the Soil», *BC Studies* 139/9, 2003, pp. 51-84; Cole Harris, *Making Native Space: Colonialism, Resistance and Reserves in British Columbia*, Vancouver, University of British Columbia Press, 2002. En la actualidad existen sesenta Naciones Originarias en la provincia que participan en distintos estadios del proceso de elaboración de tratados de la Columbia Británica. Véase [www.bctreaty.net].

¹³ Taiaiake Alfred, «Deconstructing the British Columbia Treaty Process», *Balayi. Culture, Law and Colonialism* III, 2001, p. 42.

cerse pasar por personas pertenecientes a las Naciones Originarias. De acuerdo con el Informe Oficial de los Juegos, el «suntuoso desfile» se volvió «todavía más fascinante gracias al juego de luces y a la espectacular música basada en la *Danse sauvage* de André Mathieu»¹⁴. Al final, tal como observó un crítico, «los bailarines vestidos y pintados para parecer “indios” guiaron a los participantes indígenas a través de su propia ceremonia conmemorativa»¹⁵. Sin embargo, los jefes de las Naciones Originarias Lil'wat, Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh acordaron en 2004 trabajar juntos para celebrar y apoyar los Juegos de 2010, siendo esta la primera vez que el COI permitía a pueblos indígenas ser socios oficiales de las Olimpiadas. Las mascotas oficiales también se inspiraban en las Naciones Originarias: Miga, un oso marino mítico; Quatchi, un *sasquatch*; y Sumi, un espíritu animal. *Indian Country Today*, un semanario dedicado a temas indígenas de toda América, declaró que el acontecimiento era «un escaparate para la cultura autóctona», en donde «la vibrante e integral participación de los nativos en los juegos» quedaba de manifiesto¹⁶.

Los activistas en contra de las Olimpiadas fueron rápidos a la hora de señalar que, aunque la carta olímpica aboga por «promover la preservación de la dignidad humana», el COI eligió celebrar los juegos sobre territorios Coast Salish no cedidos. El fantasma de la expropiación ilegal persiguió, por lo tanto, a los Juegos Olímpicos y «Ninguna Olimpiada en Suelo Indígena Robado» se convirtió en uno de los lemas más destacados contra los Juegos. A pesar de los enormes incentivos económicos, 80 de los 203 grupos indígenas en la Columbia Británica rechazaron rotundamente participar en las Olimpiadas¹⁷.

Seguridad integrada

El blindaje militar se ha convertido en un procedimiento ordinario para las ciudades sede de grandes acontecimientos y Vancouver no fue ninguna excepción. Los presupuestos para la seguridad estaban estimados, en un principio, en 175 millones de dólares, pero finalmente se dispararon a más de mil millones de dólares, en un proceso que el activista indígena Gord Hill calificó de «extorsión policial por parte de la clase dominante»¹⁸. Las autoridades canadienses utilizaron las Olimpiadas como una oportunidad de ele-

¹⁴ Comités d'organisation des Jeux Olympiques. *Montréal 1976. Games of the XXI Olympiad. Official Report I*, Ottawa, 1978, p. 306.

¹⁵ Janice Forsyth, «Teepees and Tomahawks», en Kevin Wamsley, Robert K. Barney y Scott G. Martyn (eds.), *The Global Nexus Engaged*, Londres, International Centre for Olympic Studies, 2002, p. 72.

¹⁶ Hans Tammemagi, «Olympic Games a Showcase for Native Culture», *Indian Country Today*, 24 de marzo de 2010.

¹⁷ Kim Pemberton, «Aboriginal Groups Divided on Whether to Support Olympics», *The Vancouver Sun*, 6 de febrero de 2010.

¹⁸ Entrevista personal, 18 de agosto de 2010.

var el índice de chalecos antibalas per cápita. Incluso *The Globe and Mail* lanzó la voz de alarma: «Uno no tiene que ser partidario de los opositores para estar consternado por la cantidad de dinero que se está gastando en seguridad para las Olimpiadas de Vancouver»¹⁹. Los dirigentes canadienses usaron el dinero para establecer un territorio urbano sometido a una tupida red de vigilancia mediante la contratación de 17.000 agentes de seguridad. La Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos colocó a sus agentes –fundamentalmente integrantes del servicio de inmigración– en el Downtown Eastside, para que pidieran a los residentes su documentación y comprobar su ciudadanía. La policía se enfrentaba a los manifestantes con armas semiautomáticas, normalizando el autoritarismo y multiplicando el miedo. Y, lo que es más importante, el equipamiento policial con tecnología punta para el estado de excepción del presente se convierte así en la norma del mañana: armamento de tipo militar que puede pasar a ser utilizado en el día a día.

La fuerte presencia policial estuvo acompañada de la instalación de cerca de 1.000 cámaras de videovigilancia en el área municipal de Vancouver. La Unidad de Seguridad Integrada de la ciudad había prometido retirarlas una vez terminados los Juegos, pero «retirarlas» no significaba «eliminarlas»²⁰. La vigilancia fue más allá de las lucecitas rojas de las cámaras. El jefe de policía Jamie Graham alardeó de haber infiltrado agentes de seguridad en los grupos en contra de las Olimpiadas: un espía de la policía había logrado convertirse en el conductor de un autobús que transportaba a los activistas a una protesta del relevo de la antorcha olímpica²¹. El detractor declarado de las Olimpiadas Christopher Shaw, autor de *Five Ring Circus*, sufrió un intenso acoso por parte de la Unidad de Seguridad Integrada de Vancouver (USIV). Este acoso comenzó en junio de 2009 cuando la USIV lo comenzó a abordar en su domicilio, en el trabajo y por la calle. A veces los agentes llevaban consigo una copia de su libro y le decían que habían encontrado «información preocupante» que querían discutir con él, o que el investigador de la USIV Jeff Francis «le mandaba saludos». En 2010 estos encuentros eran algo diario y la USIV interrogó a sus amigos, a su novia y a su ex mujer²². Prácticamente cada uno de los participantes de la Red de Resistencia Olímpica recibieron la visita de la USIV para ser interrogados.

¹⁹ Gary Mason, «The Real Threat to the Olympics Could Be a Bloody Protest», *The Globe and Mail*, 11 de febrero de 2010.

²⁰ Office of the Privacy Commissioner of Canada, «Privacy and Security at the Vancouver 2010 Winter Games», agosto de 2009.

²¹ Darah Hansen, «Victoria Cop Infiltrated Anti-Games Group, Jamie Graham Says», *Vancouver Sun*, 2 de diciembre de 2009.

²² El libro de Shaw analiza la trayectoria del COI, desde sus inicios de «empresa relativamente modesta, más o menos centrada en el deporte» hasta convertirse «en una gran corporación internacional». Acertadamente nos advierte de que «una vez que una ciudad se ha embarcado en el viaje para ganarse las Olimpiadas, especialmente una vez que ha sido seleccionada como sede, el COI marca las pautas de los siete años siguientes: virtualmente todo lo que se realiza en la ciudad y en la región circundante se hace para los Juegos Olímpicos, para beneficio económico del COI y para aquellos que dirigen el comité organizador local», C. Shaw, *Five Ring Circus*, cit., pp. 74-75. La USIV realizó otra visita a Shaw justo an-

Todo esto se complementaba con un montón de normas y de leyes extraordinarias. A nivel provincial, la Columbia Británica aprobó la Assistance to Shelter Act [Ley de Ayuda al Cobijo], que efectivamente criminalizaba a los sin techo, permitiendo a la policía llevárselos a los albergues por la fuerza. Michael Barnholden, autor de *Reading the Riot Act. A Brief History of Rioting in Vancouver*, lo cuenta de la siguiente manera: «Durante las Olimpiadas parecía que podías tener solamente los derechos humanos que te pudieras permitir pagar»²³. Un recurso legal ayudó a desarmar la «ordenanza de las señales», pero en línea con las «Directrices de Limpieza de los Recintos» del COI, la ordenanza reformada continuaba prohibiendo las señales que menoscabasen las marcas de las empresas patrocinadoras de los Juegos Olímpicos²⁴. En diciembre de 2009 los responsables del ayuntamiento de Vancouver insistieron en que Jesse Corcoran retirara su mural contra las Olimpiadas de la fachada de la Crying Room Gallery de Vancouver. El mural representaba los anillos olímpicos como caras, cuatro frunciendo el ceño y una sonriendo. Tras la protesta de artistas, activistas y grupos de defensa de las libertades civiles, el ayuntamiento dio marcha atrás y alegó que el mural se retiraba debido a una ordenanza en contra de los grafitis, antes de ceder finalmente y permitir que se volviera a colocar en su sitio.

Estas microluchas ejemplifican la reacción por parte de los defensores de las libertades civiles y de los activistas con antelación a los Juegos y su éxito demuestra la importancia de organizarse pronto y con frecuencia en torno a medidas cuestionables. La Asociación pro Libertades Civiles de la Columbia Británica tuvo un papel importante en este proceso, así como también lo tuvieron aquellos que emplearon la acción directa. En las vísperas de las Olimpiadas la USIV adquirió un Dispositivo Acústico de Medio Alcance (MRAD), la famosa arma sónica de tipo militar empleada en Pittsburg durante las protestas contra el G-20 en 2009. Sin embargo, debido a su mala prensa y a la fuerte presión de los activistas, la USIV prometió antes de los Juegos que eliminaría la función armamentística de su disco duro, reduciéndola fundamentalmente a un megáfono caro. Al final la MRAD se quedó dentro de su caja durante los Juegos²⁵.

tes de la cumbre del G-8/G-20 en Toronto, en un intento de convencerlo de que se convirtiera en informante, una oferta que él rechazó rotundamente. Entrevista personal, 17 de agosto de 2010.

²³ Entrevista personal, 19 de agosto de 2010.

²⁴ International Olympic Committee, *Brand Protection. Olympic Marketing Ambush Protection and Clean Venue Guidelines*, Lausana, 2005.

²⁵ En un gesto supuestamente de ablandamiento, los agentes prometieron «zonas de reunión seguras» para las Olimpiadas. Aparentemente una concesión a los manifestantes, a quienes se les cedía un espacio despejado visible desde las instalaciones olímpicas por los medios de comunicación y los espectadores, las «zonas de reunión seguras» indignaron a los activistas, que las veían como el equivalente a las «zonas de libertad de expresión» o los «rediles de protesta» frente a las convenciones políticas estadounidenses o los Juegos Olímpicos de Beijing. En última instancia, las autoridades se vieron forzadas a descartar esta medida frente a la generalizada oposición popular.

Bloques de apartamentos y tiendas de campaña

El COI iba a iniciar a los habitantes de la Columbia Británica en el «capitalismo del festejo», lo opuesto al «capitalismo del desastre» de Naomi Klein. Desde el primer momento la fiesta olímpica se salió de todos los presupuestos. La marca de los cinco anillos se valoraba, según las estimaciones iniciales, en unos mil millones de dólares, pero un mes antes de los Juegos los costes ya se habían disparado a 6 mil millones, y para cuando finalizaron el cálculo aproximado ya se había catapultado a entre 8 y 10 mil millones; todo esto con el ayuntamiento de Vancouver aportando por su cuenta cerca de 1.000 dólares por habitante. El modelo a seguir eran las denominadas asociaciones público-privadas, en las que lo público paga y lo privado se lleva los beneficios. El alcalde de Vancouver Gregor Robertson –un liberal al estilo del Nuevo Partido Democrático– no fue una excepción; cuando llegaron las Olimpiadas, el cofundador de la compañía de zumos ecológicos Happy Planet se bebió de un solo trago la asociación público-privada hecha de Tang de naranja.

Vancouver se ha convertido en un paradigma de la gentrificación de la era neoliberal, con una brecha entre ricos y pobres que ha crecido hasta convertirse en un abismo. Como ejemplo de lo que Henri Lefebvre vendría a denominar su «contradicción espacial»²⁶, Vancouver es supuestamente la ciudad global más habitable aunque, al mismo tiempo, la menos asequible. En 2010 el precio medio de la vivienda alcanzaba los 540.900 dólares, mientras que la media de los ingresos por unidad familiar era de 58.200 dólares²⁷. En ningún otro lugar resulta más llamativa la diferencia entre los nuevos ricos y los pobres de toda la vida que en el Downtown Eastside de Vancouver, una franja de 8 por 15 manzanas de sórdida intensidad urbana que –sin tener en cuenta las reservas indígenas– es el área postal más pobre de Canadá. Sin embargo, la marcada contraposición de alta «habitabilidad» y pobreza extrema no socava el lugar de Vancouver en el plateado territorio del capitalismo global. Ser la sede de grandes acontecimientos como las Olimpiadas tiende a mejorar esta posición, con un masivo incremento adicional de la turbogentrificación.

Un ejemplo iluminador de las «contradicciones espaciales» surgió el 15 de febrero de 2010, unos pocos días después de las ceremonias inaugurales de los Juegos. Tras una concentración en Pigeon Park que cuestionaba los procesos parejos de gentrificación y criminalización de los sin techo, los participantes bajaron al número 58 de West Hastings Street, donde se adueñaron del espacio propiedad de la infame inmobiliaria Concord Pacific

²⁶ Henri Lefebvre, *The Production of Space*, Oxford, Basil Blackwell, 1991, p. 365 [ed. cast.: *La producción del espacio*, Barcelona, Anthropos, 1984].

²⁷ Economist Intelligence Unit, *Global Liveability Report*, enero de 2010; Frontier Centre for Public Policy, «International Housing Affordability Survey. 2010 Ratings for Metropolitan Markets», p. 39, disponible en internet.

que había sido arrendado para su uso como aparcamiento durante los Juegos. Se trataba de un lugar estratégico, una ubicación altamente visible con la injusticia espacial inscrita indeleblemente en el paisaje social. Concord Pacific ya tenía en sus manos el permiso para edificar una serie de bloques de apartamentos de elevado precio en esa parcela; la misma que resultó lo suficientemente espaciosa como para acomodar las ciento y pico tiendas que acabarían por instalarse allí.

Lo primero que uno veía al entrar en el poblado de tiendas era un fuego sagrado del que se ocupaban ancianos indígenas. Música, talleres y sesiones de intercambio de habilidades llenaban la zona. Food no Bombs suministraban las viandas. Activistas de Streams of Justice, un grupo cristiano defensor de la justicia social, y Van.Act!, un grupo que había surgido de Estudiantes de la Universidad de la Columbia Británica por una Sociedad Democrática, ayudaron con las cuestiones logísticas. Un equipo de seguridad evitaba que intrusos no deseados, tales como las cámaras de los medios de comunicación, entraran en el campamento y ayudaba a aliviar las tensiones que surgían dentro del poblado, llegando a expulsar en un momento dado a dos sospechosos de ser policías infiltrados. El liderazgo surgió de manera natural de los esfuerzos organizativos del Power of Women Group, una serie de residentes del Downtown Eastside –muchas de las cuales eran ancianas indígenas– con profundas raíces en el barrio y ampliamente respetadas dentro de los círculos activistas. Integrantes de este grupo, junto con Dave Diewert de Streams of Justice y Harsha Walia de Nadie Es Ilegal, actuaron de portavoces con los medios de comunicación. Reuniones comunitarias ayudaban prácticamente cada día a establecer y a hacer respetar las normas del campamento y a crear un horario de trabajo²⁸. Este tipo de tareas necesarias han recibido el nombre de «procesos microscópicos de fraguado solidario», impredecibles, sin límites y preferentemente desordenados, y que son «la savia de cualquier movimiento»²⁹.

Resulta importante crear espacios para la disidencia, pues estos ofrecen puntos de contacto no competitivos en donde una diversidad de individuos y organizaciones pueden trabajar conjuntamente. El Poblado de Tiendas Olímpico generó interacciones sociales excepcionales, tales como universitarios entremezclados con gente de la calle, o el profesorado con el subproletariado; ricos intercambios que no habrían tenido lugar en formas de protesta más tradicionales³⁰. Originalmente el plan era mantener el Poblado de Tiendas durante cinco días, pero debido a las energías y a consideraciones políticas, su existencia se extendió más allá

²⁸ Entrevista personal con Dave Diewert, 17 de agosto de 2010; entrevista personal con Harsha Walia, 18 de agosto de 2010.

²⁹ T. Mertes, «Grass-Roots Globalism», cit., p. 110.

³⁰ Aunque más de 100 organizaciones firmaron en apoyo de la acción, numerosos activistas observaron la llamativa ausencia del movimiento obrero en la movilización contra las Olimpiadas.

del fin de las Olimpiadas. Numerosos activistas con los que hablé enfatizaron que la creación del Poblado de Tiendas Olímpico no consistía simplemente en una acción simbólica, sino también en una victoria material; debido a la acción, aproximadamente 85 personas consiguieron una vivienda a través del ayuntamiento de Vancouver y al organismo estatal BC Housing³¹.

El Poblado de Tiendas Olímpico no era la única protesta en la ciudad ligada a la vivienda. La Pivot Legal Society lideró la campaña «Tienda Roja» en la que distintas tiendas de color rojo chillón se plantificaron por la ciudad para concienciar sobre el problema de los sin techo y exigir una política de vivienda nacional. Cualquiera podía patrocinar por 100 dólares una tienda estampada con el lema «La vivienda es un derecho», que le sería entregada a una persona sin techo para darle un lugar en el que vivir temporalmente. Influenciados por la organización francesa de lucha contra la pobreza los Hijos de Don Quijote, que había usado una estrategia semejante a finales de 2006 para concienciar sobre el problema de los sin techo en París, los activistas de Vancouver de la Tienda Roja colocaron tiendas en zonas muy transitadas en las inmediaciones de las instalaciones olímpicas, repartieron panfletos a los aficionados y envolvieron el Pabellón Canadiense con lonas rojas en el proceso de batir el récord Guinness del envoltorio de lona más largo del mundo. A pesar de que el grupo Pivot Legal Society adoptó un enfoque legalista –tenía como objetivo presionar al gobierno federal para que crease una estrategia nacional de vivienda–, donó tiendas rojas para el Poblado de Tiendas Olímpico, una ocupación ilegal del espacio cuyo objetivo era enfrentarse al Estado, no dialogar con él³².

Otro «espacio de oposición» fundamental se forjó en el centro dirigido por artistas VIVO Media Arts Centre, cuyo «Proyecto de Reuniones Seguras» comprendía talleres de «actividades extraescolares», proyecciones, producciones artísticas y un proyecto poético de radio pirata. Una aportación importante fue el foro «Noticias de la Tarde», organizado por Am Johal, Cecily Nicholson y Nicholas Perrin, que se celebró todas las noches a lo largo de los Juegos. En las sesiones de las Noticias de la Tarde los videoactivistas mostraban grabaciones inéditas de las protestas, los artistas respondían a la industria olímpica y sus efectos, y mesas redondas de expertos y activistas debatían cuestiones particulares. Las actividades de VIVO le exigían al arte que jugase un papel fundamental a la hora de reformatear la resistencia contra los Juegos Olímpicos en lugar de relegarlo a ser un simple elemento embellecedor. Los organizadores juntaron de manera efectiva a las comunidades artística y activista de Vancouver, dentro de un espacio neutro libre de bagajes histórico-políticos. VIVO pre-

³¹ Entrevistas con Diewert y Wafia. Alrededor de 45 individuos consiguieron viviendas en una primera ronda y posteriormente 40 individuos más.

³² Entrevistas personales con Am Johal, 5 de febrero de 2010 y 17 de agosto de 2010.

sentó un programa de poetas innovadores formalmente y de artistas que planteaban más preguntas que respuestas, más carácter abierto que cierre poético ordenado.

La poesía en las Noticias de la Tarde se veía complementaba por el «Dispositivo Poético de Corto Alcance», un programa de radio pirata presentado por los activistas poetas Stephen Collins y Roger Farr. El «Dispositivo Poético» formaba parte de una más amplia praxis poética, política y de resistencia contra las Olimpiadas; y emitía recitales y discusiones con activistas poetas locales como Donato Mancini, Rita Wong, Jeff Derksen, Kim Duff o Naava Smolash. Estos programas se retransmitieron periódicamente durante las Olimpiadas³³. A pesar de que la emisora de radio fue clausurada a principios de los Juegos Olímpicos por Industry Canada –un organismo gubernamental que controla la calidad de la radio, la televisión y las telecomunicaciones del país–, cuyos agentes lucían un atavío olímpico, los activistas poetas siguieron adelante, emitiendo su programa a través de internet.

Debatiendo las tácticas

El foro de las Noticias de la Tarde de VIVO jugó un papel crucial como mediador en las discrepancias en cuanto a fines y medios. Se debatía aquí la línea de actuación basada en la «diversidad de tácticas» que numerosas entidades en contra de los Juegos habían suscrito con anterioridad a las Olimpiadas. Esta propuesta implica que activistas con diferentes estilos y distintas preferencias tácticas convenían apoyarse –o por lo menos no menospreciarse en público– los unos a los otros en momentos de discrepancia. No se descartaba en principio ninguna táctica concreta y las críticas debían de quedarse dentro del movimiento, no debiendo llegar jamás a los medios de comunicación dominantes. Una consecuencia puede ser lo que algunos expertos en movimientos sociales han denominado el «efecto del flanco radical», según el cual los movimientos se benefician de tener un ala radical que hace que los objetivos, tácticas y estrategias empleadas parezcan relativamente moderadas y por consiguiente resulten más aceptables para el poder³⁴. La línea de actuación de la «diversidad de tácticas» puede también levantar un puente de solidaridad entre los fervientes seguidores de la no violencia al estilo de Gandhi y aquellos que aceptan la destrucción de la propiedad privada como una táctica legítima; pero es aquí normalmente donde comienzan a formarse las primeras grietas.

El 13 de febrero la Heart Attack March –para «obstruir las arterias del capitalismo»– fue el momento Seattle de Vancouver. Militantes combativos

³³ Véase shorrangepoeticdevice.blogspot.com.

³⁴ Doug McAdam, John McCarthy y Mayer Zald (eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements*, Nueva York, Cambridge University Press, 1996, p. 14.

se separaron de una manifestación planificada y usaron máquinas dispensadoras de periódicos y sillas metálicas para romper los cristales de empresas como la Hudson's Bay Company, desencadenando intensas discusiones sobre tácticas y estrategias tanto dentro como fuera del movimiento. Para los partidarios de esta acción la vinculación histórica de la compañía con el colonialismo británico justificaba los daños materiales; después de todo, la Hudson's Bay Company había sido un agente esencial en la campaña del Estado canadiense en pro de la eliminación del derecho de los indígenas a la propiedad de sus tierras en la Columbia Británica durante el siglo XIX³⁵. Pero aquellos que criticaban el suceso sostenían que tales tácticas únicamente se ganaban la antipatía del público en general y provocaban la cólera de la policía. En particular, los medios de comunicación citaron las declaraciones de David Eby, de la Asociación en Defensa de las Libertades Civiles de la Columbia Británica, en las que afirmaba que el «vandalismo» y el destrozo de cristales lo hacía «sentirse asqueado»³⁶. Unos pocos días más tarde Eby asistió a un encuentro de las Noticias de la Tarde, en el que se esperaba que participase en una mesa de debate sobre las libertades civiles, donde recibió un tartazo de un activista descontento que creía que Eby había traicionado el carácter solidario que apoyaba la línea de actuación de la «diversidad de tácticas».

Este suceso generó un animado debate en VIVO en donde la conversación se iba calentando, pero las calmadas aunque contundentes intervenciones de Nicholson hicieron que la discusión avanzara constructivamente. «El diálogo que entablamos no alcanzó una resolución basada en la racionalidad habermasiana», comentaba Perrin, «pero incluso cuando surgieron profundas divergencias la gente permaneció en la sala y continuó dialogando»³⁷. Unos meses después del incidente de la tarta, Eby comentaba secamente: «El incidente originó un diálogo entre grupos preocupados por cómo hacer un mundo mejor. Originó un diálogo sobre tácticas [...] y sobre la táctica del *black bloc* en particular y sobre si esta contribuye o no a avanzar, desde una perspectiva de los derechos civiles, hacia una forma de cultura más democrática, igualitaria y participativa en Canadá, o si genera lo contrario». Eby dijo que había aprendido una lección: no hacer de observador independiente y ser visto como abogado del movimiento en el mismo momento de conflicto³⁸.

El foro de las Noticias de la Tarde de VIVO contribuyó a sacar a la superficie la siempre presente tensión entre los activistas y su acción directa y las ONG. Los activistas de Vancouver dejaron claro que esta tensión no se puede reducir a bandos opuestos, con los «tradicionales partidos y las cam-

³⁵ H. Foster y A. Grove, «Trespassers on the Soil», cit., p. 53.

³⁶ Robert Matas, «Olympics Protest's Vandalism Denounced», *Globe and Mail*, 15 de febrero de 2010.

³⁷ Entrevista personal, 18 de agosto de 2010.

³⁸ Entrevista personal, 6 de agosto de 2010.

pañás centralizadas» por un lado y «los nuevos movimientos organizados en redes horizontales» por otro³⁹. Las Noticias de la Tarde ofrecía un espacio seguro en donde se podían plantear asuntos decisivos, cuestiones cuya importancia se extiende a Londres 2012 y más allá. ¿Generaliza la línea de actuación de la «diversidad de tácticas» una coartada para la destrucción de propiedad privada? ¿Mina la efectividad de la acción directa? ¿Provoca la antipatía del público? ¿Prepara el camino hacia una solidaridad simbólica? ¿Facilita que los medios de comunicación caigan en el tópico de condenar públicamente a quienes protestan? ¿Se ha convertido en un eslogan vacío que distrae a los activistas? ¿Hace el que nos centremos en una «diversidad de tácticas» que ya no pensemos en más estrategias? ¿Es necesario que las discusiones sobre las tácticas se den en el momento de desacuerdo o deberían tener lugar a la postre? ¿Produce la estrategia masculina de levantar la voz para callar al otro –o un agresivo lanzamiento de tarta– un punto de fractura del que se beneficia el Estado a través de la introducción de infiltrados agresivos en los movimientos para que actúen de agentes provocadores, puesto que los que algunos en Vancouver denominaban «los furiosos machoanarquistas blancos» son fáciles de emular?

Desde los tiempos de Samaranch, los ingresos por derechos de retransmisión han proporcionado la montaña de dinero sobre la que se levanta el COI. Un ejemplo de las estrategias de los medios de comunicación alternativos que brotaron del movimiento contra los Juegos Olímpicos fue la Cooperativa de Medios de Comunicación de Vancouver (VMC). Surgida del Comité de Medios y Comunicaciones de la Red de Resistencia Olímpica, la VMC tenía a la máquina de los medios radicales trabajando a pleno rendimiento, generando para el público información actualizada, arte politizado y todas las noticias «no aptas para su publicación» en los medios de comunicación dominantes. Propiedad de sus lectores, la VMC opera con un modelo de ingresos en el que los sustentadores pagan entre 5 y 20 dólares mensuales. Durante los Juegos, la VMC ofreció visiones alternativas de las Olimpiadas mediante la producción de dos piezas para *Democracy Now!* –la principal plataforma informativa para medios comunitarios de Estados Unidos– y un periódico llamado *Balaclava!* que continúa en funcionamiento en la actualidad.

No obstante, Dawn Paley de la VMC remarcaba que los activistas informativos no pueden restringir su trabajo a medios de comunicación alternativos. Aunque Paley considera que los medios de comunicación dominantes son «medios del *statu quo*», estos son quienes marcan las pautas y por lo tanto no se les puede dejar de prestar atención, puesto que los medios de comunicación basados en redes sociales como Twitter, Facebook o Flickr no constituyen una alternativa real a los adormecidos medios dominantes. A pesar de la creencia popular de que los medios de este tipo

³⁹ Michael Hardt, «Today's Bandung?», *NLR* 14, marzo-abril de 2001, pp. 115-116 [ed. cast.: «Porto Alegre/Bandung», *NLR* 14, mayo-junio de 2002].

permiten crear gran cantidad de contenidos y documentar experiencias horizontales –y probablemente estén contribuyendo a aumentar el número de los participantes en protestas–, para Franklin López, de la VMC, estos servicios basados en la publicidad y orientados hacia los acontecimientos son la «mafia de los medios sociales». López utilizó YouTube durante las Olimpiadas, pero descubrió que una gran cantidad de los vídeos de la VMC eran rápidamente retirados. «Durante las Olimpiadas daba la impresión de que hubiesen automatizado el proceso de eliminar cualquier cosa que no fuese del agrado del COI»⁴⁰. La VMC carecía de recursos o de tiempo para combatir esta censura. Conscientes de este tipo de problemas, los activistas de Vancouver publicaban artículos de opinión en periódicos como *The Vancouver Sun* y aparecían citados como fuentes informativas en numerosas plataformas, contribuyendo a concienciar al público sobre los motivos por los que se estaba protestando.

Revitalizando la resistencia

Tras haber desembolsado más de 8 mil millones de dólares para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, las autoridades canadienses anunciaron grandes recortes presupuestarios. Los fondos para las artes se redujeron drásticamente, provocando la dimisión de la presidenta del Consejo de las Artes de la Columbia Británica en agosto de 2010. El Consejo Educativo de Vancouver anunció un déficit en la financiación de 18 millones de dólares para el curso académico 2010-2011, y esto se tradujo en una reducción de los programas de música y en el despido de cientos de profesores de la ciudad. Para colmo, la provincia supeditó la recepción de dinero de su «Fondo para el Legado Artístico y Deportivo 2010» a la participación en Spirit Festivals diseñados para crear un verdadero legado olímpico⁴¹. Vancouver consiguió un nuevo y muy necesitado servicio ferroviario que conectaba el centro con Richmond y el aeropuerto; pero también contrajo una gran deuda. En palabras del activista Am Johal, «los Juegos Olímpicos son una franquicia empresarial que se compra con dinero público»⁴². Además de esto, el ayuntamiento usó sus avales para rescatar a los promotores que se habían hundido mientras la villa olímpica estaba a medio construir. Quienes han intentado seguir el paradero del dinero olímpico le han perdido la pista tras cada curva. El complejo entramado de sociedades público-privadas está pidiendo a gritos una auditoría, pero ni a la Auditoría General de la Columbia Británica ni la Auditoría General de Canadá se les ha permitido el acceso a los libros de cuentas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Vancouver 2010.

⁴⁰ Entrevista personal, 18 de agosto de 2010.

⁴¹ Peter Birnie y Tiffany Crawford, «Discouraged» Chairwoman Quits Over Lack of Provincial Support», *Vancouver Sun*, 19 de agosto de 2010; «School Board Riled Over Budget Review», CBC, 14 de abril de 2010; Rod Mickleburgh, «BC Arts Groups Blast Funding Cuts», *The Globe and Mail*, 12 de julio de 2010.

⁴² Entrevista personal, 5 de febrero de 2010.

El gobierno también incumplió su promesa –debido aparentemente a exigencias fiscales– de transformar en viviendas sociales una zona considerable de la Villa Olímpica en la ensenada de False Creek. Se esperaba que la residencia de los atletas se convirtiera en la joya de la corona de la promesa de sostenibilidad social, pero en lugar de ello el gobierno local dio prioridad a transformarla en viviendas de alquiler a precio de mercado⁴³. Se ha calificado al complejo de la Villa Olímpica de ser «un símbolo de injusticia espacial recubierto de aluminio» que

marca la gran reterritorialización de la zona de la ribera como un espacio para las elites, enterrando su pasado de clase trabajadora en el barro para que la transformación de éste emerja como una apuesta inmobiliaria que espera determinar el futuro de la ciudad una vez más⁴⁴.

El 15 de mayo de 2010 los activistas aprovecharon el descontento generalizado por el cambio radical de política del gobierno para organizar una protesta tras las Olimpiadas bajo el lema «Promesas Falsas en False Creek». Los manifestantes bajaron a la zona del complejo de viviendas el día de la gran apertura de la operación comercial e interrumpieron el funcionamiento del negocio durante esa jornada. A los ciudadanos disconformes de grupos como Van.Act!, radicalizados después de todas las protestas contra los Juegos Olímpicos, se les sumaron los activistas de Streams of Justice, el Power of Woman Group, la Citywide Housing Coalition y la Impact on Community Coalition. Nuevamente, no se trataba de la emergencia de un único movimiento sino de, tal como lo expresa Diewert, «un sentido de solidaridad o camaradería tal que cuando un grupo llama a la acción, los otros se le suman y participan».

El movimiento contra las Olimpiadas ha revitalizado los círculos activistas. Diewert señala un «acentuado sentido de confianza» que emerge de acciones como el Poblado de Tiendas Olímpico, que «ha conducido a un fortalecimiento de las comunidades de la resistencia» y a «una profunda apreciación de la sabiduría colectiva de las personas». Sin lugar a dudas, las Olimpiadas le dieron a los activistas de toda la vida de Vancouver un empujón positivo y refrescaron sus filas con enérgicos y jóvenes participantes a quienes se concedió una oportunidad única para superar problemas difíciles si se hubieran topado con ellos en tiempos políticos «normales». En palabras de Franklin López: «Estos son unos tiempos verdaderamente especiales para estar en Vancouver». El activista poeta Reg Johanson apunta: «Si el objetivo de la convergencia contra las Olimpiadas era que la gente se comprometiera más con el activismo, eso se ha conseguido»; y la poetisa Mercedes Eng añade, «y además nos divertimos mucho, mucho, mucho». Ahora la diversión se está trasladando a Londres para los Juegos Olímpicos de Verano de 2012.

⁴³ «Olympic Village Social Housing Units Still Empty», CBC, 13 de agosto de 2010.

⁴⁴ Jeff Derksen, «Art and Cities during Mega-Events», *Camera Austria* III, septiembre de 2010, pp. 60-61.

DECISIONES E INDECISIONES

Recepciones políticas e intelectuales de Carl Schmitt

En 1989, Jürgen Habermas consideraba improbable que Carl Schmitt tuviera la misma «capacidad de contagio en el mundo anglosajón» que Nietzsche y Heidegger¹. El abismo espiritual que separaba a la desacreditada *eminencia gris* del poder ascendente del Eje –públicamente, al menos, una figura prácticamente tabú dentro de la República Federal– de los climas y las sensibilidades políticas más progresistas de la anglosfera era demasiado profundo e infranqueable. Dos décadas después, tales predicciones pueden parecer ingenuas. De hecho, la tendencia se ha invertido. Mientras que la recepción de Schmitt en el discurso público y entre los académicos alemanes –aunque en aumento y cada vez más estridente– parece residualmente ligada a ciertas inhibiciones éticas que impiden una aceptación plena y sin condiciones del antiguo protegido de Göring, la bibliografía anglo-estadounidense sobre Schmitt, aparte de algunos análisis críticos, ha generado una rehabilitación menos restringida: bien presenta a un pensador autoritario y fascista a tiempo parcial como precursor y aliado de la revolución neoconservadora, movilizándolo de nuevo la idea de estado de excepción y el concepto de lo político planteados por Schmitt; o bien lo interpreta como una voz radical –incluso crítica– contra una coyuntura histórica mundial caracterizada por el imperialismo liberal que allana todas las enemistades y diferencias geopolíticas². Esta do-

¹ Jürgen Habermas, «The Horrors of Autonomy: Carl Schmitt in English», en J. Habermas, *The New Conservatism. Cultural Criticism and the Historians' Debate*, Cambridge, 1989, p. 135.

² Respecto a la recepción en Alemania, véase Thomas Darnstädt, «Der Mann der Stunde: Die Unheimliche Wiederkehr Carl Schmitts», *Der Spiegel* 39, 2008, pp. 160-161. Respecto a las principales declaraciones de la corriente crítica, véase Stephen Holmes, *The Anatomy of Antiliberalism*, Cambridge (MA), 1993; William Scheuermann, *Carl Schmitt. The End of Law*, Lanham, Maryland, 1999; Mark Lilla, *The Reckless Mind. Intellectuals in Politics*, Nueva York, 2001; Jan-Werner Müller, *A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought*, New Haven, 2003. Respecto a rehabilitaciones menos restringidas, véase Chantal Mouffe, *On the Political*, Londres, 2005; Slavoj Žižek, «Carl Schmitt in the Age of Post-Politics», y otros artículos incluidos en Chantal Mouffe (ed.), *The Challenge of Carl Schmitt*, Londres, 1999; Michael Hardt y Antonio Negri, *Empire*, Cambridge (MA), 2000; Danilo Zolo, *Invoking Humanity*, Londres, 2002; William Rasch, *Sovereignty and its Discontents*, Londres, 2004; Giorgio Agamben, *State of Exception*, Chicago, 2005; Peter Stirk, *Carl Schmitt. Crown Jurist of the Third Reich*, Lampeter, 2005; Kam Shapiro, *Carl Schmitt and the Intensification of Politics*, Lanham, Maryland, 2008.

ble recepción ha rodeado con un movimiento de pinza la corriente liberal-cosmopolita kantiana dominante.

La actual recuperación de Schmitt está resaltada por dos cesuras históricas mundiales: la primera fue el «giro moral y espiritual» conservador de Helmut Kohl y la reunificación alemana; la segunda, la política llevada a cabo por la presidencia de Bush después del 11-S. Mientras que la primera oleada de schmittianos en las décadas de 1980 y 1990 se ciñó en gran medida a una exploración de su crítica al liberalismo y a la democracia parlamentaria –y por consiguiente se limitó a la teoría política y a los estudios jurídicos internos– esta segunda recuperación ha extendido el alcance intelectual de Schmitt a los campos de las relaciones internacionales, la filosofía política y la teoría jurídica internacional³. Tanto en una como en otra, Schmitt ha sido en gran medida descontextualizado y dissociado de su compromiso y su complicidad con el nazismo. Las traducciones, aunque enormemente selectivas, de la voluminosa obra de Schmitt –principalmente la edición inglesa en 2003 de *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Ius Publicum*– siguen a la par⁴.

La doble atracción de Schmitt, como clásico moderno sobre el Estado ejecutivo y significativa figura contra el universalismo liberal, ha provocado una convergencia de posiciones –quizá en un sorprendente *complexio oppositorum*– en todo el espectro político no liberal; si no una convergencia de sus respectivas premisas evaluativas. El registro crítico de Schmitt presenta un punto de referencia común para el rechazo compartido de un orden en apariencia pospolítico y neoliberal, expresado en el discurso de la globalización, que fue abruptamente repolitizado tras el 11-S en una dirección neoautoritaria, ahora en el discurso del imperialismo y el imperio. Este estado de cosas parecía dar doblemente la razón a Schmitt: su diagnóstico de tendencia del siglo xx como la «era de las neutralizaciones y las despoltizaciones» podría ahora unirse a un estado de excepción casi permanente –incluso la excepción por norma– en la concepción del momento político mundial contemporáneo⁵. La nueva constelación compren-

³ Respecto a las manifestaciones en la bibliografía sobre relaciones internacionales, véase Louiza Odysseos y Fabio Petito (eds.), *The International Political Thought of Carl Schmitt. Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order*, Londres, 2007; William Hooker, *Carl Schmitt's International Thought. Order and Orientation*, Cambridge, 2009; Gabriella Slomp, *Carl Schmitt and the Politics of Hostility, Violence and Terror*, Londres, 2009.

⁴ Carl Schmitt, *The Nomos of the Earth in the Ius Publicum Europaeum*, Nueva York, 2003. Textos clave del periodo nazi de Schmitt –principalmente su libro de 1939 titulado *Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für Raumsfremde Mächte* [El orden de los grandes espacios en el Derecho Internacional y la prohibición de intervenir a favor de potencias de espacios extranjeros] y la serie de artículos escritos hacia 1933 para justificar la Ley Facultativa y el asesinato de líderes de las SA en 1934, como los notorios «Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich» y «Der Führer schützt das Recht», bien permanecen sin traducir o han sido publicados por editoriales muy poco conocidas. Cf. Carl Schmitt, *Four Articles, 1931-1938*, editado por Simona Craghici, Corvallis, Oregón, 1999.

⁵ Carl Schmitt, «The Age of Neutralizations and Depoliticizations» [1929], *Telos* 96, 1993, p. 96.

día un gobierno estadounidense hiperpoliticado y neoconservador que actuaba fuera del marco convencional del derecho internacional, al tiempo que neutralizaba a sus socios menores en la zona capitalista y sacaba por completo del campo de la geopolítica legítima a la oposición política internacional (terroristas, piratas y «Estados delincuentes»). En el horizonte de esta visión apocalíptica esbozada por Schmitt asoma un mundo sin exterior político: la *Pax Americana*. En este contexto, el vocabulario schmittiano —el concepto de lo político, amigo-enemigo, estado de excepción, decisionismo, gobierno ejecutivo, *nomos*, panregiones, panintervencionismo y concepto no discriminatorio de la guerra— no solo presenta un redescubrimiento importante y una adición al léxico predominante en las relaciones internacionales, sino que se ha convertido en una jerga significativa para las ciencias sociales en general, presentando un potente contrarrelato al liberalismo imperialista convencional⁶. ¡Carl Schmitt, sin fin!

I. LA LEY Y EL ORDEN SCHMITTIANOS

¿Cuál es el secreto de la contemporaneidad y la actualidad de Carl Schmitt? El argumento radica en un amplio respaldo a la interpretación que Schmitt hace de la era del *ius publicum* —el conjunto de máximas y praxis del derecho internacional de comienzos de la Edad Moderna que se mantuvo, aproximadamente, durante todo el período transcurrido desde 1492-1648 hasta la Primera Guerra Mundial— como sistema de normas jurídicas en funcionamiento para regular los excesos de la anarquía entre Estados en un pluriverso geopolítico sin eliminar la esencia de la estatalidad soberana: es decir, la decisión pública y soberana de declarar la guerra. Esta unidad de espacio y ley —que Schmitt denominaba un *nomos*, para distinguirlo del *cosmos* medieval y el capitalista liberal— giraba en torno a cinco categorías fundamentales: el Estado, como único sujeto legítimo de la guerra y la paz; la soberanía estatal laica y absoluta; el ejecutivo, como árbitro supremo sobre el estado de excepción; la idea de *iustus hostis*, el enemigo justo; y el concepto asociado de «guerra no discriminatoria». De acuerdo con Schmitt, la monopolización de la guerra por parte de los Estados —*ius belli ac pacis*: la ley de la guerra y la paz— eliminó el conflicto violento en los enfrentamientos ideológicos de la «sociedad civil» y reconcentró la violencia organizada en el Estado. Esta apropiación del monopolio de la violencia por parte de los Estados absolutistas formalizó una doble distinción: en primer lugar, entre lo público y lo privado, deslegitimando y desmilitarizando a los actores privados (señores feudales, municipios, haciendas, piratas, órdenes militares) al tiempo que elevó al Estado público como el único sujeto del derecho y la política internacionales;

⁶ Incluso Habermas concibe ahora la cuestión del orden mundial como un enfrentamiento entre el proyecto kantiano y el schmittiano. Jürgen Habermas, *The Divided West*, Cambridge, 2006, pp. 188-193. La corriente cosmopolita liberal dominante se analiza de modo crítico en Peter Gowan, «Neoliberal Cosmopolitanism», *NLR* 11, septiembre-octubre de 2001, pp. 79-93 [ed. cast.: «El cosmopolitismo neoliberal», *NLR* 11, noviembre-diciembre de 2001, pp. 151-165].

y en segundo lugar, entre el interior y el exterior, separando una «sociedad civil» internamente neutralizada y pacificada, por un lado, de una esfera internacional de guerra y paz entre Estados, por otro. Este dualismo fortaleció la distinción entre el derecho público internacional y el derecho penal privado.

Si bien la guerra siguió siendo una manifestación indispensable e irreducible de comunidades políticas concretas –de hecho, la esencia de «lo político»–, el logro supremo del derecho público a comienzos de la Edad Moderna fue el de canalizar la violencia colectiva generalizada –una continua guerra civil europea– hacia una «guerra formal», efectuada exclusivamente entre Estados legalmente reconocidos, de acuerdo con ciertas normas y convenciones. Este cambio suponía, de acuerdo con Schmitt, una clara distinción entre beligerantes y neutrales, combatientes y no combatientes, estados de guerra y estados de paz. Schmitt hacía referencia a estos avances como «acotación de la guerra», algo que él alababa por considerarla una civilización, racionalización y humanización de la misma. La moderna guerra entre Estados pasó a producirse entre iguales, de acuerdo con ciertas convenciones jurídicas aceptadas intersubjetivamente y comúnmente vinculantes –una combinación del derecho a la guerra, *ius ad bellum*, y los derechos en la guerra, *ius in bello*– que implicaban también la firma positiva de la paz. El *ius ad bellum* pasó a separarse de las consideraciones de «causa justa» (*iusta causa*), que fueron declaradas irrelevantes para determinar la legitimidad de la guerra. Esto dio lugar a la noción de «concepto no discriminatorio de la guerra», que eliminaba las doctrinas medievales de causa justa. Así jurídicamente exteriorizadas, las razones para declarar la guerra se situaban fuera de cualquier juicio jurídico, moral o político, dando a entender el mantenimiento de la consideración del enemigo, incluso durante la contienda, como enemigo justo, y no como enemigo personal, criminal o bárbaro. La moral, en ese sentido, quedó separada de la política propiamente dicha. Un universalismo moral destructivo, expresado en las guerras de religión de los siglos xv y xvi, fue sustituido por un saludable relativismo moral en las relaciones interestatales. En consecuencia, el *ius publicum* supuso una ruptura decisiva con las teorías medievales de guerra justa, basadas en el universalismo moral de la *respublica christiana*.

Este nuevo concepto de guerra –a un tiempo pública (es decir, restringido a la guerra interestatal), acotada (es decir, circunscrita por normas de conducta racionales) y no discriminatoria (es decir, moralmente neutral)– contrastaba agudamente con la anterior práctica medieval de la violencia. Dentro de la Europa feudal cristiana, el estatuto que permitía a la nobleza portar armas y, en especial, el instrumento del «feudo», convertían en vanas todas las distinciones entre lo privado y lo público, así como entre lo nacional y lo internacional. Fuera de la Europa feudal cristiana, el enemigo era categóricamente calificado de bárbaro, lo cual incluía, por definición, la amenaza de aniquilación, como muestran las Cruzadas. Este cambio del *ius gentium*, o derecho de gentes, medieval, al *ius inter gen-*

tes, derecho entre gentes, estableció un *nomos* históricamente insólito y ejemplar, capaz de combinar la soberanía estatal sin trabas con los efectos mitigadores de la anarquía que suponía el derecho internacional.

Versalles y después

Esta línea de razonamiento fue invocada convincentemente por Schmitt contra la criminalización impuesta después de la Primera Guerra Mundial al Reich alemán, al que se tachaba de «nación forajida», cuya categoría política de Estado soberano fue revocada por el *diktat* de Versalles. Como Alemania no fue admitida en las negociaciones de paz, y como «culpa de la guerra» y «crimen de guerra» no eran conceptos jurídicos en las relaciones interestatales (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), su formulación e intrusión en el derecho internacional después de 1919 transformó el derecho entre Estados en una incipiente ley nacional mundial, empezando a nacionalizar, remoralizar y juridificar lo interpolítico al introducir un nuevo «concepto discriminatorio de la guerra». Esto reinsertó las consideraciones de guerra justa en la definición de legalidad de la guerra. Dicho cambio, de acuerdo con Schmitt, castraba la esencia de lo político: la decisión soberana de declarar la guerra a un enemigo. Versalles anuló, por consiguiente, la piedra angular del *ius publicum* clásico, debilitando el estatuto de la guerra como la forma más autónoma, pura y elevada de las relaciones interestatales; transformó ésta en un ejercicio de vigilancia, y de ese modo volvió a convertirla en un asunto de interior. Aún peor, la invocación wilsoniana del concepto de humanidad reconectó las concepciones del derecho internacional después de Versalles con las doctrinas medievales de guerra justa, que contenían una tendencia hacia la negación total del «enemigo justo» y su degradación a enemigo de la humanidad, a no humano. De manera correlativa, generó un modo de guerra liberal nuevo y distintivo, con objetivos más totales que las guerras acotadas y limitadas de Europa antes de 1914, ya que tenía como objetivo –además de matar a no humanos– la transformación directa de la política, la sociedad y las subjetividades: la forja de sujetos liberales.

Algunos seguidores de Schmitt detectan en la arrogancia de la política exterior estadounidense después de la Guerra Fría –con su discurso moralista sobre el bien frente al mal, la humanidad contra los terroristas, la imposibilidad de la neutralidad– una reproducción, si bien intensificada, del espectro de Versalles. Todo ello inserto en una proclividad mucho más amplia y esencialmente continua de la política exterior estadounidense desde la Primera Guerra Mundial y su redefinición del derecho internacional. En esto, la invocación de la humanidad conduce, de manera paradójica aunque lógica, a la despolitización de los anteriores «enemigos justos», a su criminalización y declaración de forajidos, a su deshumanización por tratarse de enemigos personales, y a la radicalización y bestialización de la guerra al transformarla en ejercicio aniquilador de matar sin reservas; también al regreso de la tortura como medio legítimo contra

quienes son, por definición, no combatientes; y a la imposibilidad estructural de firmar la paz, al faltar un enemigo legal: una guerra sin fin, cuya terminación temporal es equivalente al asesinato del último terrorista, su encarcelamiento sin juicio, o su recreación como sujeto liberal. La «guerra contra el terror» se considera, asimismo, otra encarnación de la «guerra para acabar con todas las guerras» de Wilson, y paradójicamente tiene un propósito total y es interminable en el espacio y en el tiempo.

El carácter totalizador del «modo de guerra liberal» incluye invariablemente la transformación liberal de los Estados, la sociedad y las subjetividades objetivo de dicha guerra; es estructuralmente incapaz de dejar intactos a un Estado enemigo derrotado y a su sociedad, o de readmitirlo en la «comunidad internacional» —una práctica histórica típicamente ideal, ejercitada con la readmisión de la Francia posnapoleónica en el «Concierto de Europa» acordado en el Congreso de Viena— si no acepta un alineamiento constitucional y social con las normas liberales. Estrictamente hablando, la «forma de guerra liberal» ya no merece el apelativo de «guerra» —de ahí la conmoción en torno al término «guerra contra el terror»— sino que se transforma en una serie de acciones policiales, incluida la biopolitización de las poblaciones, conocida asimismo como intervención humanitaria. Además, la «guerra contra el terror» después del 11-S no constituye un alejamiento de formas más jurídicas y cosmopolitas de política internacional, sino que representa una intensificación de la lógica de ordenamiento liberal del mundo, a pesar del «giro neoconservador» en el gobierno estadounidense. Al final, el argumento es que el periodo contemporáneo presenta una vuelta a las guerras civiles del periodo anterior al tratado de Westfalia, aun cuando la «unidad mundial» estadounidense ha expandido de manera inconmensurable la eficacia del derecho universal en una era global, definida como «universalismo inespecial» guiada por la ideología del «panintervencionismo».

Estos procesos se inscriben en la lógica a largo plazo del alejamiento histórico mundial de la edad de oro de guerras limitadas entre Estados, planteada por Schmitt, que después aparece en retrospectiva como el mayor logro de la civilización europea (y es en consecuencia elevada a dicha categoría): el genio de la jurisprudencia europea. Aparte de esto, algunos observadores contemporáneos han reactivado, normativamente, la idea schmittiana de *Großraum* —un espacio territorial grande o panregión— como elemento fundamental de una organización anticosmopolita y antiuniversal del orden internacional basada en una pluralidad de *Großräume* coexistentes, cada uno bajo el liderazgo de una nación imperial. Contra la inminente amenaza de un «universalismo ilimitado», las panregiones deben proporcionar garantías contra la homogeneización del mundo en una llanura liberal, esenciales para el mantenimiento de la diferencia y el pluralismo; esenciales, de hecho, para la posibilidad misma de lo político, la distinción amigo-enemigo, envuelta en bloques regionales mutuamente excluyentes. Vista sintéticamente, esta explicación presenta una poderosa alternativa y un aparato conceptual contra el discurso reinante del cosmopolitismo liberal; requiere una cuidadosa revisión.

II. UNA BIOGRAFÍA INTELECTUAL

En este contexto viciado, el libro de Reinhard Mehring titulado *Carl Schmitt. Rise and Fall*, calificado por su editor como la biografía fundamental sobre dicha persona, debería recibirse como una buena aclaración, que ilustra la importancia de un pensador oscuro pero brillante que ha redibujado póstumamente las coordenadas conceptuales del debate sobre el poder mundial⁷. Mehring está bien situado para desempeñar esta tarea. En la actualidad profesor de Teoría política en la Pädagogische Hochschule de Heidelberg, es teórico político de formación, tiene un doctorado sobre Carl Schmitt por la Universidad de Friburgo y una habilitación sobre la filosofía política de Thomas Mann por la Universidad Humboldt de Berlín⁸. Una incesante corriente de publicaciones sobre Schmitt –desde su tesis doctoral en 1989, dirigida por Wilhelm Hennis, hasta su obra magna de 2009, todavía en revisión, pasando por una introducción a la obra de Schmitt en 1992 y un libro editado en 2003 con un comentario sobre *El concepto de lo político* de Schmitt– entremezclada con numerosas publicaciones sobre la filosofía política moderna alemana (Weber, Heidegger, Mann, Nietzsche), ha convertido a Mehring en uno de los exegetas de Schmitt más prolíficos de Alemania⁹.

¿Cómo concibe Mehring su tarea de biógrafo? Una biografía sobre el pensador alemán de extrema derecha –junto a Heidegger– más influyente del siglo xx suscita la esperanza de una explicación pormenorizada sobre los principios de la biografía como forma literaria. No encontramos dicha autorreflexión. Por el contrario, unos cuantos comentarios preliminares esbozan las premisas de la interpretación de Mehring: «Esta biografía presenta una historia de la vida y la obra de Schmitt. Desiste de delinear la posición de Schmitt dentro del canon de los clásicos del pensamiento político o la historia del derecho público, y se abstiene de analizar su actualidad, contra la que a menudo se presentan advertencias»¹⁰. Esas autorrestricciones siguen a una serie de afirmaciones bruscas y apodícticas. La influencia directa de Schmitt, declara Mehring, es en la actualidad pasado, aparte de unos pocos pero significativos discípulos que rescataron su obra para una segunda recepción liberal en la República Federal. Sus elevadas pretensiones sistémicas de pensamiento son difíciles de recuperar y sus posturas políticas están en la actualidad profundamente desacreditadas. Además, el *étatisme*, el nacionalismo y el antisemitismo de Weimar ya no existen. Aunque hoy experimentemos, de

⁷ Reinhard Mehring, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall, eine Biographie*, Múnich, 2009, 750 pp.

⁸ Reinhard Mehring, *Pathetisches Denken. Carl Schmitts Denkweg am Leitfaden Hegels. Katholische Grundstellung und Antimarcistische Hegelstrategie*, Berlín, 1989; y *Das «Problem der Humanität». Thomas Manns Politische Philosophie*, Paderborn, 2003.

⁹ Reinhard Mehring, *Carl Schmitt zur Einführung*, 3.^a edición, Hamburgo, 2006; Reinhard Mehring (ed.), *Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen. Ein Kooperativer Kommentar*, Berlín, 2003.

¹⁰ R. Mehring, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall, eine Biographie*, cit., p. 14.

acuerdo con Mehring, un nuevo giro hacia el *Präventionsstaat* y las repolitizaciones masivas del derecho, es necesario volver a situar con firmeza la obra de Schmitt en el periodo de entreguerras y en la catastrófica historia nacional de Alemania desde 1914. De lo contrario, se provocan tergiversaciones.

Tras eliminar mediante un *coup de main* los aspectos más controvertidos de la actual recuperación, Mehring sugiere que Schmitt historizó su propia producción intelectual a modo de serie de respuestas a dificultades y situaciones específicas. En consecuencia, su obra se resiste a ser reconstruida en función de una arquitectura teórica sistémica y general que presaría coherencia y continuidad a la trayectoria intelectual del filósofo. Funciona más bien como una serie de intervenciones inconexas, ligadas a un tiempo determinado y situacionales en configuraciones sociopolíticas transitorias, aparentemente sin un *Leitmotiv* unificador; una polimorfología cuya reconstrucción se ve dificultada por la reformulación, la recodificación y la recalibración constante que Schmitt hizo de sus obras anteriores, llevado por el deseo de mantener el control sobre una creciente *Gesamtwerk*, cuyas polivalencias eluden un juicio definitivo. No hay un sistema identificable, ni es posible una transposición fácil de las categorías schmittianas al presente reconfigurado; esta es la base del intento que Mehring hace de aislar y poner en cuarentena al Schmitt histórico contra su resurgimiento y actualidad contemporáneas: admiradores, falsificadores y detractores por igual.

Así concebida, Mehring proporciona una interpretación semiautobiográfica, personalizada y cronológica, basada en la suposición de que la producción intelectual de Schmitt sirvió como intento autorreflexivo de buscar orientación normativa y autoestabilización en tiempos tumultuosos. En consecuencia, Mehring se sumerge *ad fontes* en los archivos, afianzando su biografía en la exploración de los recientemente transcritos diarios de Schmitt en el periodo de Weimar y la correspondencia del voluminoso *Düsseldorfer Nachlass*, complementado con entrevistas a ex discípulos, compañeros y amigos, ampliamente evidenciadas por 133 páginas de notas. El aparato de bibliografía secundaria principalmente en alemán sigue en gran medida sin abordarse, mientras que el Prefacio señala de pasada la eliminación de algunas fuentes del periodo nacionalsocialista de Schmitt y la falta de acceso a las agendas y los diarios no transcritos posteriores a 1933. En último término, la biografía se establece como un intento de recuperar y reconstruir los acontecimientos clave y los puntos de inflexión –al estilo de una *histoire événementielle*– que salpicaron la vida y la obra de Schmitt, en el registro de una crónica pormenorizada que ofrecerá «mayor facticidad»: una facticidad en apariencia idéntica a la documentada por el propio Schmitt cuando se toma *à la lettre*.

De manera poco sorprendente, Mehring acepta sin dificultad que «la biografía trata de evitar fuertes juicios de valor y retrovalidaciones, en un intento de exponer a cámara lenta las potencialidades y las contingencias

abiertas de la vida de Schmitt»¹¹. De hecho, la organización y la interpretación de la vida y la obra de Schmitt giran en torno a su trayectoria profesional, como indica el subtítulo, *Ascenso y caída*. Porque la caída de Schmitt no equivale a su entrada en el NSDAP el 1 de mayo de 1933, sino que está claramente ligada a su caída entre los jerarcas nazis a finales de 1936. Aparte de la crónica estructurada por la progresión profesional, no se ofrece ningún ángulo determinado para la interpretación de la biografía de Schmitt. «Dadas las dimensiones de su obra, el lector puede pasar a veces por alto la existencia de una tesis sólida»¹².

Cursus vitae

Con el cometido de la obra así determinado –historización, subjetivismo hermenéutico, neutralidad respecto a los valores, crónica pormenorizada, desactualización– ¿qué debemos esperar de la biografía de Mehring? ¿Puede esa autoeliminación del autor y ese enfoque biográfico estricto conducirnos más allá de la *privatissima* del mundo interior de Schmitt? ¿Cuál es el valor añadido de esta enorme empresa? Mehring ofrece el relato convencional del ascenso y caída de un advenedizo social de las provincias católicas del Rin –*parvenu* académico y político, víctima del ansia de poder, recluso desterrado– distribuido en cuatro capítulos principales: ascenso en la Alemania guillermina; más allá de la *Bürgerlichkeit* de Weimar; en el vientre del leviatán nazi; y lenta retirada después de 1945. El principio estilístico formal de la biografía consiste en una alternancia entre densos esbozos, a menudo en estilo taquigráfico, del mundo personal y vital de Schmitt –amigos, compañeros y discípulos; la trayectoria académica y política; las influencias intelectuales y las venganzas académicas; la vida familiar, incluida la bigamia; las escapadas sexuales y alcohólicas; las giras de conferencias y las vacaciones– y breves resúmenes de sus escritos, en ocasiones entremezclados con retratos de adversarios y mentores.

En todo momento, Mehring sitúa las principales obras de Schmitt en relación con la política de su tiempo. Los contornos esenciales del programa de investigación de Schmitt ya son identificables en los escritos de finales del *Kaiserreich*. Su disertación de 1910 en Estrasburgo, *Über Schuld und Schuldarten* [Sobre la culpa y sus formas] estableció la interpretación antiindividualista del Estado planteada por Schmitt: la categoría de culpa se interpreta mediante normas jurídicas positivas del legislador, delimitando el tema de la culpa extrajurídica y moral como un elemento carente de importancia para el jurista. La monografía escrita en 1912 sobre *Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis* [Ley y juicio: investigación sobre el problema de la práctica del derecho] esboza la dis-

¹¹ *Ibid.*, p. 14.

¹² *Ibid.*, p. 14.

posición decisionista de Schmitt, ya contra el positivismo jurídico de Hans Kelsen, al definir el derecho (*Recht*) como algo sujeto a un acto de interpretación por la judicatura, en el transcurso de la aplicación de la ley (*Gesetz*) a casos concretos; un movimiento praxeológico. El vacío entre ambos se llena mediante una decisión interpretativa, el derecho está subordinado al juicio. La Habilitación de Schmitt en 1914, *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen* [El valor del Estado y el significado de lo individual], plantea la idea de construir la personalidad jurídica a través del Estado, concebido como sujeto mediador entre el derecho y el poder; la legitimidad del Estado descansa en su capacidad para codificar y realizar el derecho a modo de Estado de derecho, asignando la subjetividad jurídica al individuo, en contraste con las preestatales y «antropocéntricas» teorías contractuales y del derecho natural. El valor del Estado radica en su capacidad para crear orden. Esta propuesta contempla la legitimidad como algo inmanente al propio Estado; en su éxito o fracaso para establecer el imperio de la ley, y no en un acto de legitimación democrático o extrajurídico de cualquier tipo. El Estado del derecho exitoso institucionaliza para Schmitt un periodo de protección y orden, una mediación contra la inmediatez de la relación entre el individuo y el Estado en tiempos de crisis. Dicha crisis del Estado fue precipitada por la declaración de guerra en 1914; evitada por la declaración de la ley marcial y una Ley Habilitante que autorizaba al ejecutivo estatal –el mando militar– a ejercer poderes de emergencia de gran alcance, revocando derechos constitucionales básicos.

Schmitt recibió en 1915 el encargo de formular un argumento jurídico a favor de la ampliación de las competencias ejecutivas extraordinarias en el periodo de posguerra. La combinación de estado de sitio, guerra civil y revolución socialista en Baviera llevaron al filósofo a ampliar la tarea original, dando como resultado *La dictadura* (1921). Proporciona una historia del derecho constitucional y del moderno Estado unitario, analizado en gran medida en relación con la teoría del Estado absolutista (absuelto de la ley) e introduce la distinción entre dictadura comisarial, es decir, delegada y temporal, y dictadura soberana. Le sirvió a Schmitt para obtener un puesto de profesor en la Universidad de Comercio de Múnich y, posteriormente, su nombramiento también como catedrático en la Universidad de Greifswald, en Prusia, a los treinta y tres años. Simultáneamente, *Romanticismo político* (1919) ajusta cuentas con la pasividad política de un orden social laicizado, individualista y privatizado cuya portadora histórica, la burguesía europea, no consiguió superar la ironía eventual de una estética afeminada y se encontró indefensa contra el espectro de la revolución y los disturbios socialistas. El final catastrófico del *Kaiserreich* –derrota militar, abdicación dinástica, *diktat* de Versalles, pérdida de Alsacia y Lorena, creación del corredor polaco, ocupación militar de la zona occidental del Rin, reparaciones, pérdida de colonias, ejército diezmado, constitución republicana, culpa por la guerra, República Soviética de Baviera, golpes de Estado, huelga general– concentraron el pensamiento de Schmitt en torno a la cuestión del derecho constitucional e internacional

en relación con la soberanía. Al final del periodo guillermino, Schmitt había encontrado su tema de estudio.

Acerca de lo político

Estas preocupaciones iniciales se sistematizan primero programáticamente en su *Teología política* publicada en 1922, que reconsideraba el Estado de derecho y la soberanía desde el ángulo de la excepción: «Soberano es quien decide en la situación de emergencia»¹³. El escenario central no lo ocupa la clásica definición weberiana de soberanía, entendida como monopolio legítimo sobre los medios de violencia, sino el monopolio de la decisión. Schmitt desarrolla su tesis clave en un intento de defender y fortalecer el Artículo 48 de la Constitución de Weimar –gobierno ejecutivo mediante decretos de emergencia– contra el positivismo jurídico. Este tema recorre los principales escritos de Schmitt en el periodo de Weimar: *Catolicismo y forma política* (1923), *La crisis de la democracia parlamentaria* (1923), *El concepto de lo político* (1927), *Derecho constitucional* (1928), *El guardián de la constitución* (1931) y *Legalidad y legitimidad* (1932). Dado que las normas jurídicas solo podían funcionar en situaciones normales, el positivismo jurídico era susceptible de padecer una ceguera despersonalizada, apolítica y ahistórica. La soberanía, de acuerdo con Schmitt, no está investida en el Estado como sujeto jurídico impersonal y objetivo, agregado de normas y leyes, sino que cristaliza de manera intermitente cuando las crisis políticas y el desorden social –situaciones liminales– escapan a las normas constitucionales. Dichas crisis constitucionales exigen que una única autoridad tome una decisión ejecutiva extrajurídica y eminentemente política para reafirmar el orden, basada en el derecho del Estado a la conservación. Los momentos de indeterminación e indecisión en el orden jurídico objetivo requieren actos de decisión subjetiva rápidos, firmes, discrecionales o incluso arbitrarios. *Autoritas, non veritas facit legem*. El decisionismo capta la idea de que la soberanía reside en última instancia en este poder que puede declarar y aplicar el estado de excepción, suspendiendo la constitución en una emergencia; la declaración del mismo no puede derivar de normas jurídicas existentes y de procedimientos de toma de decisiones ordinarios. La decisión soberana es un acto de autoridad autorreferente y no mediado: singular, absoluto y definitivo. Desde el punto de vista jurisprudencial, aparece *ex nihilo*. Este elemento discrecional de «plusvalor político» restableció la primacía de la política sobre el imperio de la ley. La legalidad no agota la legitimidad.

Schmitt complementó el decisionismo con su concepto de lo político¹⁴. Lo definía formalmente como una intensificación de la distinción amigo-ene-

¹³ Carl Schmitt, *Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, Chicago, 2005, p. 5.

¹⁴ Carl Schmitt, *The Concept of the Political*, Chicago, 1996.

migo, que exige en un punto no especificable una decisión política sobre la identificación del enemigo interno y externo, para forjar una unidad política decisiva y mantener la autonomía colectiva existencial. La decisión activa la diferenciación entre dentro y fuera y, en el dentro, lo que debe sacarse y excluirse. Esto precipitó una redefinición del significado de democracia. Para Schmitt, «la democracia exige, por lo tanto, en primer lugar homogeneidad y en segundo lugar –si surge la necesidad– eliminación o erradicación de la heterogeneidad», y no las «discusiones perennes» de la democracia parlamentaria, basadas en el pluralismo liberal¹⁵. Esto ejemplificaba la consolidación de una sociedad democrática de masas e industrial, por lo demás intensamente fragmentada, en una comunidad política socialmente homogénea –y, en último término, un *demos* étnicamente definido (*artgerecht*)– mediante los principios de las primeras articulaciones de la soberanía del ejecutivo autónomo: guerra exterior y represión interior. La política de la excepción se transformaba en la política del miedo como mecanismo socialmente integrador. Al apelar a la *prima ratio* de la conservación, las amenazas supremas a la seguridad y a la independencia degradan y aplastan todas las diferencias internas y generan la unidad y la unanimidad requeridas. La democracia, de acuerdo con Schmitt, se redefine así en términos identitarios como representación directa por parte de los líderes políticos de un pueblo (*Volk*) unificado; esto puede estar mediado por actos irregulares de aclamación espontánea o elementos plebiscitarios que renueven de manera intermitente el vínculo entre el líder y los dirigidos: el mito nacional de la democracia directa. Schmitt deconstruye sistemáticamente el Estado de derecho burgués en favor del Estado total para resolver la crisis de la República de Weimar.

Schmitt avanzó durante el periodo de Weimar mediante una serie de rápidos progresos profesionales. Dejó la Universidad de Greifswald para trasladarse a la de Bonn en 1922, rompiendo con la Iglesia católica –que lo excomulgó– por no haberle anulado su primer matrimonio; después a la Universidad del Comercio de Berlín en 1928, donde destacó como frecuente visitante del círculo del *Tiergarten* –al que Mehring se refería lánicamente como un erótico estado de excepción– y por último a la Universidad de Colonia en 1932, donde se unió a Hans Kelsen en el cuerpo docente de derecho. A comienzos de la década de 1930 se produjo una creciente politización en las actividades extraacadémicas de Schmitt como asesor jurídico, que culminó con su nombramiento como principal abogado defensor en el juicio por la *Preußenschlag* –la abolición de la Prusia gobernada por el SPD como Estado dentro de la República Federal de Weimar– por el *Reichspräsident* Hindenburg. Schmitt defendió la primacía del Estado nacional sobre sus componentes federales. Aunque se movía cada vez más en círculos nacionalconservadores, solo optó públicamente por Hitler después de la Ley Facultativa aprobada el 24 de marzo

¹⁵ Carl Schmitt, *The Crisis of Parliamentary Democracy*, Cambridge, Massachusetts, 1985, p. 9.

de 1933. Se afilió al NSDAP el 1 de mayo de 1933 y fue nombrado consejero de Estado en el Consejo del Estado Prusiano de Göring y profesor de Derecho público en la prestigiosa Universidad Humboldt de Berlín. A esto siguió un periodo de entusiasta participación en el nacionalsocialismo, un antisemitismo feroz y justificaciones jurídicas *ex post* de la Ley Facultativa y el asesinato de los dirigentes de las SA en 1934.

El pensamiento de orden concreto

Los escritos de Schmitt en 1933-1936, con la notable excepción de *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* [Sobre las tres clases de pensamiento jurídico], son principalmente tratados cortos y diatribas envenenadas; forman el nadir moral y científico de su trayectoria. Tras su expulsión del poder –Schmitt, aclara Mehring, no se disoció de los nazis en 1936, sino que los nazis se disociaron de él– retomó su trabajo académico y produjo tres textos importantes: *El orden de los grandes espacios en el derecho internacional; Tierra y mar; y El nomos de la tierra*, escrito en 1943-1945 pero publicado en 1950; así como el volumen titulado *Posiciones y conceptos*, editado en 1940, que recoge los artículos escritos en su lucha contra Weimar, Ginebra y Versalles. Este giro hacia el derecho y la historia internacionales –insuficientemente abordado por Mehring– se basó en un alejamiento paradigmático del decisionismo político, que criticaba el normativismo jurídico «desde arriba», para acercarse al pensamiento de orden concreto, que atacaba el normativismo jurídico y el decisionismo «desde abajo»¹⁶. Este enfoque revelaba otra debilidad en el normativismo, por la cual la formación original de la estatalidad –de hecho, la presencia misma de la normalidad sociopolítica– es un problema no jurisprudencial y extrajurídico. Ni el normativismo ni el decisionismo tenían respuesta a la pregunta ¿qué acto original fundador de la legitimidad precede a los actos de legalidad? ¿Qué constituye el orden territorial? Cualquier respuesta tenía que revisar el derecho constitucional para acercarse a una noción sociológica y políticamente ampliada de la jurisprudencia como nuevo tipo de pensamiento jurídico, al que Schmitt se refería como pensamiento de orden concreto. Aquí, el término *nomos*, en contraste con un cosmos universal indiferenciado, estaba diseñado para cubrir esta deficiencia de la jurisprudencia convencional. Porque «el *nomos* es precisamente la plena inmediatez de un poder jurídico no mediado por las leyes; es un suceso histórico constitutivo, un acto de legitimidad por el cual la legalidad de una mera ley adquiere por primera vez significado»¹⁷. Esta concepción de un acto de legitimidad que antecede a la ley pasó a informar la interpretación que Schmitt hacía de la historia del derecho internacional –desde los Descubrimientos al *Großraum*– porque situaba en el centro de la escena la cuestión de los orígenes del orden espacial y jurídico.

¹⁶ Carl Schmitt, *On the Three Types of Juristic Thought*, Westport, Connecticut, 2004.

¹⁷ C. Schmitt, *The Nomos of the Earth in the Jus Publicum Europaeum*, cit., p. 73.

¿Qué es el pensamiento de orden concreto, en cuanto jurisprudencia sociológicamente mejorada en el derecho internacional? Schmitt ejemplificaba más claramente su giro paradigmático en *El nomos de la tierra*. Se basa en una sola tesis general, que declara que todos los órdenes jurídicos son órdenes concretos y territoriales, fundados por un acto constitutivo original de captura de tierras. Esto establece un derecho primario y radical a la tierra. Los actos de apropiación y distribución de tierras, su partición y clasificación, forman la matriz material que constituye un *nomos*. Schmitt deriva el término *nomos* –en contraste con el de «ley» como código legal (*Gesetz*)– del verbo griego *nemein*, que significa el acto tripartito de apropiar, dividir y pastorear. «El *nomos* es la forma inmediata en la que el orden político y social de un pueblo se hace espacialmente visible: la medida y la división iniciales de la tierra de pastos, es decir, la apropiación de la tierra, así como el orden concreto contenido en ella y que sigue de ella»¹⁸. El *nomos* connota la unidad situacional de un orden espacial (*Ordnung*), y la posición u orientación (*Ortung*) de cualquier comunidad, creando una unidad de espacio y ley. Contra el imperante positivismo jurídico aespacial, ahistórico y despolitizado –que concebía el derecho, interno e internacional, como una red abstracta de normas, unidas entre sí en una jerarquía uniforme, derivada en último término de la *Grundnorm* de la constitución a la que incluso el Estado está sometido– Schmitt opta explícitamente por este acto brutal de captura y ocupación para argumentar a favor de los orígenes metajurídicos de cualquier orden internacional que base su ley en una realidad material terrestre. Los conceptos jurídicos tienen orígenes espaciales. El poder genera el derecho.

Las grandes regiones

Schmitt unió este pensamiento de orden concreto a la crítica contra el orden posterior a Versalles y contra la Doctrina Monroe, estableciendo el terreno intelectual para la visión geopolítica de un nuevo orden territorial de mayores dimensiones. Esto estaba condensado en la idea de *Großraum*, que defendía la coexistencia de varias panregiones, una de las cuales incluía Europa central y oriental, bajo la hegemonía imperial de Alemania. El giro hacia la categoría del *nomos* tenía una doble función. En primer lugar, ofrecía una historia revisionista del derecho y el orden internacionales, porque giraba en torno a una serie de capturas de tierra y «revoluciones espaciales», las cuales servían también para acumular recursos y argumentos intelectuales que legitimasen la *Raumrevolution* y la *Großraumpolitik* de Hitler. En segundo lugar, hizo detonar todas las ortodoxias de la Liga de Naciones, porque la expansión de la Alemania nazi estaba ahora inscrita en la recurrencia transhistórica de los primordiales actos de conquista y apropiación de tierras para la constitución del *no-*

¹⁸ *Ibid.*, p. 70.

mos. La historia se reescribe a la luz de la (geo)política de Schmitt y este revisionismo histórico justifica el imperialismo alemán: un argumento circular perfecto.

La categoría antiuniversalista del *Großraum* acabó formando el punto de apoyo de la estructura teórica del derecho internacional nazi, diseñado para revolucionar el sistema internacional. Schmitt fue suficientemente profético y leal a su propio historicismo radical como para no albergar nociones nostálgicas de vuelta a la civilización interestatal clásica, tal como él la veía. La era de los Estados(nación) y la *Kleinstaaterei* (proliferación de miniestados) después de Versalles estaba irrecuperablemente superada. El futuro, sostenía, pertenecía a un tipo distinto de unidad política, a la que la Doctrina Monroe proporcionaba un precedente histórico y jurídico. El programa normativo presentado por Schmitt para un pluriverso de panregiones se estableció con mayor claridad en una obra de 1939 titulada *El orden de los grandes espacios en el derecho internacional*, publicada antes de que se firmase el Pacto Molotov-Ribbentrop (agosto de 1939)¹⁹. Schmitt criticó mordazmente los dobles criterios jurídicos aplicados por Estados Unidos en Versalles: defendiendo simultáneamente la idea de «autodeterminación nacional» y «no intervención», condicionadas a la aceptación de la democracia y el capitalismo, y al mismo tiempo declarando el hemisferio occidental –Sur y Centroamérica así como el Pacífico– zona exclusiva de Estados Unidos. El hemisferio estadounidense estaba *hors de la loi*, es decir, fuera del marco de la Liga y fuera de cualquier intervención de las potencias europeas.

A la inversa, este gran espacio estadounidense serviría de contrapunto para la noción schmittiana de *Großraum* alemán: una zona de seguridad alemana independiente y autárquica, inmune y acotada contra cualquier intervención por parte de potencias *raumfremde*, es decir, extranjeras. Porque la Doctrina Monroe no solo había prohibido la interferencia de las potencias europeas en los asuntos americanos, sino que también había articulado un concepto jurídico de intervención estadounidense y soberanía limitada de otros Estados dentro del hemisferio occidental. Hitler citó con aprobación la «doctrina Monroe alemana»²⁰.

El amor por Hitler

Pero lo que emerge, al contrario de la declaración inicial de Mehring acerca de la ausencia de centro unificador en la obra de Schmitt, no es una serie de temas y teoremas disonantes e incompatibles, sino un conjunto concordante y congruente de conceptos y posiciones, consecutiva

¹⁹ Carl Schmitt, «Völkerrechtliche Großraumordnung», en Carl Schmitt, *Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Günter Maschke (ed.), Berlín, 1995, pp. 269-371.

²⁰ *Ibid.*, p. 348.

y acumulativamente desarrollados mucho antes de que Schmitt adoptase el *Führerstaat*. Esto tiene connotaciones directas para responder la pregunta fundamental de la biografía: ¿por qué optó Schmitt en abril de 1933 –después de la Ley Facultativa– por Hitler? Porque el fallo conceptual al escribir la biografía como una mera narrativa culmina en la falta de respuesta de Mehring a este momento crucial en la vida de Schmitt. En lugar de ofrecer una explicación razonada a la decisión de Schmitt, Mehring opta por un *Topik* exhaustivo de posibles argumentos y consigue recopilar una lista poco concluyente de al menos cuarenta y tres motivos –desde el resentimiento personal hasta la escatología, pasando por el oportunismo– que pueden, o no, haber influido en esta conversión. Al fin, Mehring concluye que la defensa que Schmitt hizo del *Präsidialsystem* –gobierno ejecutivo por decreto– de Weimar hasta finales de 1932 convierte su entrada en el nacionalsocialismo en una clara «ruptura» en su trayectoria política y teórica, verificada en apariencia por el hecho de que la captura nazi del poder le pareciese una «revolución jurídica». Mehring señala que Schmitt estaba deprimido en enero de 1933. «La lucha contra Hitler ha fracasado»²¹. Esta tesis reitera la interpretación oficial en la comunidad de Schmitt²². Pero ni la indecisión de Mehring respecto a los motivos de Schmitt ni su tesis de la discontinuidad convencen plenamente, porque el perfil del personaje y las posiciones políticas e intelectuales que la biografía ha acumulado para el Schmitt anterior a 1933 proporcionan pruebas más firmes para no considerarla una discontinuidad con las posiciones archiautoritarias formuladas durante su enfrentamiento contra la Constitución de Weimar, sino por el contrario su culminación y conclusión lógica. Porque la visión del mundo cada vez más radicalizada de Schmitt estaba profundamente arraigada en la continuidad orgánica de su predisposición personal y su programa político. Esto creó un grado máximo de compatibilidad entre la ideología y la praxis del nacionalsocialismo, por un lado, y el temperamento y las convicciones de Schmitt, por otro.

Porque de acuerdo con Mehring, Schmitt no solo era un trepador superambicioso, un compañero de trabajo desleal y un aventurero sexual, sino un crítico de toda la vida del liberalismo político, del parlamentarismo, del positivismo jurídico constitucional y del Estado multipartidista, basado en un pesimismo antropológico profundamente asentado; una disposición que se tradujo en un proyecto ideológico coherente que incluía el decisionismo político, la primacía de la legitimidad sobre la legalidad y el Estado total, gobernando contra una sociedad heterogénea. Adicionalmente, Schmitt valoraba los mitos nacionales como instrumentos políticos de movilización de masas e integración social, una lección aprendida de Mussolini, a quien visitaba y admiraba. Fue protagonista clave de un Reich

²¹ R. Mehring, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall, eine Biographie*, cit., p. 304.

²² Esta historia se explica de manera distinta en Bernd Rüthers, *Carl Schmitt im Dritten Reich. Wissenschaft als Zeitgeist-Verstärkung?*, 2.^a ed., Múnich, 1990; y Bernd Rüthers, *Entartetes Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich*, Múnich, 1988.

antifederal y unitario. En política internacional, Mehring reitera la función de Schmitt como eminente opositor a la Liga de Naciones, al derecho internacional anglo-estadounidense y al giro hacia una noción discriminatoria de la guerra; esto lo convirtió en uno de los principales críticos alemanes al orden de entreguerras. Su idea de lo político, basada en el existencialismo político, concebía la declaración de amigo-enemigo con fines de unidad nacional, mientras que su antisemitismo y las exigencias de homogeneidad racial armonizaban con la idea de democracia identitaria. Las credenciales antianarquistas, antimarxistas y antibolcheviques de Schmitt no necesitan elaboración. Sus resentimientos antiburgueses contra la seguridad apolítica de una forma de vida garantizada por una combinación tranquilizadora de propiedad privada y garantías jurídicas son bien conocidos. Todo esto animado por un desencanto metafísico, cuyo reverso era una escatología negativa y una filosofía teológica de la historia, que intentaban revalidar una concepción absoluta del Estado como un mecanismo de contención frente a un campo de fuerzas sociales profundamente laicizadas, principalmente el socialismo, el anticristo.

Aunque estos elementos constituyentes no forman un «sistema» y no establecen *eo ipso* una transición automática al *Führerstaat*, sí proporcionan un rico repertorio de «posiciones y conceptos» —un edificio teórico— cuya afinidad estructural con la ideología y la praxis del nacionalsocialismo deja completamente clara el propio Mehring. De hecho, predestinaban a Schmitt, como a otros cuantos intelectuales alemanes de extrema derecha, a optar por Hitler. Si bien estas compatibilidades ideológicas apoyan la tesis de la continuidad, la tesis de la discontinuidad parece un simple caso de oportunismo político —el cambio de chaqueta política en el último minuto— que le valió el sarcástico epíteto de *Märzgefallener* (uno de los que «se prendaron» de Hitler en marzo) aplicado por los viejos miembros del partido dentro de la cúpula del NSDAP. Para ellos, Schmitt era un chaquetero poco fiable que se había subido al tren demasiado tarde.

La declaración inicial de Mehring señala que la compleja personalidad de Schmitt difícilmente puede abrirse con una llave maestra. Pero la biografía pretende proporcionar algo más que un psicograma personal de un pensador afligido y de talento en una época de extremos; aspira a ser la biografía intelectual de un clásico moderno del pensamiento político. Pero si es así, Mehring demuestra profusamente que la larga vida de Schmitt giró en torno a un centro de gravedad intelectual reconocible: ¿cómo reconsiderar la relación entre el derecho constitucional y el internacional, el Estado y el orden, en una época laicizada de democracia de masas y guerra, pasando a basar la autoridad legítima en una teología política de decisionismo, para diseñar un programa político y científico de ultraautoritarismo ejecutivo y contrarrevolucionario, que revalide la soberanía y la convierta en lo puramente político, más allá del Estado de derecho, y al mismo tiempo se apoye en la declaración de enemigo para garantizar la unidad política existencial y colectiva? Esta problemática profunda y subyacente forma el *basso continuo* de toda la obra de Schmitt, desde sus

primeros escritos en el periodo guillermino hasta la *Teología política II* de la República Federal²³.

III. ¿UNA OPERACIÓN DE SALVAMENTO?

¿Pero podemos separar –más allá de la condena o la apología– las ideas brillantes de Schmitt y el odio a su asociación con el nazismo? ¿Es posible salvar las premisas teóricas de Schmitt –decisionismo, concepto de lo político, pensamiento de orden concreto– y sus conceptos clave –la soberanía como excepción, amigo y enemigo, *nomos* y panregión– como elementos analíticos genéricos, que pueden rescribir la historia del derecho internacional y captar elementos del actual reordenamiento político? Claramente, el eje central del proyecto intelectual de Schmitt gira en torno a las carencias del positivismo jurídico para responder a la cuestión del Estado, en perspectiva histórica. Formuló esta crítica, antes de 1934, desde la perspectiva del decisionismo político; y después, desde el ángulo del pensamiento de orden concreto, como un nuevo tipo de pensamiento jurídico. Los dos métodos que enmarcan las categorías anteriores.

Analíticamente, la idea schmittiana de decisión extrajurídica que ejemplifica la política de la excepción –si bien jurisprudencialmente constituye un importante correctivo para el mundo despolitizado del positivismo jurídico– es poco más que un *passe-partout* susceptible de ser «aplicado» a una gama indiscriminada de regímenes que, en momentos de dificultades, acuden a los poderes de emergencia. La aplicación de los conceptos schmittianos a la excepción solo puede confirmar descriptivamente, a posteriori, una situación ya instituida como *fait accompli*. La explicación de la emergencia está fuera del área de acción de dichos conceptos; y la crítica a la misma no puede formularse desde el vocabulario schmittiano. ¿A qué se debe esto? Dado que el método de Schmitt –ya sea el decisionismo, la distinción amigo-enemigo, o el pensamiento de orden concreto– está privado de cualquier sociología del poder, el decisionismo carece de la analítica para identificar qué constelación o equilibrio de fuerzas sociopolíticas pueden activar y en qué tipo de situación, la política de la excepción y el miedo. El estado de excepción nunca es una creación no relacional *ex nihilo*, un acontecimiento único y autorreferente, equivalente al milagro en la teología, sino que queda ligado a lo social por un indispensable acto de cálculo, que precede a su declaración, en cuanto a sus posibilidades de aplicación y cumplimiento público diario o de resistencia por parte de aquellos sobre los que se mantiene: las relaciones sociales de la soberanía. La excepción sigue residiendo en una relación de poder cuyo punto de referencia sigue siendo lo social. La decisión por sí sola nunca es decisiva. De los dos lados de la excepción –el poder que

²³ Carl Schmitt, *Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie*, Berlín, 1970.

la invoca y el poder que está siendo excluido del normal imperio de la ley— Schmitt solo teoriza el primero.

Desocializada, la concepción schmittiana de soberanía también sigue curiosamente despolitizada: el autor intenta identificar un punto arquimediano no solo fuera de la sociedad, sino igualmente fuera de la política —superaislado de cualquier contestación sociopolítica— para neutralizar por completo la política interior: ultrasoberanía. Esta perspectiva extrapolítica se escoge deliberadamente —y en esto convergen la teología política y el hiperautoritarismo— para determinar con exactitud esa ubicación quimérica que reestabiliza los procesos sociales desde ninguna parte, *ex nihilo*, pero con una fuerza abrumadora: la apoteosis del Estado. Pero este «lugar externo» pertenece realmente a la esfera de la teología propiamente dicha. Aquí, en el extremo, la teología política —la concepción de soberanía modelada a partir del absolutismo y la *plenitudo potestatis* papal— se hunde en un estado de terror arbitrario. El mecanismo de contención de Schmitt, concebido como la fuerza que «frena», se transforma drásticamente en el propio anticristo. La concepción de soberanía de Schmitt constituye una prescripción normativa, diseñada específicamente para una solución hiperautoritaria de la crisis insoluble del Estado de Weimar, y no puede servir de analítica genérica para las invocaciones ubicuas de poderes de emergencia. Es singularmente incapaz de evaluar las diferentes constelaciones y transformaciones entre la autoridad política y las relaciones sociales, la geopolítica y el derecho internacional; en último término, el ordenamiento espacial del mundo.

La captura de la tierra

Pero esta era la tarea asumida por *El nomos de la tierra en el derecho de gentes del ius publicum europaeum* y el giro hacia el pensamiento de orden concreto a mediados de la década de 1930, que generó una reinterpretación de la historia como sucesión de *nomoi* espaciales y jurídicos que relacionaban el presente de Schmitt con un pasado en apariencia remoto y recóndito. La glorificación por parte de Schmitt de la edad clásica de la civilización interestatal europea —el *ius publicum europaeum*— cumplía el propósito de tachar de degenerada y total la concepción anglo-estadounidense del derecho internacional, y convertir a la Alemania nazi y la *Großraumpolitik* en en su justo castigo histórico; de hecho, la portadora de la antorcha del pluralismo geopolítico. Entre los dos ejes centrales que sostienen las ideas de soberanía de Schmitt —el acto bruto de apropiación de la tierra y el estado de excepción extrapolítico— la invocación del *ius publicum* no encuentra posición sistemática; su acercamiento al derecho constitucional e internacional está ilustrado por estas dos perspectivas —arriba y abajo— pero no por el derecho positivista propiamente dicho. A partir del estudio de los descubrimientos del Nuevo Mundo a través de los bloques regionales de *Großraum*, la interpretación de Schmitt oscila permanentemente entre dos grandes abstracciones: la

aceptación literal del *ius publicum*, que respalda un positivismo y un formalismo jurídicos a los que él por lo demás se oponía enérgicamente; y la abstracción de la concreción espacial, que en principio debía proporcionar un antídoto contra la anterior. Entre estas dos reificaciones, cualquier contenido y proceso social determinado desaparece de la vista.

El pensamiento de orden concreto no indica, pues, qué procesos *impulsan* la política de apropiación de la tierra y ordenamiento del mundo, lo cual desemboca en una actitud asociológica y curiosamente no geopolítica (en el sentido de geopolítica como conflicto intersubjetivo): la naturaleza del absolutismo español del siglo xvi, las relaciones entre los conquistadores y la corona española, las relaciones interimperiales entre los crecientes imperios europeos de ultramar siguen sin examinarse. Los procesos concretos de apropiación de la tierra, distribución y relaciones de propiedad en América —el choque geopolítico con los nativos como sujetos históricos— no sólo se mantiene fuera de la imagen, sino que por definición queda fuera de cualquier noción puramente política o geopolítica de conquista como concreción. En este sentido, el pensamiento de orden concreto sigue siendo categórico, porque los conceptos para especificar la dinámica de la propiedad social y las relaciones de autoridad que conducen a la expansión ultramarina no se desarrollan ni despliegan en ninguna parte. La explicación no sociológica que Schmitt da a los descubrimientos del Nuevo Mundo va unida a la ausencia de investigación sobre la naturaleza interpolítica del encuentro. Los amerindios nativos siguen ausentes de esta explicación de las resoluciones regionalmente diferenciadas de conflictos por la tierra y la propiedad. Ni siquiera se les reconoce como titulares pasivos y víctimas de los españoles y los portugueses entrantes, sino que quedan anulados y eliminados de la historia. Schmitt concibe América como un vacío desubjetivado; se pone de manifiesto la analogía histórica entre la «revolución espacial» atlántica y el genocidio de los amerindios, y la «revolución espacial» de Hitler y el juicio²⁴.

La interpretación que Schmitt dio al periodo clásico de la civilización interestatal europea, abstraído de las reivindicaciones de valores opuestas y los intereses en conflicto de la «sociedad civil», es una ficción histórica. Más que institucionalizar una noción laicizada de soberanía despersonalizada que neutralizase la política interior y racionalizase las relaciones interestatales, los Estados absolutistas —el modelo histórico utilizado por Schmitt para redefinir la soberanía— se mantuvieron personalizados, con una elevada contestación sociopolítica, legitimados por la autoridad divina y materializados en la persona de sus respectivos príncipes. Sus rela-

²⁴ Mehring señala que Schmitt «consideraba sin duda el genocidio y el Holocausto como crímenes», sin proporcionar referencias. ¿Qué sabía y qué adivinaba acerca del Holocausto? «A este respecto, solo podemos hacer conjeturas antes de que se transcriban sus diarios de guerra». Reinhard Mehring, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall, eine Biographie*, cit., pp. 428-429. Schmitt mantuvo silencio a este respecto el resto de su vida.

ciones interdinásticas estructuraron los intensos conflictos geopolíticos por «la tierra y el pueblo» a lo largo del periodo del *ius publicum*: la acumulación geopolítica.

Los modos de guerra

Correlativamente, la praxis de la guerra en el *ancien régime* contrasta con el concepto no discriminatorio de guerra acotada planteado por Schmitt: civilizada, racionalizada, limitada y humanizada. Las primeras guerras intraeuropeas no eran enfrentamientos ocasionales regidos por normas —petrificadas por Schmitt como «duelos»— que circunscribiesen estrictamente las relaciones exteriores de los Estados dentro de un orden interestatal esencialmente estable, sino una presencia continua y estructural que alcanzaba sus mismísimos núcleos sociológicos y los transformaba: estados de guerra permanente. Los regímenes políticos del *ancien régime* no solo fueron sociológicamente transformados bajo la presión de las rivalidades militares, sino finalmente agotados y destruidos por la combinación de desbordados gastos bélicos, crecientes deudas públicas, tasas de fiscalización represivas y descontento social. Al final las guerras devoraron a sus propios señores: las familias dinásticas.

Aunque hay pruebas que sugieren que la idea de *Kabinettskriege* intentaba racionalizar la conducta en la batalla, la equiparación de guerra «limitada» y «total», que Schmitt tomó de Clausewitz, es demasiado tosca como para captar la naturaleza de la guerra en la primera Edad Moderna. Claramente, la guerra napoleónica y posnapoleónica marca un cambio cualitativo en la naturaleza de los asuntos militares, aunque esto no significa que pueda calificarse la guerra prerrevolucionaria en general de acotada o limitada en el sentido que le da Schmitt. Su idealización de la guerra en el *ancien régime* falla por la frecuencia, la magnitud, la duración y la intensidad, así como por los costes y las bajas humanas de los conflictos de la primera Edad Moderna. Por ejemplo, al final de la Guerra de los Siete Años, la cifra de bajas en el ejército prusiano alcanzaba los 180.000 soldados, dos tercios de su tamaño total, y una novena parte de la población prusiana. Esto se debió en parte a innovaciones en la tecnología militar, como el desarrollo de armas de fuego, artillería y nuevas técnicas como el fuego graneado de la infantería; y en parte a la amenaza existencial de desmembramiento territorial y repartición que la derrota suponía para las familias dinásticas. De igual modo, la conducta de la guerra no estaba humanizada en lo referente a distinción clara entre combatientes y no combatientes (*ius in bello*). Los efectos de la guerra en las poblaciones civiles eran devastadores. Dado que la logística bélica no estaba adecuadamente desarrollada y los soldados carecían de aprovisionamiento permanente, los ejércitos de la primera Edad Moderna vivían «del terreno», ya fuese del saqueo y el pillaje en suelo ajeno, o por el secuestro y el rescate. Los ejércitos tendían a saquear las áreas civiles en un esfuerzo por alimentarse, lo cual provocaba robos, violaciones, hambrunas y des-

plazamiento de poblaciones. La expresión *bellum se ipse alet*, «la guerra se alimenta de sí misma», capta este problema.

Así, pues, si bien la mayoría de estas «guerras de sucesión» y «guerras comerciales» eran en gran medida redistributivas, en lo que a territorios y control de las rutas comerciales se refiere, y por lo tanto limitadas en sus objetivos bélicos, conviene no olvidar que eran simultáneamente «totales» en la medida en que regiones y reinos enteros se desvanecían (particiones polacas) y que se caracterizaban por un impulso imperial, si no totalizador, hacia la acumulación infinita de territorio y botín, como evidencia su orientación exterior agresiva: el colonialismo. La mayoría de estas «guerras de sucesión», desde la Guerra de Sucesión española o la Guerra de Sucesión austriaca hasta la Guerra de los Siete Años, eran multilaterales, si no «mundiales». Esto también pondría en entredicho la tesis schmittiana de que la asignación de territorios y mares «más allá de la frontera» —la externalización del estado de naturaleza internacional desde Europa— provocó la civilización de la guerra intraeuropea, codificada en el *droit public de l'Europe*. ¿Y cómo podía casar la insistencia de Schmitt en el absolutismo, como modelo histórico para un régimen político decisionista que daba rienda libre a los gobernantes para imponer las leyes y el orden internos, con su supuesta disposición a aceptar la ley en los asuntos internacionales y la racionalización de la conducta militar, formalizada en el *ius publicum*? Esta pretensión de legalidad de las grandes potencias es característicamente antischmittiana. Hablando lógicamente, la insubstantialidad jurídica de la decisión subjetiva debería haber operado en las relaciones exteriores en igual medida que en los asuntos internos, una conclusión que Schmitt no sacó, pero que se acerca mucho más a los archivos históricos.

El olvido de lo social

Además, el contrapeso al sistema interestatal continental por parte de Gran Bretaña a partir de 1713 —empíricamente señalado por Schmitt, pero en teoría reducido a la categoría extrasociológica de «existencia marítima»— eclipsa una explicación social de la transición británica del feudalismo al capitalismo y la transformación después de 1688 de la soberanía dinástica a la soberanía constitucional parlamentaria, esencial para entender el periodo y las fuentes sociopolíticas del contrapeso británico en el siglo xviii. En momentos cruciales de esta reinterpretación a gran escala —1492, soberanía absolutista, tipo de guerra en la primera Edad Moderna, soberanía británica en el siglo xvii, orígenes de la Primera Guerra Mundial, revolución espacial de Hitler— el método del pensamiento de orden concreto se desintegra. Simplemente no consigue revelar las fuentes sociales de las apropiaciones de tierra y las reconfiguraciones espaciales, las transformaciones en la naturaleza de la autoridad y en las relaciones de soberanía, o los cambios en la genealogía histórica de la guerra y la paz. Además, los acontecimientos históricos mundiales que alteraron la perspectiva estatalista es-

pacial de Schmitt –los orígenes del capitalismo y la Revolución industrial; la Revolución francesa y Napoleón; el nuevo imperialismo de finales del siglo XIX y la rivalidad entre imperios; la Revolución bolchevique– están eliminados de este análisis o reciben una atención insuficiente.

Siempre que Schmitt intenta penetrar en lo social, o bien moviliza el registro geomitológico –la existencia marítima británica, la tierra contra el mar– o bien traiciona su propio método; esto está ejemplificado por su paso a la economía política internacional, en forma de Doctrina Monroe e imperialismo estadounidense, para conceptualizar las tendencias canceladoras del espacio propias del capitalismo internacional, aunque transnacional²⁵. Porque la naturaleza predominantemente no territorial de la reestructuración del orden europeo de entreguerras por parte de Estados Unidos proporcionaba una refutación directa de la tesis axiomática planteada por Schmitt de que los órdenes internacionales se basaban en la captura de tierras: Alemania, aunque con un tamaño reducido y obligada a cambiar de régimen, como Austro-Hungría y el Imperio otomano, no fue ocupada ni anexionada. La explicación que Schmitt da a la disolución del *ius publicum* –sugiriendo un nexo constitutivo entre las tendencias del capital transnacional a cancelar el espacio y la transición del *ius publicum* a la era del derecho internacional– desarticula directamente la premisa de su pensamiento de orden concreto.

Este giro abrupto hacia la economía política internacional constituye una *volte face* teóricamente descontrolada, que su propio método no permite. Esto le obliga a desplegar una figura de pensamiento hegeliano-marxista: la separación entre lo político y lo económico, con su análogo internacional, la separación entre un sistema interestatal territorializado y un mercado mundial transnacional y privado²⁶. Simultáneamente, este giro hacia el «argumento de la separación» cancela su tesis central de que el *ius publicum* descansaba ya en la diferenciación entre el estatismo público –con la institucionalización del sistema interestatal a comienzos de la Edad Moderna– y la «sociedad civil» privada. Schmitt da excesiva importancia al impacto de disolución del espacio y la geopolítica ejercido por el capitalismo anglo-estadounidense después de Versalles, asumiendo de hecho un economicismo transnacional más marxista que el propio Marx. La combinación del sistema de la Liga de Naciones con la grandiosa es-

²⁵ Carl Schmitt, *Land and Sea*, Washington DC, 1997, y C. Schmitt, *The Nomos of the Earth in the Ius Publicum Europaeum*, cit., pp. 235-237.

²⁶ «En una obra de 1842-1843, el joven Karl Marx empezó con el diagnóstico de Hegel y fue incluso más allá en una observación importante acerca de Estados Unidos. Marx dijo que, como en las monarquías del siglo XIX, también las repúblicas habían definido la constitución y el Estado en función de la propiedad burguesa. Debido a la separación entre el Estado y la sociedad, entre la política y la economía, dijo que el contenido material del Estado político radica fuera de la política y de la constitución», C. Schmitt, *The Nomos of the Earth in the Ius Publicum Europaeum*, cit., pp. 293-294. Schmitt hace referencia a «Contribución a la crítica de la *Filosofía del derecho* de Hegel» de Marx.

trategia estadounidense no condujo a un «universalismo inespacial» y apolítico en el periodo de entreguerras²⁷. Por el contrario, solo reconstituyó y alineó la geografía política europea con los intereses económicos y de seguridad estadounidenses, sin eliminar la interestatalidad del continente, como la propia *Großraumpolitik* alemana demostraría.

Un constructo erróneo

El pensamiento de orden concreto es singularmente incapaz de proporcionar los conceptos, o la sustancia histórica, para una sociología histórica internacional de cualquier orden humano. De ahí se deduce que, si el pensamiento político internacional y la narrativa histórica de Schmitt son empíricamente insostenibles y teóricamente erróneos –repletos de contradicciones performativas, inversiones subterráneas de las posiciones teóricas, omisiones y supresiones, mitologizaciones y huidas hacia las *épreuves étymologiques*– el resurgimiento neoschmittiano está sostenido en la nada. El pensamiento de orden concreto de Schmitt constituye un intento rudimentario y fallido de desarrollar una sociología del derecho internacional y de la geopolítica, algo que en último término regresa a la teoría histórico-jurídica eurocéntrica de la ocupación geopolítica *tel quel*.

Al final, Schmitt no proporciona respuesta a su propia pregunta: ¿qué procesos han establecido el orden del *ius publicum*? Lo «concreto» es en gran medida lo fáctico. El viaje descendente, de lo concreto a sus múltiples determinaciones internas, y el viaje ascendente de vuelta a lo concreto como un «concreto en el pensamiento», captado en sus ricas determinaciones internas, nunca se emprende²⁸. La facticidad concreta se convierte en una abstracción en la obra de Schmitt. Pero esto no puede realmente sorprender: el pensamiento de orden concreto sigue siendo, en toda la obra de Schmitt, estrictamente extrasociológico, porque las dinámicas laterales de la geopolítica y las «apropiaciones de tierra» siguen abstraídas de las dinámicas verticales de las relaciones sociales y la apropiación del excedente, y no articuladas con las mismas. De hecho, es conscientemente antisociológica, en línea con la *Weltanschauung* genérica de Schmitt como pensador *étatist* contrarrevolucionario. Esta supresión y eliminación de las relaciones sociales ya estaba, por supuesto, prefigurada en su concepto de lo

²⁷ Neil Smith, *American Empire. Roosevelt's Geographer and the Prelude to Globalization*, Berkeley, 2004.

²⁸ La idea de lo «concreto» –junto con «orgánico», «pegado al suelo» y «tónico»– disfrutó de una abrupta trayectoria en la ideología nazi como parte de una promoción idiomática más amplia de las «ideas de 1914» contra las «ideas de 1789». No era tanto una *Wunderwaffe* neohegeliana, como parte de la jerga fascista cuyo propósito explícito era el de contrarrestar la naturaleza «abstracta», «racionalizada» y «desarraigada» de las relaciones sociales inherente en el carácter disolvente de la comunidad propio del capitalismo «judío». El *Raum* concretamente ordenado de origen alemán debía ser defendido y restaurado contra la noción geométrica que consideraba el territorio como una expansión vacía y abstracta debido a la tendencia desterritorializadora del capitalismo.

político, que ahora informaba su concepto de lo geopolítico. Ambos separan lo político, o geopolítico, de lo social; de hecho, dan prioridad y valor a lo político y lo geopolítico sobre, y contra, lo social. Esto hace que la jerga de la excepción (la esencia reformulada de la soberanía) y la jerga de lo concreto (la esencia reformulada de los órdenes territoriales) se vuelvan abstracta, formalista y explicativamente vacía.

La reconstrucción del derecho y el orden internacionales por parte de Schmitt, desde Cristóbal Colón a la revolución espacial de Hitler, recibe su ilustración decisiva de la propia situación política y existencial del autor a comienzos de la década de 1940. Sin llegar a ser propaganda o falseamiento políticos, pero siendo más que tendencioso, puede definirse como producción de ideología: una determinada reinterpretación de la historia del derecho y el orden internacionales. Esto coincidiría con la propia concepción que Schmitt tenía del trabajo intelectual: un combate continuo que crea y recrea conceptos, situados aquí en un periodo especialmente intenso y turbulento que exigía decisión existencial sobre la división amigo-enemigo en la lucha de Alemania por la supervivencia política. Este momento de suprema intensidad política tiñó la visión que Schmitt tenía del campo de la historia. Cualquier reactivación de las categorías schmittianas para la geopolítica actual debe sopesarse y compararse con el hecho de que los métodos principales de Schmitt —decisionismo, concepto de lo político, pensamiento de orden concreto— son incapaces de sostener sociológicamente el registro político y jurídico abstracto a través del cual formuló su crítica ultrarrealista del reordenamiento de entreguerras y la historia más en general del derecho y el orden internacionales; su teoría política lleva consigo un pesado bagaje político autoritario que debe tenerse en cuenta.

IV. ¿UN ORDEN MUNDIAL MULTIPOLAR?

¿Cuál fue, por consiguiente, la prescripción de Schmitt contra el imperia-
lismo liberal estadounidense? ¿Hay alguna fuerza motriz en la idea del *Großraum* como antídoto para un universalismo capitalista percibido como cancelador del espacio? Hacia el final de *El nomos de la tierra en el derecho de gentes del ius publicum europaeum*, Schmitt ofrece tres supuestos especulativos sobre el futuro orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. El primero, la superación de la antítesis existente entre tierra y mar a favor de una potencia victoriosa, que estableciese la «unidad mundial» suprema (una tragedia desde el punto de vista schmittiano); el segundo, el traspaso de la antorcha de «contrapeso extranjero» de Reino Unido a Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría (la segunda peor opción); el tercero, un nuevo equilibrio entre una multiplicidad de nuevos *Großräume*. Este último supuesto sería «racional si los *Großräume* se diferencian significativamente y son internamente homogéneos»²⁹. Aparte de

²⁹ C. Schmitt. *The Nomos of the Earth in the Ius Publicum Europaeum*, cit., p. 355.

esto, Schmitt sigue mostrando vaguedad respecto a la constitución interna de cada panregión y acerca de la naturaleza de las relaciones entre los *Großraum*³⁰.

Las tres concepciones suscitan diferentes preguntas, ninguna de ellas elaboradas en detalle. Aun así, el argumento neoschmittiano normativo se muestra claramente favorable al último supuesto. Pero desde cualquier punto de vista schmittiano, una reconstrucción del concepto de gran espacio dentro de su teoría más amplia nos exigiría distinguir entre la naturaleza interna de un *Großraum*, su constitución, y sus relaciones exteriores, o la estructura de las relaciones entre *Großräume*. Recordemos que la crítica de Schmitt a la democracia parlamentaria y al positivismo jurídico, modelada sobre el fondo de la experiencia de Weimar, lo había llevado primero a afirmar el decisionismo y resaltar el estado de emergencia. El Estado de Schmitt no podía mediar y arbitrar en las tensiones de la sociedad civil sino que necesitaba ser aislado de ella: gobernar en contra de la sociedad civil, proporcionar orden. Esto se basaba en la convicción de que la sociedad industrial, el conflicto de clase y el espectro de una revolución socialista exigían una teoría reformulada del Estado; y en último término, de la dictadura. En otras palabras, Alemania necesitaba un Estado «de contención», suficientemente fuerte como para despolitizar y neutralizar el conflicto social mediante la decisión. Pero dado que cualquier panregión expandida estaría compuesta por una serie de grupos étnicamente heterogéneos, creando un gradiente de poder entre el núcleo imperial, el Reich y sus satélites, este poder debía magnificarse. También tenía que incluir la capacidad para decidir sobre el enemigo «interno» tanto como sobre el enemigo público externo: el necesario antagonismo de la distinción amigo-enemigo, constitutiva del Estado, y la manifestación suprema de soberanía. Dadas estas prescripciones schmittianas, la reactivada noción de *Großraum* no puede dissociarse de la teoría schmittiana del Estado y la democracia racista identitaria. Debería respaldarlos o, dejando atrás este bagaje schmittiano, apartar decisivamente la idea de *Großraum* de la teoría de Schmitt sobre el Estado y la democracia.

Límites regionales

Territorialmente, siguiendo las líneas de la concepción de hemisferio occidental planteada por la Doctrina Monroe, cualquier panregión comprendería un centro imperial y una cadena de países secundarios más pequeños, cuya soberanía estaría condicionada a su alineamiento con la constitución imperial; de lo contrario, se recurriría a la «intervención». Aun así, Schmitt

³⁰ Esta vaguedad revela las precauciones tácticas que Schmitt debía observar bajo la estricta mirada de las SS, ya que su *Völkerrechtliche Großraumordnung* fue objeto de cuatro ediciones entre la primavera de 1939 y julio de 1941, obligándole a ajustar su idea de *Großraum* a los éxitos cada vez más espectaculares de la política exterior alemana.

nunca consiguió aclarar el modo exacto de integración de estos países más pequeños en el nuevo «gran orden imperial»: federal, imperial o de vasallaje. De igual modo, Schmitt no se pronunció acerca de los criterios para la expansión territorial de cada gran espacio: *völkisch*, marcial, constitucional, civilizadora, ideológica, religiosa? El que considerase un requisito la «homogeneidad», sin embargo, supondría necesariamente la implicación en procesos de asimilación y homogeneización liderados por el Estado.

De modo similar, Schmitt no especificó la estructura de las relaciones entre *Großräume*. ¿Emergería un nuevo derecho entre *Großräume* similar al *ius publicum europaeum*? No es muy probable, dada la naturaleza heterogénea de las futuras panregiones. ¿O debían las relaciones entre estos bloques regionales estar sometidas a la distinción axiomática de Schmitt entre amigo y enemigo, creando una espera de enfrentamientos agonales «fuera de la frontera», indispensables para mantener la coherencia, la identidad y la disciplina internas de cada gran espacio? Esto parece adaptarse mejor a las categorías schmittianas, dado que un solo *nomos* que abarque panregiones es inherentemente una contradicción en sí mismo, dejando la necesidad de *nomoi* plurales: todos heterogéneos en cuanto a civilización y, en principio, en guerra entre sí. El autoritarismo decisionista, la jerarquía intrainperial y la anarquía entre los *Großräume*, modificada por el equilibrio, son los elementos más probables del futuro *nomos* de la tierra schmittiano. Cualquier invocación del futuro orden de panregiones de Schmitt como modelo para un regionalismo planetario pluralista necesitaría tener en cuenta estas prescripciones.

La negativa de Schmitt a analizar posteriormente su pensamiento del *Großraum* en relación con la política exterior nacionalsocialista suscita la cuestión final de la compatibilidad teórica de Schmitt con la revolución espacial de Hitler, y su complicidad con la misma³¹. En su respuesta a Robert Kempner, fiscal adjunto en los juicios de Nuremberg, escrita durante su encarcelamiento después de la guerra, Schmitt se mantuvo inamovible, negando con vehemencia cualquier afinidad intelectual entre su concepción de *Großraum* y la política exterior nacionalsocialista. Negó igualmente cualquier contacto personal significativo con la elite nacionalsocialista después de 1936, y afirmó repetidamente la naturaleza estrictamente jurídica y académica de sus estudios. De hecho, intentó darle la vuelta al argumento. La justicia política que en otro tiempo Schmitt denunció en relación con el *diktat* de Versalles, pero que reclamaba con vehemencia para todo el *Führerstaat* —el Führer protege la ley—, fue ahora convenientemente invocada de nuevo para rechazar la política aliada en los juicios de Nuremberg. *Nullum crimen, nulla poena sine lege*. La redefinición retroactiva que Schmitt hizo del *Großraum*, reduciéndolo a una categoría jurídica estricta, evita una identificación fácil con las ideas orgánico-bio-

³¹ C. Schmitt, «Response to the Question: "To what extent did you provide the theoretical foundation for Hitler's *Großraum* policy?"» [1947], *Telos* 72, 1987, pp. 107-116.

logistas haushoferianas o hitlerianas del gran *Lebensraum* alemán. Pero esta poco sincera redefinición táctica de su producción intelectual –haciéndola portadora de un carácter objetivo, no partidista y científico, distante de la aprobación pseudocientífica de sus hasta entonces rivales y enemigos jurados del partido, Reinhard Höhn y Werner Best– se presenta ahora en total contraste con anteriores declaraciones confiadas sobre la naturaleza de la erudición: «Todos los conceptos, imágenes y términos políticos», sostenía Schmitt, «tienen significado polémico. Se centran en un conflicto específico y están ligados a una situación concreta»³². La ciencia política y la jurisprudencia están en sí sometidas a, y al servicio de, la diferenciación más elevada e intensa –la distinción amigo-enemigo– que exige un acto de decisión existencial. Y Schmitt había asumido esa decisión políticamente, no jurídicamente. Al final, se sintió obligado a describir de nuevo y alinear su praxis intelectual con la que constituía su antítesis vital: neutralizaciones y despolitizaciones.

V. LEGADOS

En la última parte de la biografía, Mehring recuerda que Schmitt, liberado tras un breve periodo de encarcelamiento y declarado inocente por los tribunales de crímenes de guerra, volvió enseguida a la vida intelectual como un Néstor de varias disciplinas –historia, derecho, filosofía y teoría política– a pesar de que la pérdida de su *venia legendi* le impidió recuperar el puesto de profesor. Se vio obligado a dar seminarios *privatissime* en su vieja casa de Plettenberg, asistiendo también durante las décadas de 1950 y 1960 en Ebrach a seminarios de organización privada a los que uno de sus organizadores, Ernst Forsthoff, antiguo miembro del NSDAP, denominaba contrauniversidades. Renovó los contactos con antiguos compañeros y camaradas, encontró fama y un segundo hogar intelectual en la España de Franco, se burló de la tiranía de los valores liberal-constitucionales en la recién fundada República Federal y las autodeclaradas desnazificaciones de ex compañeros nazis. Pronto recuperó influencia intelectual en Alemania Occidental a través de discípulos de segunda y tercera generación, confidentes e interlocutores. Entre ellos se encontraban Forsthoff, presidente del Tribunal Supremo Constitucional de Chipre entre 1960 y 1963; Ernst-Wolfgang Böckenförde, más tarde juez del Tribunal Constitucional alemán; Johannes Winckelmann, editor de *Wirtschaft und Gesellschaft* de Max Weber; Reinhart Koselleck, Roman Schnur, George Schwab –que introdujeron la obra de Schmitt en la anglosfera– y Odo Marquardt, asociado con la Escuela Ritter de Münster.

Estas son, en muchos aspectos, figuras muy distintas y Mehring aclara las distancias intelectuales y políticas tomadas respecto a Schmitt y las convicciones schmittianas sostenidas y desarrolladas por miembros clave del

³² C. Schmitt, *The Concept of the Political*, cit., p. 30.

grupo. Suficientes elementos comunes se mantuvieron para que algunos miembros de este círculo más cercano lanzasen en 1961 la revista política *Der Staat* que sigue siendo hoy en día una de las revistas conservadoras más influyentes de la teoría del Estado y teoría constitucional en Alemania; y organizasen y contribuyesen a una serie de *Festschriften* hasta la muerte de Schmitt en 1985, a los noventa y seis años. *Crítica y crisis*, de Koselleck, y su enormemente influyente proyecto de varios volúmenes denominado *Historische Grundbegriffe*, coeditado por Otto Brunner y Werner Conze –un diccionario histórico sobre conceptos sociopolíticos en Alemania, basado en el método de la historia conceptual– siguen algunas de las principales figuras de pensamiento schmittianas, sobre todo en las entradas correspondientes al estado de excepción, la guerra, la paz, el derecho internacional y el Estado³³. Wilhelm Grewe, discípulo de primera generación de Schmitt y miembro del NSDAP, fue posteriormente embajador de Alemania Occidental en Washington, Tokio y la OTAN. En 2000, su libro titulado *Las épocas del derecho internacional*, que presenta una versión actualizada del *Nomos* de Schmitt, y considera las grandes potencias como portadoras de sucesivos proyectos de derecho internacional, fue traducido al inglés³⁴. En 1955, Grewe había formulado la denominada doctrina Hallstein, que declaraba que Alemania Occidental no establecería ni mantendría relaciones diplomáticas con ningún Estado que reconociese a la República Democrática Alemana. La doctrina fue finalmente abandonada por Willy Brandt en el contexto de la *détente*. La lista puede ampliarse³⁵.

El análisis hecho por Mehring sobre la influencia formativa de Schmitt en una amplia gama de disciplinas y sus principales exponentes, en las profesiones jurídicas y diplomáticas, y en los jueces del Tribunal Constitucional de Alemania Occidental –una recepción liberal, nos tranquiliza– difícilmente corrobora la afirmación inicial de que la influencia directa de Schmitt está hoy superada. De hecho, si su presencia académica y su actualidad en Alemania están ahora bien establecidas, el renacimiento político de Schmitt se mantiene a la par. *Selbstbehauptung des Rechtsstaates* [Autoconservación del Estado de derecho], publicado en 2007 por Otto Depenheuer –profesor de Derecho en la Universidad de Colonia, Depenheuer es director del Instituto para la Filosofía del Estado y la Política Jurídica– no oculta sus credenciales neoschmittianas y ha sido recomendado con aprobación por Wolfgang Schäuble, entonces ministro de Interior y ahora ministro de Finanzas alemán. La tesis del libro fue pronto puesta a prueba por el uso de aviones Tornado de la *Luftwaffe*, volando bajo para aterrorizar a los manifestantes que protestaban contra la cumbre del G8 de 2007

³³ Reinhart Koselleck, *Critique and Crisis. Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society*, Oxford, 1988.

³⁴ Wilhelm Grewe, *The Epochs of International Law*, Berlín y Nueva York, 2000.

³⁵ J.W. Müller, *A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought*, cit.; Christian Joerges y N. Singh Ghaleigh (eds.), *Darker Legacies of Law in Europe. The Shadow of National Socialism and Fascism over Europe and its Legal Traditions*, Oxford, 2003.

en Heiligendamm, un incumplimiento de la separación constitucional de las condiciones de participación del ejército y la policía en Alemania³⁶.

Ceñida al ámbito alemán, la óptica de Mehring olvida la imagen más amplia. Schmitt generó legados intelectuales y «diálogos ocultos» fuera de Alemania. A través de una serie de emigrados alemanes –el más destacado Hans Morgenthau y, en menor medida, Leo Strauss– su pensamiento fue fundamental para la bifurcación en el Estados Unidos de posguerra de los estudios internacionales en el derecho internacional, siguiendo una perspectiva legalista y positivista-formalista, y las relaciones internacionales, con orientación política de poder³⁷. Pero el legado académico parece inocente en sí si se compara con la invocación de la distinción schmittiana entre amigo y enemigo –solo superada por las referencias a Strauss y Nietzsche– en el neoconservadurismo estadounidense. El concepto básico de lo político que Schmitt construyó para defender Alemania contra el imperialismo estadounidense es ahora movilizado por los neoconservadores para cultivar una ética existencialista para una comunidad de valores estadounidenses patriótica, heroica y que deja de lado el Estado del bienestar³⁸. Pero el neoconservadurismo va más allá de este dualismo estático al añadir un discurso con una enorme carga ideológica de promoción de la democracia y la libertad, el cual trasciende la mera articulación de las diferencias geopolíticas para formular una teoría dinámica del imperialismo estadounidense: ni el «gobierno mundial» ni el *Großraum*, sino un frente flexible de los «dispuestos» frente a los «reacios», que se alimenta con la idea de dirección teatral y permanente movilización del estado de excepción: una guerra sin fin. El resultado schmittiano neto, esbozado en la Doctrina Bush y ejecutado en la guerra global contra el terror, incluye, entre otros: el fortalecimiento de las prerrogativas ejecutivas; la doctrina de guerra preventiva; la abrogación de las libertades civiles básicas; las entregas secretas y las detenciones indefinidas; el uso de la tortura; los crímenes de guerra y la negativa a aplicar la Convención de Ginebra a los prisioneros de guerra. Pero estos linajes intelectuales y legados políticos –la actualidad de Schmitt– no entran en las reflexiones de Mehring.

¿Neutralización?

La biografía acaba simplemente con la muerte de su sujeto y una cita hecha por Schmitt de la *Odisea* de Homero, también referenciada en su tum-

³⁶ Otto Depenheuer, *Selbstbehauptung des Rechtsstaates*. Paderborn, 2007.

³⁷ Alfons Söllner, «German Conservatism in America: Morgenthau's Political Realism», *Telos* 72, 1987, pp. 161-172; Martti Koskenniemi, *The Gentle Civilizer of Nations*, Cambridge, 2001, pp. 413-509; William Scheuerman, «Carl Schmitt and Hans Morgenthau: Realism and Beyond», en Michael Williams (ed.), *Realism Reconsidered. The Legacy of Hans Morgenthau in International Relations*, Oxford, 2008, pp. 62-91.

³⁸ Jean-François Drolet, «A Liberalism Betrayed? American Neo-Conservatism and the Theory of International Relations», *Journal of Political Ideologies* XV, 2, 2010, pp. 89-118.

ba, que evoca el término *nomos* en una última cortina de humo verbal. No hay conclusión o epílogo que intente efectuar una evaluación en conjunto de su vida y obra, o que intente efectuar un resumen del libro. Mehring se desvanece tras Schmitt, concediéndole la última palabra. Pero ninguna biografía reproduce sin más una vida, incluso aunque —como aquí— se haya basado exhaustivamente en documentos autobiográficos. Sigue siendo la construcción de un autor, un *bios* literario. Incluso aunque Mehring desista de articular juicios de valor, el mensaje desdentado de este «libro sin tesis» puede recogerse de una serie de comentarios comprensivos: personalidad compleja y enigmática, contingencias y encuentros fatídicos, atrapamiento y enredo, peligros de la zona gris entre ciencia y política, polivalencias y polimorfología, destino y fortuna. Su efecto es el de disolver la autoría de Schmitt y transformarlo *sotto voce* de actor activo en víctima pasiva de fuerzas situadas fuera de su control: una vida que surcó trágicamente las olas de la historia. La pasión que durante toda su vida mantuvo Schmitt por la autonomía de la decisión se convierte en su opuesto. «Yo no he decidido nada. Ha decidido Hitler»³⁹. El juego con la paradoja se vuelve surreal.

La adopción por parte de Mehring de una perspectiva en gran medida hermenéutica —dejando aparte el periodo nazi de Schmitt— efectúa prácticamente una fusión entre el autor y su tema. Esta reescritura de la biografía de Schmitt para convertirla casi en una autobiografía amenaza con silenciar por completo la voz de Mehring, y volver afirmativas las autointerpretaciones y autoestilizaciones de Schmitt. Esta eliminación como autor, le impide a Mehring distanciarse de las propias racionalizaciones *ex posteriori* de Schmitt sobre su viaje por un siglo desastroso: su autodescripción como un «cuervo blanco», atrapado y seducido por la *res dura* de la política del poder; su autocomparación con la figura trágica del Benito Cereno de Melville, el capitán secuestrado por su tripulación amotinada; o su comparación de la casa de Plettenberg en la posguerra con el San Casciano de Maquiavelo, la retirada impuesta externamente de una *vita activa* en política. Para Mehring, la biografía de Schmitt se caracteriza en el fondo por una doble pérdida, encarnada en las dos derrotas militares de 1918 y 1945, que tiñó la vida de Schmitt como una larga historia de decepciones, reflejando la de la Alemania del siglo xx. Pérdida y victoria, derrota y liberación, agente y víctima, ninguna de estas diferenciaciones cruciales puede hacerse dentro de una encapsulación supuestamente neutral en cuanto a los valores, que sigue metida en el mundo schmittiano. El trabajo de interpretación se disuelve en la empatía: *relato refero* (digo lo que me han dicho).

En un párrafo fundamental de la disertación presentada en 1989 sobre Schmitt, un Mehring más joven declara:

³⁹ Reinhard Mehring, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall, eine Biographie*, cit., p. 35.

El partidismo de Schmitt le da un significado ejemplar a su obra. Cada fascinación por el erudito debe afrontar sus consecuencias políticas, si no quiere quedarse en una ingenuidad. Esto es asimismo cierto respecto a los intentos más recientes de rehabilitar a Schmitt por medio de su influencia intelectual y su posición en las ciencias humanas y sociales: toda la investigación sobre Schmitt es política, porque sigue capturada por el partidismo de Schmitt como punto focal de su obra⁴⁰.

Pero la medida para afrontar sus consecuencias políticas no es ni la negación y la indignación o la exasperación moralistas –cuidadosamente reservadas por Mehring al periodo nazi de Schmitt, aunque acotadas para el resto de su vida– sino un juicio detallado sobre los límites del edificio intelectual de Schmitt y sobre lo políticamente aceptable, dentro de la totalidad de su obra; para sus tiempos y para los nuestros. El que Mehring haya retrocedido desde estas anteriores admoniciones, en un intento por normalizar y despolitizar a Schmitt para un público más amplio y un *Zeitgeist* conservador, no solo indica una pérdida de coordenadas políticas, normativas e intelectuales –un *Standpunkt*– sino también una asimilación inconsciente del diagnóstico de Schmitt sobre la tendencia a largo plazo del siglo xx, la era de las «neutralizaciones y las despolitizaciones», cuya verosimilitud y veracidad fueron debilitadas en primer lugar por el decisionismo y la toma de partido de Schmitt por el nacionalsocialismo. El incansable anuncio de la era de las neutralizaciones, de un fin desideologizado de la historia que supere la izquierda y la derecha, por las potencias futuras, era en sí un ejercicio ideológico del mayor orden político, algo que Schmitt fue suficientemente agudo como para reconocer y criticar. Esta simple maniobra dialéctica schmittiana parece haber pasado desapercibida para Mehring.

⁴⁰ Reinhard Mehring, *Pathetisches Denken. Carl Schmitts Denkweg am Leitfaden Hegels. Katholische Grundstellung und Antimarxistische Hegelstrategie*, cit., p. 23.

Michael H. Lessnoff, profesor de Teoría política en la Universidad de Glasgow, es autor de *The Structure of Social Science. A Philosophical Introduction* (1976), *Social Contract* (1986), *The Spirit of Capitalism and the Protestant Ethic. An Enquiry into the Weber Thesis* (1994) y *Ernest Gellner and Modernity* (2002).

Imprescindible para el lector interesado en el pensamiento político o en la historia de nuestro tiempo.

978-84-460-1293-1
336 páginas



El presente libro ofrece un excepcional estudio de los principales filósofos políticos del siglo xx. Con un análisis claro, inteligente y autorizado el autor demuestra que este siglo produjo toda una pléyade de filósofos políticos perfectamente comparables a los de épocas anteriores, desmontando la creencia generalizada de que la filosofía política murió en el siglo xx. La originalidad en teoría política siempre ha sido impulsada por nuevos problemas y crisis, de los que éste, el siglo más político de todos, no estuvo precisamente exento.

Lessnoff examina las propuestas a las crisis políticas de ofrecidas tanto por escritores liberales como por neomarxistas, sin olvidar a pensadores más difícilmente clasificables, como Hannah Arendt y J. Habermas. Muestra también cómo las teorías políticas del siglo xx se constituyeron como reacción a fuerzas sociales e ideológicas profundamente arraigadas tales como la burocratización, la racionalización y el «desencanto».



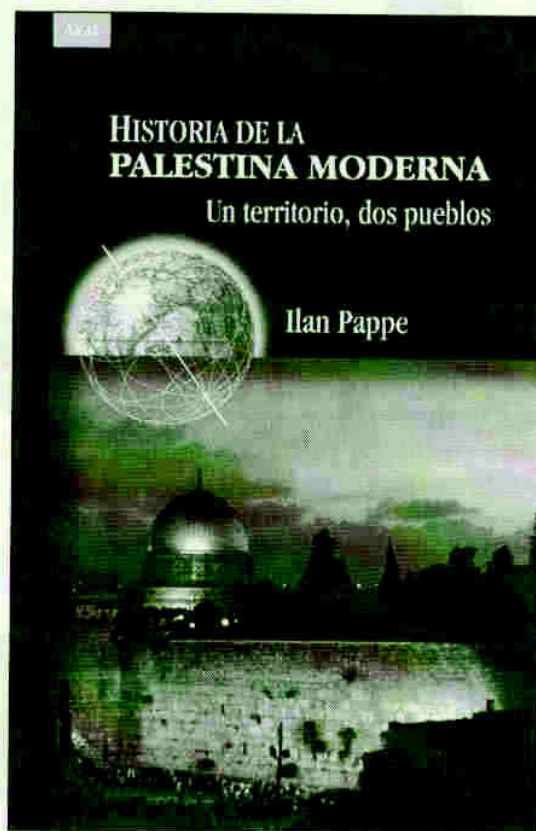
akal

www.akal.com

COLECCIÓN HISTORIA

HISTORIA DE LA PALESTINA MODERNA
Un territorio, dos pueblos

En este magistral estudio, Ilan Pappé aborda la historia de Palestina, una tierra habitada por dos pueblos con identidades nacionales distintas. El libro comienza en el periodo otomano, a principios del siglo XIX y traza un recorrido que va desde la llegada de los primeros sionistas al mandato británico, la creación del Estado de Israel y las subsiguientes guerras y conflictos. En el eje central de la obra están los que vivieron en esos tiempos, hombres y mujeres, niños, campesinos, obreros, judíos y árabes. Su libro es una contribución única a la historia de esta tierra conflictiva que todos los interesados en Oriente Medio deberían conocer.



ISBN: 978-84-460-2255-8
480 páginas



akal

www.akal.com

¿POST-POSTSIONISMO? Ante la muerte de la solución de los dos Estados

El sector de la sociedad israelí una vez célebremente definido como el «público ilustrado» ha atravesado una profunda crisis intelectual y moral durante los últimos diez años¹. Formado mayoritariamente por los aske-nazíes laicos, educados y adinerados, históricamente afiliados al laborismo sionista, esta capa había sido modelada por su oposición a la ocupación israelí de los territorios capturados en 1967 y por su posición favorable a una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí. En julio de 2000, el fracaso en toda regla en Camp David del proceso de paz de Oslo, la segunda Intifada que vino a continuación –sin olvidar el recurso palestino a los atentados suicidas– y la elección de Ariel Sharon como primer ministro de Israel en 2001 pusieron en tela de juicio esta perspectiva. La mayor parte de los miembros del «público ilustrado» reaccionaron desplazándose hacia la derecha y adoptando el discurso dominante del Estado, que retrataba a los palestinos como los responsables del fracaso de los esfuerzos de paz. El historiador Benny Morris fue un conocido ejemplo de este cambio.

Entre los que, en mayor o menor grado, continuaron mostrándose críticos con la política israelí hacia los palestinos se encuentra un cierto número de destacados intelectuales que han vuelto a reexaminar recientemente sus posiciones. En este artículo examinamos tres trabajos de autores que pertenecen a esta categoría; cada uno de ellos adopta un enfoque distinto al tratar la nueva realidad política². En *This Regime Which is Not One*, Ariella Azoulay y Adi Ophir pretenden descubrir la estructura del dominio israelí sobre los territorios ocupados y su relación con el orden democrático dentro de las fronteras de Israel anteriores a 1967, a través de una densa descripción del régimen de ocupación divorciada de la

¹ El epíteto fue acuñado por Aharon Barak, anterior presidente del Tribunal Supremo de Israel.

² Ariella Azoulay y Adi Ophir, *This Regime Which is Not One: Occupation and Democracy Between the Sea and the River (1967-)*, Tel Aviv, 2008; Boaz Neumann, *Land and Desire in Early Zionism*, Tel Aviv, 2009; Yehouda Shenhav, *The Time of the Green Line. A Jewish Political Essay*, Tel Aviv, 2010; todos ellos en hebreo, aunque para principios de 2011 se publicará una traducción inglesa del libro de Neumann.

historia del sionismo. *Land and Desire* de Boaz Neumann es una extasiada descripción del amor por la tierra de los primeros pioneros sionistas, carente de cualquier contexto, histórico o de otro tipo. En *The Time of the Green Line*, Yehouda Shenhav celebra el fin de las fronteras anteriores a 1967 y construye otra línea divisoria: entre la elite liberal askenazí y sus víctimas, no solo los palestinos sino los judíos mizrajíes y todos los judíos religiosos.

Nosotros sostenemos que las tres acaban afirmando, directa o indirectamente, los principios básicos del sionismo y, de hecho, la ocupación israelí de los territorios capturados en 1967. Esto puede parecer una declaración sorprendente, ya que los autores en cuestión están considerados entre los críticos más radicales y directos de la ocupación y de la sociedad israelí en general. Pero, como mostramos en el resto de este artículo, una lectura detallada de sus textos revela un compromiso subyacente con el sionismo y con el mantenimiento del carácter de Israel como Estado judío, así como una reluctancia a ofrecer cualquier alternativa sensata a la difunta solución de los dos Estados.

I. LA HISTORIA SIN AGENTES

El proyecto más ambicioso es el de Ariella Azoulay y Adi Ophir. En sus más de 500 páginas, *This Regime Which is Not One* pretende descifrar la estructura de la dominación israelí sobre los territorios ocupados y sobre sus no-ciudadanos residentes palestinos. Los autores llaman a esto un «sistema de control», porque, como correctamente sostienen, el término «ocupación» implica un estado temporal de los asuntos —como se prevé en el estatus legal de la «ocupación beligerante» en el derecho internacional— mientras que el control israelí sobre los territorios ocupados es cualquier cosa menos temporal. La evolución de este sistema de control, afirman, ha atravesado tres etapas: la primera, un «proyecto» que se extendió desde 1967 hasta comienzos de los masivos asentamientos judíos en Cisjordania en 1981; la segunda, un «régimen» vigente desde 1981 hasta 2000, y durante el cual permaneció separado del régimen prevaleciente dentro de las fronteras de Israel de 1967; por último, desde 2000 los dos regímenes se han fundido para formar una estructura dual que todavía «no es una».

Azoulay y Ophir describen esta estructura dual como formada por «un régimen de ocupación en los territorios y un régimen democrático-étnico en el propio Israel». Resulta desconcertante, aquí y a lo largo del libro, la utilización del término «ocupación», a la vista de la categórica declaración de los autores de que su oposición a la ocupación incluye una crítica del propio término, que discursivamente es parte de la ocupación³. Esta inconsistencia o dualidad semántica no es tan trivial como puede parecer.

³ A. Azoulay y A. Ophir, *This Regime Which is Not One*, cit., pp. 383, 10.

Es un síntoma de la indecisión de los autores en cuanto a su unidad de análisis: ¿es un «sistema de control» unitario, en el sentido de Baruch Kimmerling, que abarca el Israel anterior a 1967 y los territorios ocupados?, o ¿es un sistema compuesto de dos órganos claramente definidos, una potencia ocupante y su colonia?⁴. Cada una de estas opciones tiene profundas implicaciones políticas, y la renuencia de los autores a vincularse con cualquiera de ellas refleja su incapacidad o su negativa para comprometerse con cualquier clase de actuación política concreta.

El concepto que utilizan Azoulay y Ophir para expresar la naturaleza de dos-en-uno del régimen israelí es la «exclusión inclusiva». Los autores sostienen que lo que permite a Israel incluir los territorios ocupados dentro de su sistema de control real es la exclusión de esos territorios del propio Estado de Israel, tal y como es representado por el propio Estado e imaginado por muchos de sus ciudadanos judíos⁵. Esta es una perspectiva valiosa, ya que señala la manipulación de la conciencia política para enmascarar una realidad incompatible con el sistema de valores que profesa una sociedad:

Los territorios [ocupados] son lo que constantemente se pone entre paréntesis, se olvida, se niega. Quizá para no enloquecer ante la enormidad de la locura, de la magnitud del mal, de la culpa y responsabilidad por hechos que no cometimos, por hechos a los que nos oponemos en voz alta pero que continúan realizándose en nuestro nombre, con nuestro dinero, por nuestros hijos⁶.

Sin embargo, este análisis tiene dos puntos débiles. En primer lugar, el «nosotros» al que aquí se refiere, está formado por el «público ilustrado» que, como se ha señalado anteriormente, ha sido diezmado por el descarilamiento del proceso de Oslo y por la segunda Intifada, y ya no constituye una fuerza política significativa. Por otra parte, la gente más interesada en incorporar a los territorios ocupados al Estado de Israel —los colonos judíos de Cisjordania y sus numerosos defensores— no comparan los reparos morales descritos en este pasaje; tampoco necesitan recurrir a una táctica de «exclusión inclusiva» para ser capaces de vivir con la ocupación. Su eslogan habitual es «¡*Yesha* está aquí!», donde *Yesha* es el

⁴ Baruch Kimmerling, «Boundaries and Frontiers of the Israeli Control System: Analytical Conclusions», en Kimmerling (ed.), *The Israeli State and Society*, Albany, 1989, pp. 265-284. Sobre la indecisión de Azoulay y Ophir, véase, por ejemplo, frases como «de lo que se trata es de una diferencia entre dos regímenes: un régimen de ocupación en los territorios y un régimen etno-democrático en el propio Israel», A. Azoulay y A. Ophir, *This Regime Which is Not One*, cit., p. 383, y «la ocupación es en sí misma un régimen, y ese régimen es parte del régimen israelí», *Ibid.*, p. 442.

⁵ Véase también «Introduction», en Adi Ophir et al., *The Power of Inclusive Exclusion. Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories*, Nueva York, 2009.

⁶ A. Azoulay y A. Ophir, *This Regime Which is Not One*, cit., p. 27. La idea de exclusión inclusiva ha dado origen a una estrategia de intentar informar a la opinión pública israelí de los horrores de la ocupación mediante películas, exposiciones fotográficas, informes de los medios, estudios académicos, etc.; una estrategia que se ha demostrado completamente inútil.

acrónimo hebreo para Judea, Samaria y Gaza, y «aquí» significa dentro de Israel. En segundo lugar, como ha señalado Oren Yiftachel, Azoulay y Ophir no sostienen que una falsa conciencia de la exclusión esté encubriendo la realidad de la inclusión; por el contrario, están practicando la «exclusión inclusiva» en su propio análisis al describir el sistema israelí como un «régimen dual» que incluye y no incluye al mismo tiempo a los territorios ocupados⁷.

Para hacer esto, los autores renuncian al método de análisis convencional, que buscaría primero comprender a la sociedad israelí previa a 1967 para después, sobre esa base, tratar de explicar la ocupación. Ellos trabajan en sentido contrario, empezando con un análisis de la ocupación y, desde ahí, trazan las características del régimen israelí en sus fronteras anteriores a 1967. En vez de preguntar, ¿qué hay en la estructura del régimen israelí que le permite mantener la ocupación?, Azoulay y Ophir preguntan: «dado el carácter de la ocupación, ¿a qué debe parecerse la estructura del régimen israelí?». La ventaja de esta metodología invertida es que les libera de la necesidad de considerar la ocupación como un capítulo en la historia del sionismo o de asignar el protagonismo de este proceso histórico a cualquier sujeto identificable. Analizar históricamente la ocupación hubiera requerido que la consideraran «como otra manifestación más de un principio preconcebido, tal como etnocracia, *apartheid* o colonización». Sin embargo,

[nosotros] no concebimos el sistema de control como resultado de una planificación por parte de cualquier sujeto(s) identificable(s) [...] ni como producto de la interacción entre fuerzas en conflicto que poseen aspiraciones conocidas y definidas [...] [Así] nos liberamos de la necesidad de decidir entre relatos en competencia que sitúan el control de los territorios dentro de un relato nacional o global [...] Consideramos el régimen de ocupación como un sistema de relaciones, y un estado de cosas, cuya «gramática» puede analizarse y entenderse con relativa independencia de la genealogía de los factores que las produjeron en el pasado y que las mantienen en el presente.

Además, los investigadores que incluyen la ocupación en sus análisis sobre el régimen israelí efectúan una «conceptualización equivocada del control sobre los territorios»:

Ven en ella una continuación del proyecto sionista y una fase específica de su historia que posee sus propias características. Para ellos, el control sobre estos territorios está constituido por un conjunto de decisiones políticas, prácticas coloniales, legislaciones y procedimientos dirigidos con un propósito claro: la judaización del espacio o la colonización de la frontera. No toman en cuenta que lo que había empezado como un proyecto, realmente como una serie de proyectos, ha sido fortalecido con el paso del tiempo y ha cristaliza-

⁷ Oren Yiftachel, «This Book Which is Not One», *Mita'am*, 17, 2009, pp. 54-71 (en hebreo).

do en una estructura sólida, sostenible, que se reproduce a sí misma y condiciona todas las actividades, planes, iniciativas políticas, militares y de asentamiento que se producen dentro de su esfera⁸.

Si la parte final de este pasaje significa algo, es que, como el Golem de Praga, la ocupación ha asumido vida propia y ya no puede ser controlada por su creador, el Estado democrático de Israel. La manera en que esto pueda suponer una crítica de aquellos que consideran la ocupación como una fase definida de la historia sionista, resultado de deliberadas decisiones políticas y militares, no está clara en absoluto. Sin embargo, lo que sí está claro es que Azoulay y Ophir están dispuestos a cualquier cosa para aislar al propio sionismo de la ocupación y para evitar considerarla parte de un proyecto colonial.

Paralelismos coloniales

Los autores fundamentan teóricamente su análisis en el trabajo de Deleuze y Guattari, quienes, en opinión de Azoulay y Ophir, se preguntan «no lo que significa, sino cómo funciona»⁹. Marcelo Svirsky, que ha realizado una crítica en general favorable del libro desde una perspectiva deleuziana, criticó a Azoulay y Ophir por utilizar este enfoque para justificar el divorcio que establecen entre la ocupación y la historia del sionismo como movimiento colonial:

La dinámica de desarraigar (o transferir) y reemplazar que está implícita en el deseo de «*terra nullius*» aparece en las páginas de Azoulay y Ophir en el contexto del régimen de ocupación (asentamientos, estructuras militares, transformación del espacio civil), pero [esta dinámica] no puede ser entendida fuera del contexto del desarrollo colonial del sionismo. Lo que empezaron siendo prácticas defensivas dentro del mercado del trabajo [de la Palestina anterior a la fundación del Estado de Israel] y se convirtieron en prácticas de exclusión en todas las esferas de la vida, cristalizaron con el tiempo en un dispositivo que inflama hasta la actualidad los deseos dominantes de la sociedad judía israelí¹⁰.

Svirsky tiene razón al sostener que la dinámica de la ocupación no puede entenderse fuera del contexto histórico de la colonización sionista de Palestina. Pero pasa por alto un punto más importante: aislando la ocupación de la propia historia del sionismo, Azoulay y Ophir de hecho lo exoneran de la acusación de colonialismo. La consideración seria del sionismo como movimiento colonial que hacen sociólogos israelíes como Baruch Kimmerling y Gershon Shafir fue provocada por la afirmación de los colonos judíos en los territorios ocupados de que sus actividades no

⁸ A. Azoulay y A. Ophir, *This Regime Which is Not One*, cit., pp. 26, 22, 384.

⁹ *Ibid.*, p. 23.

¹⁰ Marcelo Svirsky, «This Regime Which is Not One: A Deleuzian View», *The Public Sphere* 3, 2009, p. 116 (en hebreo); metáfora mixta en el original.

eran diferentes a las de los «pioneros» sionistas del periodo anterior a la fundación del Estado israelí. Esta afirmación fue desestimada como absurda por los sionistas liberales, quienes rechazaron la idea de que los heroicos esfuerzos de los asentamientos en el periodo anterior a 1948 tuvieran nada que ver con el giro admitidamente colonialista posterior a 1967. Sin embargo, estudiosos críticos empezaron a comparar más sistemáticamente los dos periodos y concluyeron que realmente eran dos fases del mismo proyecto colonial. Al cortar el nudo que mantiene unidas las dos fases, Azoulay y Ophir reviven la vieja posición sionista liberal. Y lo hacen explícitamente:

Si el colonialismo es un apellido, entonces el caso sionista es un tipo particular dentro de él que carece de algunas de las características comunes del género: hasta 1948 no se puede hablar de una patria, solamente de un Estado patrocinador sobre el que se apoyaba el proyecto sionista pero del que no provenía; desde 1948 no hay distancia geográfica entre dos unidades políticas separadas que hiciera posible hablar de una patria y de una colonia en el sentido comúnmente aceptado; igualmente, desde principios de la década de 1990 incluso la mínima responsabilidad del Estado colonial sobre el bienestar de la población nativa en la colonia ha sido eliminada de forma gradual¹¹.

Este popurrí de argumentos, para el cual no se proporciona ninguna evidencia, es típico de los defensores liberales del sionismo en contra de la acusación colonialista. Además, igual que la destacada historiadora sionista Anita Shapira, Azoulay y Ophir también admiten que, claramente,

la perspectiva colonial es vital para entender los procesos históricos y las fuerzas que dieron forma al régimen israelí, pero esa perspectiva no es exhaustiva y no puede explicar la estructura única de este régimen dual. El hecho de que los colonos judíos en Palestina establecieran una sociedad democrática no venía exigido por ser una sociedad de asentamientos coloniales; el imperativo estructural que establecieron los colonos tenía su propia racionalidad, que no se derivaba de los procesos coloniales y no se explica mediante ellos¹².

Como ha mostrado Gabriel Piterberg, la afirmación de la singularidad histórica es característica de los proyectos de asentamiento colonial, y el hecho de que cada proyecto adopte su forma histórica específica no merma su naturaleza de asentamiento colonial. Mientras tanto, Gershon Shafir ha demostrado que el carácter de las instituciones que los colonos sionistas levantaron en Palestina, incluyendo sus elementos democráticos, se derivan precisamente de «imperativos estructurales» de la colonización en el contexto de Palestina así como del propio movimiento sionista. De manera más general, en palabras de Piterberg, por definición no puede haber «una historia de las instituciones y de las ideologías de las sociedades

¹¹ A. Azoulay y A. Ophir, *This Regime Which is Not One*, cit., p. 445.

¹² *Ibid.*, p. 445.

de colonos que no sea simultáneamente una historia de las relaciones colonos-nativos»¹³. Razón suficiente para evitar el estudio de la historia.

Separaciones

Entonces, ¿cómo «funciona» la ocupación desde el punto de vista de Azoulay y Ophir? La mitad de su libro está dedicado a una detallada descripción de los mecanismos de control, coercitivos y de otro tipo, que Israel ha utilizado en los territorios ocupados. Éste es un útil resumen de información esparcida sobre muchas fuentes primarias y secundarias, pero no añade demasiadas cosas nuevas. Su contribución se encuentra más bien en su conceptualización del sistema de control, al que caracterizan como dos conjuntos de separaciones: una separación espacial, entre el territorio del Estado soberano de Israel y los territorios ocupados, y una separación civil, entre ciudadanos (es decir colonos judíos) y no ciudadanos (es decir, palestinos) que viven en esos territorios¹⁴. Una tercera separación –la separación etnonacional entre judíos y palestinos– aparece solamente cuando los autores se centran en el propio régimen israelí.

Esta separación etnonacional –posiblemente más significativa– atraviesa evidentemente tanto la separación espacial como la cívica, una realidad que ha llevado a Yiftachel y a otros a concluir que todo el territorio bajo dominio israelí debería ser considerado como un régimen «etnocrático»; es decir, un régimen caracterizado por el dominio de un grupo étnico. Sin embargo, Azoulay y Ophir sostienen que la separación etnonacional tiene implicaciones diferentes para los dos territorios a cada lado de la separación espacial. Con este fin, introducen una nueva distinción, entre la esfera de gobernar (participar en el gobierno) y la esfera de ser gobernado, un evidente eco de la definición de Aristóteles de un ciudadano como alguien que gobierna y que a su vez es gobernado. Esto completa la matriz establecida por las otras tres diferencias: solamente los ciudadanos judíos participan en el gobierno, aunque todos los ciudadanos son gobernados democráticamente (al menos formalmente), mientras los no ciudadanos palestinos son gobernados arbitrariamente por medio de la fuerza militar¹⁵. Esta matriz se podría describir como una forma de gobierno cohesionada cuya población está estratificada tanto sobre un eje etnonacional como sobre un eje cívico¹⁶. Sin embargo, Azoulay y Ophir consideran que la mis-

¹³ Gabriel Piterberg, *The Returns of Zionism. Myths, Politics and Scholarship in Israel*, Londres, 2008, p. 57; Gershon Shafir, *Land, Labour and the Origins of the Arab-Israeli Conflict*, Cambridge, 1989.

¹⁴ A. Azoulay y A. Ophir, *This Regime Which is Not One*, cit., p. 187.

¹⁵ *Ibid.*, pp. 379-380. Existe realmente una tercera categoría, los 250.000 residentes palestinos de Jerusalén Este que son residentes permanentes pero no ciudadanos de Israel.

¹⁶ Véase G. Shafir y Y. Peled, *Being Israeli. The Dynamics of Multiple Citizenship*, Cambridge, 2002; y O. Yiftachel, *Ethnocracy. Land and Identity Politics in Israel/Palestine*, Filadelfia, 2006.

ma establece «dos regímenes diferentes: un régimen de ocupación en los territorios y un régimen étnicodemocrático en el propio Israel»:

En ambos regímenes el principio decisivo es el principio nacional y en ambos el gobierno está comprometido en un proyecto nacional por el que se moviliza toda la sociedad. Pero tanto el principio como el proyecto tienen diferentes significados en cada régimen, porque ambos están diferenciados por el principio civil, entre ciudadanos y no ciudadanos, y la diferencia nacional [sic] distingue entre dos clases de ciudadanos a un lado de la línea verde, y entre ciudadanos y no ciudadanos al otro. La distinción civil trasciende la estructura del régimen en todas sus dimensiones, conforma de diferente manera las relaciones dentro de él y distingue entre dos proyectos coloniales separados¹⁷.

En otras palabras, lo que diferencia a los dos regímenes, o quizá a los dos proyectos coloniales dentro del mismo régimen, es el criterio formal de ciudadanía. Tanto judíos como palestinos del Israel anterior a 1967 son ciudadanos, mientras que en los territorios ocupados solamente los colonos judíos son ciudadanos y los residentes palestinos no. Después de 380 páginas de análisis de acuerdo con un «nuevo paradigma» esta es una conclusión decepcionante, ya que apenas se diferencia de la «exclusión inclusiva» que ofrece el Estado.

Como ha señalado Yehouda Shenhav, que considera la obra de Azoulay y Ophir «un libro importante», el paradigma «asume la Línea Verde como un elemento constitutivo», que permite a los autores asignar un significado abrumador a la ciudadanía formal de la que disfrutaban los palestinos en el lado «correcto» de la Línea Verde, y describir al «propio Israel» como una democracia étnica¹⁸. ¿Cómo puede ser el «propio Israel» una democracia de cualquier clase cuando solamente participan en su gobierno ciudadanos judíos? La respuesta está en que «la eliminación de los ciudadanos palestinos del gobierno no está escrita en la ley, no se deriva necesariamente de la definición de Israel como un Estado judío, y no viene exigida por el principio de autodeterminación que justifica a ojos de muchos la reivindicación de la existencia de Israel como Estado judío»¹⁹. En otras palabras: en el hecho de que Israel sea un Estado judío no hay nada que sea inherentemente discriminatorio hacia ciudadanos no judíos. Habida cuenta del carácter contradictorio y confuso de su análisis no sorprende que Azoulay y Ophir dediquen solamente cinco de las 450 pági-

¹⁷ A. Azoulay y A. Ophir, *This Regime Which is Not One*, cit., pp. 383-384. Si tanto el Estado de Israel como los asentamientos en los territorios ocupados son proyectos coloniales, entonces el propio sionismo es un movimiento colonial, contradiciendo lo que Azoulay y Ophir sostienen anteriormente en el libro.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 57-59. 194. Para el concepto de «democracia étnica» véase Sammy Smooha, «Minority Status in an Ethnic Democracy: The Status of the Arab Minority in Israel», *Ethnic and Racial Studies* XIII/3, 1990, pp. 389-413.

¹⁹ A. Azoulay y A. Ophir, *This Regime Which is Not One*, cit., pp. 380-381.

nas del texto a su «utopía», la solución que proponen para lo que, bajo su punto de vista, es una situación moralmente insostenible. Ya que la «ocupación es un régimen separado que es parte del régimen de Israel», acabar con ella requiere igualmente una transformación del régimen israelí. ¿Qué clase de desenlace y qué clase de transformación? Azoulay y Ophir no se comprometen con ninguna medida concreta, pero insisten en que cualquiera que sea la solución que se adopte, «finalizar la ocupación sin una revolución violenta exigiría la inclusión de los árabes [es decir, de los ciudadanos palestinos de Israel] en el gobierno»: «Una coalición de partidos políticos sionistas acordará aceptar a partidos árabes como legítimos compañeros y compartirá con ellos todas las posiciones del poder de acuerdo con su relativo peso [electoral]», es decir, en una proporción de 9 a 1. Esto no supone necesariamente el fin del sionismo, porque

los judíos no tienen porqué entregar los instrumentos del Estado que protegen al colectivo judío, ayudan a los judíos en la Diáspora, se encuentran dispuestos para salvar a judíos perseguidos y promueven culturas judías, incluyendo la cultura nacional. Solamente tienen que conceder los mismos instrumentos a la colectividad palestina que quedaría formando parte del nuevo régimen israelí²⁰.

Esta formulación, con la que finaliza el capítulo programático del libro, es curiosamente vaga. ¿Se incluiría la Ley de Retorno entre los «instrumentos del Estado» que retendrían los judíos y que permite a cualquier judío emigrar a Israel y convertirse en ciudadano desde su llegada? En ese caso, ¿se concedería el mismo instrumento a los palestinos que «quedarían como parte del nuevo régimen israelí», en la forma del derecho de retorno de los refugiados palestinos de 1948?

II. EL NUEVO PIONERO

Boaz Neumann es más conocido como novelista e historiador de la República de Weimar y de la Alemania nazi; también fue un militante de izquierdas y un crítico del sionismo: «En las elecciones voté a los comunistas y me manifesté frente al Ministerio de Defensa. En una ocasión mis amigos y yo gritamos “ministro de Defensa, ¿a cuántos niños has asesinado hoy?”»²¹. La primera incursión de Neumann en la historia israelí, *Land and Desire in Early Zionism*, señala su regreso al redil y ha sido recibida con gran entusiasmo. El libro comienza con un relato personal sobre su reacción ante el derramamiento de sangre de la segunda Intifada: «Los aviones F-16 bombardeando áreas densamente pobladas por civiles, los autobuses volando por los aires en medio de calles abarrotadas. Todas las distinciones entre las víctimas habían sido totalmente desdibujadas: hombres, mujeres, jóvenes, viejos y niños. Terror de aquí y de allá.

²⁰ *Ibid.*, pp. 455-459, 457.

²¹ B. Neumann, «Why I returned to Zionism», *Eretz Acheret*, febrero-marzo de 2010, p. 15.

Dolor y fracaso»²². Neumann explica que estos traumáticos acontecimientos le inspiraron para buscar un sendero fuera de las fútiles y sofocantes convenciones –históricas, sociológicas, psicológicas, ideológicas o religiosas– que rigen los análisis existentes del conflicto palestino-israelí. Estaba buscando «algo» que abriera un nuevo terreno más allá de este punto muerto intelectual y emocional. Lo encontró en el deseo por el *Eretz Israel* de los «pioneros» de la segunda y tercera *aliyot* (oleada de asentamientos), que afirma que ha sido descuidado por los historiadores:

Como resultado de mi investigación, llegué a la conclusión de que sería una equivocación imponer sobre ese amor, ese deseo como yo lo llamo, conceptos que son extraños a él. Por ejemplo, leer en él significados romántico-orientalistas, colonialistas o profascistas. Semejante lectura pecaría contra el «espíritu nietzscheano» del sionismo pionero²³.

Los «pioneros», un grupo de unas 9.500 personas que llegaron a Palestina procedentes de Europa del Este entre 1904 y 1922, constituían alrededor del 16 por 100 de los colonos-inmigrantes durante ese periodo (en 1908 la población judía de Palestina era de 80.000 personas). A pesar de su tamaño, el grupo sentó los fundamentos institucionales y culturales de la sociedad y del Estado israelíes. Aparte de asentamientos agrícolas comunitarios, cooperativas de productores y consumidores, sindicatos, partidos políticos y un rudimentario estamento militar, los «pioneros» también produjeron una impresionante colección de cartas, diarios, narrativas y poesía, que principalmente reflejaba su exaltación de la tierra de *Eretz Israel*²⁴.

Como Azoulay y Ophir, Neumann también deriva su marco teórico de Deleuze y Guattari, analizando la producción literaria de los pioneros en términos de máquina de deseo, cuerpo sin órganos y desterritorialización y/o reterritorialización. El relato que extrae de estos escritos, y que vuelve a contar en lenguaje deleuziano, tiene tres personajes principales: los judíos, la Tierra de Israel y la lengua hebrea; cuerpo, espacio y lengua. En el exilio, los judíos desterritorializados se habían convertido en «cuerpos sin órganos», no solamente en el sentido de ser incapaces de desarrollar su potencial como pueblo, sino también en tanto que individuos deformados, impotentes, parásitos, especialmente los hombres. Así, el héroe de los pioneros, Joseph Trumpeldor, que perdió un brazo en la guerra ruso-japonesa y fue asesinado por rebeldes sirios contra la ocupación francesa en Tel Hai en 1920, describía el cuerpo judío como «falso, miserable y vergonzoso, marcado por la degradación la estupidez y la fealdad»²⁵.

²² B. Neumann, *Land and Desire in Early Zionism*, cit., p. 11.

²³ B. Neumann, «Why I returned to Zionism», cit., p. 15.

²⁴ B. Neumann, *Land and Desire in Early Zionism*, cit., pp. 19, 65. En hebreo, «país», «tierra» y «suelo» se expresan con la misma palabra, *adama*, el femenino derivado del término masculino que designa al «ser humano»: *adam*.

²⁵ *Ibid.*, p. 147; véanse también las pp. 146-157.

Palestina también era un «cuerpo sin órganos», desnuda, estéril, vieja, decadente. Cuando los «pioneros» se reterritorializaron a sí mismos en la Tierra de Israel, cuando la penetraron con sus azadones y la impregnaron con sus líquidos –agua, sudor y sangre–, ambos resucitaron. Para Neumann, como para los «pioneros», la resurrección significa ser reposeído por judíos: «El pionero humedece la tierra con su sudor y así la transforma de un [simple] suelo en una tierra, de una tierra de nadie en una tierra judía, estableciendo la frontera entre la tierra judía y el suelo árabe». Lo que diferenciaba a los dos, a ojos de los pioneros, era que los palestinos no poseían ningún deseo por su tierra. Por esta la razón «nunca limpiaron de piedras sus campos y nunca los mejoraron, nunca los trabajaron con pesados y costosos arados europeos»; el campesino palestino «no ara, en realidad se limita a arañar o a magullar ligeramente la superficie de la tierra con su pala». Igual que los judíos de la Diáspora, los palestinos también eran débiles e impotentes, «cuerpos sin órganos», incapaces de penetrar realmente su tierra como «a una virgen, a una novia, a una madre». Por ello, los colonos sionistas, decía David Ben Gurion, no solamente redimirán a los judíos y a la tierra, también rescatarán al árabe, «le salvarán de su pobreza económica, le despertarán de su humillación social, le redimirán de su degeneración física y moral»²⁶.

Por último, al escribir en hebreo, los «pioneros» resucitaron un lenguaje que había estado muerto durante dos mil años. Neumann lo considera parte integral de la práctica del «pionero»: si el deseo por la tierra marcaba la diferencia entre los «pioneros» y los palestinos, escribir en hebreo les diferenciaba de los colonos-emigrantes judíos que al mismo tiempo llegaron a Palestina procedentes de Yemen. Los estudiosos mizrajíes contemporáneos afirman que los mizrajíes, y sin duda los yemeníes que se establecieron en Palestina alrededor de finales del siglo XIX y principios del XX, fueron no menos pioneros que los colonos-emigrantes askenazíes, pero sin embargo no fueron reconocidos como tales por la historiografía dominante del laborismo sionista. La respuesta de Neumann es que no solo la historia la escriben los vencedores, sino que la misma escritura de la historia es lo que convierte a los vencedores en vencedores. Los yemeníes pudieron haber trabajado en la tierra y sufrido las mismas penurias que los «pioneros», pero ya que no escribieron nada sobre ello, por lo menos no en un lenguaje que la historiografía dominante pudiera leer, no podían ser calificados de auténticos pioneros²⁷.

En el Valle

Que la «negación de la Diáspora» del sionismo implicaba la adopción de estereotipos antisemitas es algo bien conocido, y el aluvión de citas que

²⁶ *Ibid.*, pp. 94, 104, 106.

²⁷ *Ibid.*, pp. 212-214.

ofrece Neumann no añade nada nuevo. Que los sionistas intentaron redimir o «conquistar» tanto la tierra como al pueblo y que, como los colonialistas en todas partes, vieron a Palestina como un desierto y su misión allí como la de la civilización, también son clichés muy gastados. Por eso, ¿cuál era el objeto de la gran excavación arqueológica de Neumann en los legados literarios de los «pioneros»? El propósito, desde luego, no estaba orientado al pasado sino totalmente abocado al presente: volver a legitimar el sionismo en la estela de la crítica postsionista.

El postsionismo, o la «nueva historia», puede considerarse como uno de los efectos culturales colaterales de la liberalización económica que sufrió la sociedad israelí a finales del siglo xx. Los investigadores postsionistas se centraron en el carácter colonial de los asentamientos y en el desarraigo de los palestinos en 1948²⁸. En el proceso, el estatus mítico de los «pioneros» también se vio debilitado ante una oleada de críticas dirigidas hacia la cultura republicana y antiindividualista que sostuvo el proyecto de asentamiento²⁹. Formado en el discurso postsionista, Neumann pretende trascenderlo retratando a los «pioneros» como rudos individualistas motivados por un deseo por la tierra casi primario, ajenos a toda ideología o designio colonialista. Trata de alcanzar esto a través de un mosaico de ocultaciones y revelaciones, que podría servir como mapa borgiano que cubriera el paisaje y la historia real de la Tierra de Israel en la era moderna.

La cubierta del libro anuncia la estrategia de Neumann. Reproduce la imagen de una ilustración de Gal Weinstein que consiste en un mosaico de sombras en verde y marrón. Titulada *Jezreel Valley*, esta obra aparentemente abstracta está atada por su título a un lugar específico, la cuna mitológica del ethos sionista pionero, también sustentada en mitos bíblicos (Armagedón, por ejemplo, está situada allí). Considerada la región más fértil de Palestina, el valle fue comprado por organizaciones de colonos sionistas a sus propietarios, la familia Sursuk de Beirut, a lo largo de las tres primeras décadas del siglo xx. Esto produjo la desposesión de unos 8.000 campesinos palestinos, algunos de los cuales fueron expulsados a la fuerza. La ilustración retrata el valle después de que hubiera sido tomado por los colonos, domeñado y sometido a un régimen racional de cultivos con métodos modernos y mecanizados, los «costosos arados europeos» de los pioneros.

La continuada presencia palestina en el Valle de Jezreel y en el conjunto del país no es la única cosa que Neumann oculta. También oscurece la enorme infraestructura institucional que reclutó colonos de Europa, los

²⁸ Véase por ejemplo, G. Shafir, *Land, Labour and the Origins of the Arab-Israeli Conflict*, cit. Benny Morris, *The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited*, Cambridge, 2004; e Ilan Pappé, *The Ethnic Cleansing of Palestine*, Oxford, 2006 [ed. cast.: *La limpieza étnica de Palestina*, Barcelona Editorial Crítica, 2008].

²⁹ Durante la década de 1990 y principios de la siguiente se desarrolló en Israel una muy cuidada industria de libros, películas y exposiciones de arte retratando los horrores de crecer en los kibutz.

embarcó hacia Palestina, recaudó fondos para comprar tierra y la reclasificó legalmente como judía, y que expulsó a los campesinos palestinos y colocó a los «pioneros» en su lugar. En otras palabras, lo que permitió a los «pioneros» satisfacer su deseo de tierra fue todo un ejército de diplomáticos, recaudadores de fondos, burócratas, abogados, contables, expertos agrícolas, etc., en unión del poder del Imperio británico desde 1917. Las extasiadas relaciones de los «pioneros» con la tierra solamente eran la punta del enorme iceberg colonial que facilitó sus actividades y las utilizó para sus propósitos. Todo esto queda omitido del relato de Neumann.

¿Dónde se sitúa el propio Neumann en relación con el deseo de los pioneros? Su postura es la de un historiador puramente descriptivo que quiere «dejar que el deseo de los pioneros hable por sí mismo». Así, aunque los «pioneros» negaban que los palestinos tuvieran ningún deseo por la tierra, el propio Neumann asegura desde el principio que el relato del conflicto judío-palestino es un relato de dos deseos en conflicto por el mismo espacio, pero que él no puede relatar el deseo palestino porque no es uno de ellos. De todos modos, el espíritu del libro muestra una inconfundible identificación con el deseo de los «pioneros». Además, Neumann declara explícitamente:

Quando nosotros, los judíos/israelíes, contemplamos a *Eretz Israel*, lo vemos principalmente a través de los ojos de los pioneros. Cuando sentimos [la tierra] en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, la sentimos en buena parte a través de sus sentimientos. Estamos conectados a la tierra por su conexión a la tierra, y por ello encontramos difícil desprendernos de ella. El tiempo de *Eretz Israel* que estamos viviendo ahora es en gran medida el tiempo mítico escrito y grabado en sus obras. Cuando hablamos hebreo, hablamos en su lenguaje. Cuando amamos a *Eretz Israel*, lo amamos, en gran medida, a través de su amor, y cuando estamos deseando ofrecer nuestras vidas por él, sufrimos, en gran medida, la «bella/estética» muerte que ellos sufrieron, o que estaban dispuestos a sufrir. El deseo de los pioneros por *Eretz Israel* es la capa «arqueológica» de nuestro deseo por él³⁰.

En el discurso político israelí el término *Eretz Israel* se refiere a toda la unidad geográfica del Mandato de Palestina, no al territorio soberano del Estado de Israel. El deseo por la tierra de los «pioneros» no estaba limitado a las futuras fronteras de Israel en 1967. Lo comparten actualmente los colonos judíos de Cisjordania, que se ven a sí mismos como continuadores del proyecto pionero. Aunque Neumann no absuelve al sionismo y a Israel por las injusticias cometidas contra los palestinos, el mensaje político que trasmite su libro, respecto a todo el territorio bajo el dominio efectivo de Israel es: «Entre la justicia y mi madre, elijo defender a mi madre»³¹. Contrariamente a las apariencias, insinúa, los israelíes no han sido

³⁰ B. Neumann, *Land and Desire in Early Zionism*, cit., pp. 12-13, 19.

³¹ B. Neumann, «Why I returned to Zionism», cit., p. 16.

ablandados por el liberalismo y la prosperidad: todavía poseemos el deseo original de los pioneros de aferrarse a la tierra y morir por ella si es necesario.

III. LA COALICIÓN DE LOS DESAFECTOS

El breve libro de Yehouda Shenhav –160 páginas– no es un estudio académico, sino como indica su subtítulo, un «ensayo político judío». *The Time of the Green Line* atribuye el fracaso del proceso de paz de Oslo, correctamente desde nuestro punto de vista, a los diferentes «lenguajes» hablados por los judíos y palestinos implicados en el proceso: los judíos hablaban el lenguaje de 1967, mientras que los palestinos hablaban el de 1948. Donde más claramente se comprobaba esto era con respecto a la suerte de los refugiados palestinos de 1948 y al estatus civil de los ciudadanos palestinos de Israel, dos temas cuidadosamente evitados en las conversaciones de paz³². Shenhav va más lejos argumentando que el lenguaje de 1967, o el «paradigma de la Línea Verde», es «un mito cultural unido a los intereses político-económicos de un amplio estrato liberal en Israel», al que convencionalmente se identifica como la «izquierda» israelí. La «derecha» israelí, por otra parte –sobre todo los colonos judíos en los territorios ocupados–, también habla el lenguaje de 1948. Por ello, al repensar una solución para el conflicto palestino-israelí sería necesario «redibujar el mapa político de Israel –para dar nueva forma a la diferenciación convencional entre “izquierda” y “derecha”– en un nuevo diseño que puede dar origen a sorprendentes coaliciones»³³.

Los contornos de estas «sorprendentes coaliciones» empiezan a aparecer cuando Shenhav identifica los intereses «político-económicos» del estrato social que hemos denominado el «público ilustrado» israelí. Su mayor temor, sostiene, es verse inundado por la mayoría oriental en medio de la que vive, formada tanto por palestinos como por judíos mizrajíes. También se ve repelido por la religiosidad mesiánica y politizada adoptada por los sionistas religiosos desde 1967, que da forma a la visión ideológica del mundo de muchos de los colonos judíos en los territorios ocupados. A través del «lenguaje de la Línea Verde», los sionistas askenazíes liberales

describen a Israel como una democracia liberal occidental, mientras que los árabes (y con ellos los judíos mizrajíes y los religiosos) son descritos como inferiores e insuficientemente democráticos. Este es el lenguaje de aquellos que vinieron a Oriente Medio para un periodo breve de tiempo, no para integrarse, sino para existir como sus invitados. Esta posición no solo es inmoral respecto a los palestinos, sino que es desastrosa para los propios judíos. Les im-

³² Y. Shenhav, *The Time of the Green Line*, cit., pp. 9, 20, 73-75, 90-97.

³³ *Ibid.*, p. 10.

pone una vida dentro de un *ghetto* con una concepción de la democracia basada en leyes raciales y un estado de excepción permanente³⁴.

Shenhav reserva una cólera particular para Amos Oz, el novelista israelí más conocido y el representante por excelencia del «público ilustrado»:

Oz desdeña a los defensores del Gran Israel [...] a los judíos y la teología judía [...] y a la «turba», ya sean mizrajíes de derechas o simplemente no blancos y no liberales [...] El aparato racista empleado por Oz es lo que en la literatura sociológica se denomina «racismo sin raza». Se trata de un modelo de racismo que nació en Europa después de 1945 y que reemplaza los tradicionales marcadores biológicos (color de la piel, frenología, pelo, olor) por marcadores sociológicos, entre otras razones, debido al trauma del Estado nazi racializado. Pero, a pesar de su borrosidad, la correspondencia entre los dos campos de significado es prácticamente perfecta³⁵.

En estas dos citas, Shenhav reúne tres fenómenos distintos que deberían tratarse por separado. Realmente es cierto que el miedo ante el «problema demográfico» ha sido la preocupación primordial que ha llevado a los sionistas liberales a apoyar la solución de los dos Estados. El lema no oficial del proceso de Oslo, basado en el principio de separación ente judíos y palestinos, era «nosotros estamos aquí y ellos están allí». Las dificultades de los colonos-emigrantes judíos mizrajíes en Israel, tanto antes como después de 1948, han sido ampliamente debatidas y demostradas. Estas dificultades han llevado a los mizrajíes a estar entre los más incondicionales oponentes de la paz con los palestinos, como demuestran las posiciones adoptadas por el Shas, el primer partido político mizrají, creado en 1984. La división ideológica entre sionistas religiosos y liberales es suficientemente real, aunque Shenhav exagera en general su magnitud. Políticamente, el problema ha sido precisamente el contrario: hasta que el Likud llegó al poder en 1977, los colonos debían su propio éxito a la comprensiva actitud desplegada por los liberales de la tradición laborista del sionismo. Shenhav es consciente de esta afinidad entre los colonos e importantes segmentos del sionismo laborista, pero la yuxtapone con la posición del sionismo liberal, en vez de considerar a ambos como componentes de la misma empresa³⁶.

Aunque Shenhav agrupa las actitudes de los askenazíes liberales hacia los palestinos, judíos mizrajíes y religiosos, se muestra muy cuidadoso en su análisis de los diferentes matices de opinión entre los israelíes de derechas, especialmente entre los colonos de Cisjordania. Identifica tres tendencias diferentes entre estos últimos: «pragmática», «mesiánica» y «demo-

³⁴ *Ibid.*, pp. 52-53.

³⁵ *Ibid.*, p. 49.

³⁶ *Ibid.*, p. 109.

crática». Los pragmáticos, como la izquierda liberal, se adhieren a la idea de la separación entre judíos y palestinos, es decir, hablan el lenguaje de la Línea Verde. Los colonos «mesiánicos» apoyan el establecimiento de un Estado judío racializado en todo el territorio del Mandato de Palestina. Los demócratas están dispuestos a «abrir un espacio y establecer en él, en diversos grados de igualdad o justicia, una sociedad binacional, en ocasiones a partir de acuerdos interreligiosos»³⁷.

Esta última posición es la base de la propuesta que hace Shenhav para resolver el conflicto palestino-israelí y la clave de la anteriormente mencionada «sorprendente coalición», a la que denomina el «Tercer Israel»: «Preveo una productiva coalición que situará a izquierdistas, palestinos y colonos democráticos en un frente unido cuyo propósito será encontrar una solución más justa [que dividir el país] que no esté basada en la arbitrariedad y la violencia de la Línea Verde». Una manifestación de la «arbitrariedad y la violencia de la Línea Verde» es la exigencia de dismantelar los asentamientos judíos en Cisjordania: «El pensamiento liberal nunca prestó atención a las implicaciones morales de eliminar los asentamientos. Yo mantengo que bajo las condiciones de apertura del espacio y de establecer la justicia política entre judíos y palestinos, los asentamientos deberían permanecer en su lugar»³⁸.

Un régimen consociacional

¿Cuál sería el programa político concreto del «Tercer Israel»? A pesar de su compromiso con «abrir un espacio», la premisa básica de Shenhav es que «la exigencia de un espacio exclusivo con un carácter judío es legítima», como lo es la exigencia de «reconocer el hecho de la existencia de los judíos como una colectividad nacional, incluyendo sus logros desde 1948»³⁹. Por ello, la sustitución del «lenguaje de 1967» por el «lenguaje de 1948» no significa necesariamente rectificar las injusticias cometidas contra los palestinos desde esas fechas. Aunque dedica una gran cantidad de espacio a describir estas injusticias, principalmente la Nakba y el tratamiento de los ciudadanos palestinos de Israel desde 1948, Shenhav se niega a especificar lo que se debería hacer para remediarlas. Sobre el derecho de retorno de los refugiados palestinos, acepta, con ciertas salvedades, su definición como el derecho de cada refugiado y de sus descendientes a elegir entre el regreso real a Israel y otras soluciones alternativas. Pero nunca expone esas salvedades, excepto para decir que se opone a un «regreso colectivo a un lugar concreto de donde hubieran sido expulsados si este se encuentra habitado por judíos, porque no se puede corregir una injusticia histórica mediante otra injusticia»⁴⁰. Esto parece razonable, pero no

³⁷ *Ibid.*, pp. 103-104.

³⁸ *Ibid.*, pp. 113, 111-112.

³⁹ *Ibid.*, pp. 150-151.

⁴⁰ *Ibid.*, pp. 154-155.

nos aporta demasiado: ni siquiera los más incondicionales defensores del derecho de retorno entre los palestinos exigen semejante limpieza étnica a la inversa.

En cuanto a los ciudadanos palestinos de Israel, si la solución del conflicto palestino-israelí hay que encontrarla en un espacio abierto entre el río Jordán y el Mediterráneo, entonces esa solución debería acabar igualmente con su ciudadanía de segunda clase. Pero Shenhav rehúsa comprometerse con cualquier solución concreta del conflicto en general⁴¹. En el epílogo, apropiadamente titulado «Retorno a los derechos de los judíos», considera las tres soluciones posibles que (presumiblemente) cumplen las exigencias de un espacio abierto y de la justicia política. La primera solución que quiere descartar es la de un único Estado secular y democrático: «Hay algo utópico en la idea de una sociedad justa, igualitaria, multinacional, democrática, multicolor, liberal y universal. [Pero] no hay y nunca ha habido un marco político real de esa clase». Además, «este modelo es problemático [...] porque presume una población homogénea con intereses mayormente individualistas». Este no es el caso en Israel-Palestina, ya que «la mayor parte de la población en ese espacio es religiosa-nacional y hay una tremenda diferencia tanto entre judíos como entre palestinos»⁴². El segundo modelo es la solución de los dos Estados («un modelo de división igualitaria de soberanías»), que Shenhav ya había descartado al principio. Así, el único modelo que realmente se ofrece para ser considerado es el tercero, la democracia consociacional.

Para Shenhav la ventaja de la democracia consociacional es que «semejante régimen podría, por definición, eliminar la política demográfica en Israel, y la demografía se convertiría en un producto del modelo, en vez de su principio fundamental». Para que esta frase tenga un mínimo sentido, «demografía» tendrá que ser sustituida por «etnicidad». Pero la etnicidad es precisamente el principio fundacional de la democracia consociacional, así como su producto, porque los famosos «pilares» que levantan a la sociedad, de acuerdo con el modelo consociacional, son étnicos; el modelo los congela haciendo de la etnicidad un principio constitucional del Estado. Dado que en nuestro caso concreto, como Shenhav nos ha advertido, «la mayor parte de la población [...] es nacional-religiosa», los elementos consociacionales serían étno-religiosos y por ello en su solución preferida la «teología tiene un papel central que desempeñar»⁴³.

Otra dificultad del modelo favorito de Shenhav es que la consociación, como es bien sabido, es un acuerdo entre elites de diferentes grupos étnicos, dirigido a salvaguardar sus intereses en detrimento de los que es-

⁴¹ *Ibid.*, pp. 113, 111-112.

⁴² *Ibid.*, pp. 154. No se proporciona prueba alguna que sostenga estas afirmaciones.

⁴³ *Ibid.*, p. 158.

tán fuera de ellas. Hablando sobre la transición en Sudáfrica, Courtney Jung y Ian Shapiro han señalado que la premisa que se encuentra detrás de la democracia consociacional es que

las divisiones étnicas determinan tan completamente a otros conflictos, y [...] son tan intensas y duraderas (si no primigenias), que la única receta institucional viable es la que está diseñada para minimizar la competición política y para impedir que los diferentes grupos se lancen los unos sobre los otros [...] [Así] los sistemas consociacionales no se hallan diseñados para estimular la alternancia de los principales partidos en el poder. Por el contrario, permiten las mismas combinaciones de las elites que hacen posible que éstas se impliquen en las mejores condiciones en el reparto de puestos y en el fomento del clientelismo de forma más o menos continua [...] Los que no están en el gobierno son eliminados sin contemplaciones de la política, haciendo más probable que, si pueden, se vuelvan hacia la política extrainstitucional⁴⁴.

Resulta curioso que Shenhav, cuyo punto de partida era que la línea de demarcación más significativa *no* era entre judíos y palestinos, y que sostenía que la elite liberal askenazí despreciaba por igual a los judíos mizrajíes, a los palestinos y a los colonos, recomiende un acuerdo basado en la división etno-religiosa entre judíos y palestinos que consolidaría a las elites judía y palestina en posiciones de poder y privilegio. Por la misma razón, ¿por qué el «Tercer Israel», una coalición de los desafectos –palestinos, judíos mizrajíes y colonos (a los que Shenhav también incluye entre éstos)– va a luchar por establecer semejante acuerdo?

La verdadera razón de la preferencia de Shenhav por el modelo consociacional, así como la verdadera razón para escribir su libro, se hace evidente al llegar al final de la obra. De una manera u otra, señala con razón, los judíos están destinados a convertirse en una minoría en el área del Mandato de Palestina, donde ya no pasan del 50 por 100 de la población. Su capacidad para mantener sus derechos y privilegios mediante «medios militares violentos» no está garantizada para siempre, de manera que «el objetivo estratégico de Israel debería ser formular los derechos de los judíos bajo cualquier régimen concebible»⁴⁵. Así, lo que preocupa a Shenhav no es la opresión de los mizrajíes, de los palestinos y de los colonos bajo el yugo de la elite liberal askenazí, sino más bien la salvaguarda de los derechos de los judíos como un grupo etno-religioso que está destinado a convertirse en una minoría. Esta es una preocupación legítima, pero es lamentable que Shenhav no la plantee abiertamente desde el principio en vez de llegar a ella por un camino tan indirecto.

⁴⁴ Courtney Jung y Ian Shapiro. «South Africa's Negotiated Transition», *Politics and Society* XXIII/3, 1995, pp. 273-274.

⁴⁵ Y. Shenhav, *The Time of the Green Line*, cit., pp. 159.

IV. LA ALTERNATIVA

Los autores de estos tres libros toman como su supuesto básico la inseparabilidad de Israel, dentro de sus fronteras de 1967, de los territorios ocupados. Nosotros pensamos que este supuesto es correcto; el colapso de la farsa diplomática interpretada por Estados Unidos, Israel y la Autoridad Palestina en los meses finales de 2010 ofrece una prueba más, si es que hace falta alguna, de que cualquier solución de «dos Estados» carece de toda realidad. Esto tiene graves implicaciones para la ininterrumpida capacidad de Israel para definirse como judío y como democrático, y plantea dos preguntas fundamentales. En primer lugar, ya que el proyecto de asentamiento en los territorios ocupados siempre fue considerado por el «público ilustrado» como un proyecto colonial, ¿se refleja igualmente la nueva realidad sobre la naturaleza del asentamiento sionista anterior a 1967? En segundo lugar, ¿qué clase de acuerdo político debería ser instituido para el sistema de gobierno que englobe tanto a Israel como a los territorios ocupados?

Los trabajos analizados en este artículo buscan proteger al sionismo anterior a 1967 de la acusación de colonialismo. Como resultado, ninguno de ellos es capaz de ofrecer un programa político razonable para aliviar la opresión de los palestinos en los territorios ocupados. Azoulay y Ophir presentan el régimen de ocupación como simultáneamente dentro y fuera del Estado democrático de Israel, y su propuesta política equivale a poco más que a tener un partido político de ciudadanos palestinos que se una a la coalición gobernante. Neumann abstrae por completo el primer asentamiento sionista de su contexto socio-histórico y presenta el primigenio deseo por Palestina de los «pioneros» —«para ellos, estar en *Eretz Israel* significaba ser— como algo ajeno a cualquier propósito o ideología política más amplia. Aunque no afronta directamente la cuestión de los territorios ocupados, está claro que los incluye en esa «madre» por cuya defensa está dispuesto a morir luchando contra las exigencias de justicia de los palestinos. Shenhav busca difuminar la realidad colonial reemplazando la línea de demarcación entre colonizadores y colonizados por otra entre el «público ilustrado» y el resto de sectores sociales en Israel-Palestina. Pero su propuesta política —la democracia consociacional— no se deriva de ninguna manera de su análisis.

Nosotros pensamos que la naturaleza colonial de la empresa sionista ha quedado convincentemente demostrada en la literatura académica y necesita ser afrontada sin subterfugios. Semejante reconocimiento proporcionaría un marco conceptual coherente en el que comprender el Estado de Israel y los territorios ocupados como una sola entidad política. Actualmente, el 40 por 100 de los residentes de esta entidad política ven negados todos los derechos de ciudadanía; este es el problema más acuciante que necesita ser afrontado por gente que todavía está comprometida con los valores universales de la Ilustración. Esta definición del problema ya nos presenta la solución: un Estado secular, democrático, no étnico

con los mismos derechos ciudadanos para todos, que ocupe toda el área entre el Mediterráneo y el río Jordán. La gran ventaja de un programa político dirigido a llevar a cabo esta solución sería que cambiaría las bases del conflicto palestino-israelí, que pasaría de ser una confrontación etno-nacional a convertirse en una confrontación sobre derechos civiles e igual ciudadanía. Concebiblemente, esto podría cambiar la naturaleza del conflicto desde un juego en el que para que uno gane el otro debe perder, a un juego en que las ganancias estén más repartidas.

La estabilidad de un futuro Estado palestino-israelí secular y democrático dependería no solo de que fuera verdaderamente democrático, sino también de la estricta separación constitucional entre Estado y religión. Esto no debería significar la secularización forzada o establecer restricciones sobre el libre ejercicio de la religión, sino que el Estado ni sancionaría ni subvencionaría actividades e instituciones religiosas. Habida cuenta del estado actual de la cuestión, esta idea suena asombrosamente utópica, no solo porque tanto la sociedad israelí como la palestina están volviéndose cada vez más religiosas, sino porque la posición económica, política y militar de Israel nunca ha sido mejor, de forma que la mayoría de los israelíes no percibe que haya un problema que requiera una solución. Sin embargo, Shenhav tiene razón al predecir que los judíos finalmente se convertirán en una minoría demográfica en el área del Mandato de Palestina, de modo que su propio interés debería llevarles a intentar encontrar acuerdos apropiados para sus relaciones a largo plazo con los palestinos. Pero su propuesta –fossilizar las divisiones etno-religiosas– es una solución equivocada. Lo que dicta el propio interés de los judíos es un acuerdo que elimine el carácter étnico de sus relaciones, en forma de un único Estado secular y democrático.

CÓMO SE PERDIÓ LA REPÚBLICA*

La creencia de que la Guerra Civil española puede ser reducida en esencia a una lucha entre democracia y fascismo, o entre fascismo y comunismo, recibe un saludable correctivo ya en la segunda página de la excelente historia de España en la década de 1930 realizada por Julián Casanova. Aunque a escala internacional puede ser considerado como uno más de los conflictos de décadas de «guerra civil europea» que finalizaron en 1945, el autor insiste correctamente en que la guerra española, iniciada por un golpe militar contra el gobierno democráticamente elegido, fue una guerra de muchas guerras, algunas de ellas con largas historias: una guerra para resolver profundos conflictos sociales, precipitada desde la compleja química del primer régimen verdaderamente democrático de la historia de España; una guerra de lucha de clases; una guerra de religión, entre el oscurantismo y la modernización; una guerra ideológica alrededor de los conceptos de nación y patria; una guerra entre creencias políticas antagónicas, librada «en un contexto internacional que había quedado desequilibrado por la crisis de las democracias y la arremetida del comunismo y del fascismo». Como observa Casanova, la suerte de España no fue muy diferente a la de más de la mitad de las veintiocho democracias parlamentarias o cuasi parlamentarias que existían en los años de entreguerras, y que a principios de 1939 habían sucumbido a regímenes dictatoriales.

En 1930 España era todavía un país predominantemente agrario, aunque la clase obrera industrial había doblado su tamaño desde el cambio del siglo, debido en gran parte a las ventajas económicas que proporcionó la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial y al *boom* de la década de 1920. Pero el país estaba marcado por un desarrollo socioeconómico extremadamente desigual. La industria estaba confinada casi exclusivamente en el norte y noreste, en el País Vasco y en Cataluña; en el sur, unos cuantos miles de propietarios poseían los dos tercios de las tierras, mientras que 750.000 jornaleros sin tierra se ganaban la vida a duras penas vi-

* Julián Casanova, *The Spanish Republic and Civil War*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 358 pp. [ed. original castellana: *Historia de España, vol. VIII. República y Guerra Civil*, Barcelona: Crítica, 2007].

viendo de salarios de hambre. Estas grandes fincas del sur del país contrastaban a su vez con los pequeños agricultores del norte y noroeste, que trabajaban parcelas demasiado pequeñas para proporcionar algo más que los medios de subsistencia. Una clase obrera combativa estaba repartida entre anarquistas y socialistas, dividida por la cuestión del Estado y de la participación del movimiento obrero en la política. Ambos, junto al republicanismo, fueron productos de la segunda mitad del siglo XIX, precediendo el anarquismo al socialismo. El primero era especialmente fuerte entre los trabajadores industriales de Barcelona, donde el sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del Trabajo) afirmaba tener 400.000 militantes en 1931, y entre el proletariado rural andaluz en el otro extremo geográfico. Incluso el nivel cultural era una muestra del desigual desarrollo del país: por un lado, un índice de analfabetismo cercano al 50 por 100 de la población de más de diez años; por otro, un grupo de deslumbrantes poetas, novelistas y dramaturgos que conducían al país a un renacimiento literario.

La República fue proclamada prácticamente sin derramamiento de sangre el 14 de abril de 1931, dos días después de que la monarquía se desplomara de la noche a la mañana como resultado de las victorias republicanas en las principales ciudades en las elecciones municipales. El rey pagó el precio de haber apoyado a la dictadura militar del general Primo de Rivera, desde 1923 –cuando bajo el encantamiento de la Revolución bolchevique, las movilizaciones de la clase obrera industrial y agraria asustaron a las clases dominantes de la monarquía– hasta su colapso en 1930. Las elecciones habían sido concebidas como un sondeo para examinar el sentimiento público sobre el regreso al anterior régimen parlamentario manipulado por la monarquía; para sorpresa general, el vendaval que se desató se llevó por delante al rey y al orden pseudodemocrático. Los sentimientos populares antimonárquicos habían sido movilizados al máximo por un «comité revolucionario» creado por toda la gama de dirigentes de partidos republicanos, reunidos en San Sebastián el verano anterior, al que después de una vacilación inicial se había unido el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La sumaria ejecución de dos oficiales de rango medio, que se habían alzado en armas, sin duda contribuyó a aumentar los sentimientos antimonárquicos. No obstante, la República llegó, por así decirlo, de la nada, sin luchas de masas y sin que se hubiera formado una sólida base republicana; desconcertadas, no sabiendo qué tocar, algunas bandas de música de pueblos y ciudades arrancaron con la *Marseillaise* en la celebración del advenimiento de la República.

Los cinco años de existencia de la República previos a la guerra se dividen de manera natural en tres periodos: el bienio republicano-socialista de 1931-1933 que promulgó reformas radicales; un segundo bienio de gobierno de centroderecha y contrarreforma, de 1933-1935; y el periodo final, cinco meses de exclusivo gobierno de la izquierda republicana que duró hasta el levantamiento militar de mediados de julio de 1936. Es mérito de Casanova estudiar la República con detalle –ocupa una tercera parte del libro– en vez de tratarla simplemente como un preámbulo de la

Guerra Civil, al mismo tiempo que no pierde de vista acontecimientos comparables acaecidos en otras potencias europeas del periodo de entre-guerras. Casanova señala que nada en los orígenes de la República presagiaba su fatal desenlace, ya que el criterio necesario para la estabilidad, «el que una amplia mayoría de la población aceptara, o por lo menos tolerara, una democracia introducida con tanta rapidez», parecía cumplirse inicialmente, ya fuera sostenido por la esperanza o aturdido por el remolino de acontecimientos. Las Cortes Constituyentes, que tras las elecciones generales de junio de 1931 tenían una aplastante mayoría republicana, no manifestaron una radicalización de la vida política española; no había fascistas, ni comunistas, ni anarcosindicalistas. Sin embargo, la derecha no republicana era una oposición tan minúscula, que poco o nada podía hacer a la hora de elaborar la Constitución, todavía menos para representar «las opiniones de grandes sectores de la sociedad española», que poseían, Casanova insiste, «un fuerte poder económico, social y cultural». Siguiendo una tradición que se remonta a la primera Constitución moderna española de 1812, la coalición elaboró una Constitución que en vez de proporcionar un campo de juego parlamentario neutral para la pacífica contienda por el poder, era «una carta programática de lo que los republicanos, ya en el poder, creían necesario para modernizar España».

Junto al genuino sufragio universal y a un gabinete responsable ante un parlamento unicameral, llegaron las reformas religiosas «marcadamente anticlericales» de la Constitución: libertad de religión; separación de la Iglesia y el Estado; fin de las escuelas dirigidas por la Iglesia y secularización de toda la educación; abolición de los estipendios del Estado para los curas; disolución de los jesuitas y la introducción del matrimonio, el divorcio y el entierro civil. Algunas de estas medidas eran controvertidas incluso para algunos republicanos: el primer ministro y el ministro del Interior, ambos católicos practicantes, emitieron un voto negativo y dimitieron de inmediato. Como señala Casanova, la lucha entre el clericalismo y el anticlericalismo «fue más intensa en España que en cualquier otro país europeo de la época».

En la década de 1930, la manifestación pública del anticlericalismo español y de la violencia popular que en no pocas ocasiones lo acompañó ya se remontaban a casi un siglo. Se trataba, por una parte, de un fenómeno sociocultural irreducible a una causalidad simplista, aunque sus raíces sin duda se encontraban profundamente ancladas en el pasado: en el poder económico e ideológico de la Iglesia durante el *ancien régime* y en su infatigable defensa de la verdadera fe, cuando ella —o más correctamente, la Inquisición— elevó la intolerancia y la intransigencia a los altares de la santidad. Por otra, el aspecto *político* del anticlericalismo español se puede datar con más precisión porque coincide con las revoluciones liberales de principios del siglo XIX, que intentaban desechar todos los vestigios del Viejo Orden, y con ellos especialmente el poder del clero sobre la sociedad. La primera masacre de clérigos y las primeras quemaduras de iglesias se produjeron en Madrid en 1835, provocadas por los rumores de

que los frailes habían desatado una epidemia de cólera envenenando el agua potable. Un siglo más tarde, la Iglesia todavía no había aceptado la modernización y la secularización; estaba acostumbrada a educar a los hijos de los privilegiados y a ignorar a los de las clases populares; a proporcionar asistencia a los desfavorecidos dóciles; a fomentar sindicatos amarillos y alinearse con los patronos en contra de los obreros «rebeldes», y a ofrecer a los pobres consuelo para la próxima vida, ya que no para esta. La clase obrera, cada vez más organizada sindicalmente, se enfrentaba a la Iglesia con la enemistad reservada para el enemigo de clase, mientras que los profesionales de las clases medias progresistas –esencialmente metropolitanas– la contemplaban como un poder hostil para la modernización del país y esperaban una legislación que la sometiera. Unos y otros pasaron por alto el hecho de que las clases dominantes habían patrocinado durante siglos una religión compartida como medio de imponer su hegemonía ideológica, y no era probable que renunciaran a ella fácilmente. De esta manera, como señala Casanova, había tres Españas: una extremadamente católica, antisocialista y respetuosa de la ley, otra moderadamente católica, y una tercera marcadamente anticlerical, una España «con mayor presencia del catolicismo en el norte que en el sur, entre los propietarios de tierras que entre los desposeídos, entre las mujeres que entre los hombres [...]».

Además, pronto se hizo evidente que la política religiosa de la coalición iba a proporcionar un terreno fértil para que la oposición reclutara y reagrupara fuerzas en su defensa de la religión, del orden público, de la propiedad y de la familia, como así sucedió con la formación del partido de masas católico, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). Las medidas religiosas –pocas de las cuales llegaron a imponerse porque la coalición se desplomó antes de que entraran en vigor– tuvieron a pesar de todo un dramático impacto sobre los devotos católicos, ya alarmados antes de que la República hubiera cumplido un mes de vida por el estallido de incendios anticlericales en respuesta a una insignificante provocación de las juventudes monárquicas. Como señala adecuadamente el autor, los fundadores de la República nunca se tomaron suficientemente en serio la reacción católica; la quema de iglesias en Madrid y Málaga, que el gobierno no detuvo con suficiente celeridad, quedó vívidamente impresa en la mente de los católicos.

La «amplia coalición estabilizadora», que para Casanova era esencial para la consolidación de la República, recibió un duro golpe seis meses después de la proclamación del régimen, cuando Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, el mayor y más antiguo de los partidos republicanos, se desplazó hacia la derecha y se pasó a la oposición; otro golpe traidor fue la negativa pública de la CEDA a reconocer su lealtad a la República; y por último se produjo un prematuro levantamiento militar en Sevilla en 1932, aunque fue fácilmente abortado. A esto hay que añadir el desgaste provocado por la «gimnasia revolucionaria» de los anarquistas: tres insurrecciones en dos años que fueron reprimidas por el gobierno.

El único éxito indudable de la coalición fue su programa de construcción de escuelas para remplazar los centros de la Iglesia y para reducir el elevado índice de analfabetismo: en 1934 se habían construido más de 10.000 escuelas. Sin embargo, otras medidas, especialmente una reforma agraria infradotada y la reforma militar de Manuel Azaña, tuvieron mucho menos éxito. No se hizo ningún progreso para paliar el desempleo, que alcanzó su nivel más alto en 1933, el peor año de la Gran Depresión en España; se concedió la autonomía a Cataluña, pero no al País Vasco; y lo más grave de todo, después de dos años en el poder, la coalición se rompió. Esto abrió el camino para la rotunda victoria de la CEDA en las elecciones generales de noviembre de 1933, con el Partido Radical en segunda posición. La CEDA inicialmente prestó apoyo parlamentario al gobierno de Lerroux, aunque José María Gil Robles, un astuto abogado y dirigente de la CEDA, pronto hizo pública su estrategia. Primero colaborar con el nuevo gobierno, después participar en él, y por último apoderarse del mismo con la intención de revisar la Constitución. Si esto resultaba imposible, habría que encontrar «otros medios», evidentemente extraparlamentarios y no democráticos. Mientras tanto, el gobierno encabezado por los radicales, bajo presión de la CEDA, revirtió la reforma religiosa, consiguió la práctica paralización de la reforma agraria, y rebajó los salarios agrícolas en lo que la izquierda llamó el «bienio negro».

En medio de una creciente polarización, el Partido Socialista comenzaba a hablar de una insurrección armada contra cualquier participación de la CEDA en el gobierno, rompiendo con su posición anterior a favor de la legalidad republicana y de la democracia parlamentaria como medio pacífico para alcanzar el socialismo. Los acontecimientos registrados en el ámbito doméstico —las diatribas de Gil Robles en contra de la democracia y a favor de un «concepto totalitario del Estado», la aparición de la todavía minúscula Falange, así como las inclinaciones fascistas del movimiento juvenil de la CEDA— y la evolución del panorama internacional —el ascenso de Hitler al poder y el aplastamiento de los socialistas austriacos a manos del canciller Dollfuss— despertaron en la izquierda la alarma sobre el fascismo nacional e internacional. En octubre de 1934 tres miembros de la CEDA se unieron al gobierno y entonces comenzó la poco preparada insurrección socialista, que arraigó brevemente en Cataluña y con más fuerza en Asturias, donde una coalición de socialistas, anarcosindicalistas y militantes comunistas resistió durante dos semanas en un intento genuino de revolución social. Por primera vez en un siglo también se desató el anticlericalismo de manera criminal: fueron asesinados treinta y cuatro curas, seminaristas y frailes y se incendió o reventó un gran número de iglesias. A instancias del general Franco, se recurrió a unidades de la Legión y de tropas marroquíes (los Regulares), así como a 15.000 soldados y 3.000 efectivos de la paramilitar Guardia Civil para reprimir el levantamiento, lo cual hicieron con extrema brutalidad, realizando ejecuciones sumarias bajo la ley marcial. El coste final fue de alrededor de 1.100 muertos, 2.000 heridos e incontables insurrectos encarcelados, además de 300 bajas entre las tropas militares y paramilitares del otro bando.

Casanova destaca que el «octubre rojo» no fue la batalla de inicio de la Guerra Civil, como algunas veces se afirma, o el final de la coexistencia constitucional. Tan solo dieciséis meses después se celebraron elecciones generales dentro del proceso republicano-democrático legal, aunque la CEDA se despojó de cualquier intención de estabilizar a la República. En mayo de 1935, Gil Robles —entonces ministro de la Guerra en un gobierno dominado por la CEDA— nombró al general Franco jefe del Estado Mayor, y reforzó los elementos derechistas de los escalones superiores del ejército; todos ellos desempeñarían un papel significativo en el levantamiento militar de 1936.

En febrero de 1936 se celebraron las elecciones generales. La izquierda estableció un amplia alianza en el Frente Popular, formado por los partidos republicanos de izquierda, el PSOE, la organización de las juventudes socialistas y el bloque sindical, Unión General de Trabajadores (UGT), el Partido Comunista de España (PCE) y los disidentes comunistas agrupados en el recientemente formado POUM. La derecha, por otro lado, estaba más dividida que en 1933. El electorado otorgó al Frente Popular la victoria por un pequeño margen; pero la negativa de Largo Caballero, secretario general de la UGT, a volver a la coalición del primer bienio en la que había sido ministro de Trabajo, llevó a que solamente los partidos republicanos de izquierda estuvieran presentes en el gobierno que encabezó Manuel Azaña. Cuando este último fue elevado a la presidencia de la República en mayo y trató de restaurar la coalición republicano-socialista con Indalecio Prieto, líder socialista vasco cuya facción «centrista» controlaba el comité nacional del PSOE, Largo Caballero amenazó con romper el pacto del Frente Popular. En lugar de Prieto, Santiago Casares, republicano de izquierda, fue nombrado jefe de gobierno y ministro de la Guerra.

A menudo se acusa a la «debilidad de su gobierno» del fracaso para frustrar la conspiración militar, pero Casanova mantiene que esto es subestimar el claro cisma que se había producido en el PSOE y que impedía cualquier esperanza de fortalecer el gobierno. Considera al propio Prieto como parcialmente culpable: no solamente había estado activamente implicado en el levantamiento de Asturias, sino que se había embarcado en el proceso de remplazar a Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, sin haber asegurado su alternativa política para encabezar el gobierno. El propio Alcalá Zamora había tenido su propia aportación a la desestabilización de la República «entrometiéndose excesivamente» en el proceso democrático: primero intentando infructuosamente destituir a Azaña con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Congregaciones Religiosas en mayo de 1933, para lograrlo cuatro meses después, el día siguiente en que Azaña obtenía la confianza de las Cortes, para nombrar jefe de gobierno a Lerroux. A partir de entonces, Alcalá Zamora impidió el acceso de Gil Robles de la jefatura del gobierno durante el segundo bienio; finalmente, utilizando los mecanismos del poder presidencial, formó un partido centrista para presentarse a las elecciones de febrero de

1936, que cosechó un rotundo fracaso electoral. Pero su sustitución por Azaña no supuso el éxito que este último esperaba, ya que debilitó al gobierno republicano de izquierda, muy necesitado de sus personales habilidades políticas como jefe de gobierno en el momento de máximo peligro para la democracia española.

Consternada por su inesperada derrota electoral, la CEDA dio un significativo giro hacia el autoritarismo. Casanova dice que «todo el mundo entendió el mensaje», la necesidad de «abandonar las urnas y tomar las armas». Mientras tanto, el movimiento juvenil del partido estaba desertando *en masa* hacia la Falange, cuyos miembros se dedicaron a una desestabilizadora violencia callejera en Madrid —que se sumaba al incremento diario de la violencia verbal— con intentos de asesinato de personalidades destacadas y choques armados, a lo que las juventudes socialistas, inclinadas a crear milicias, respondieron de la misma manera. Rebatiendo la afirmación de Stanley Payne de que las huelgas en las zonas dominadas por la CNT estaban en su apogeo histórico, Casanova sostiene adecuadamente que en los principales bastiones sindicales de Barcelona, Zaragoza y Sevilla, la CNT estaba relativamente inactiva. Más bien fue la masiva invasión de tierras en Badajoz, dirigida por los socialistas, y que se apropió de una extensión de tierra siete veces mayor que la conseguida en toda la reforma agraria anterior, lo que asustó a las clases dominantes y las llevó a pensar que el gobierno había perdido el control de la situación.

Inmediatamente después de la victoria electoral del Frente Popular, los oficiales de derechas del ejército comenzaron a conspirar activamente. El gobierno alejó a muchos de ellos de Madrid: envió al general Franco a Canarias y al general Mola, el clandestino «director» del planeado alzamiento, a Pamplona. El 25 de mayo Mola lanzó la primera «instrucción confidencial» para los conspiradores en la que proclamaba la necesidad de la represión violenta para asegurar el triunfo del golpe. Los militares rebeldes lo tomaron al pie de la letra. El asesinato a primeras horas de la mañana del 13 de julio de José Calvo Sotelo, en aquél momento el líder más destacado de la derecha —realizado por fuerzas de seguridad en venganza por el asesinato de uno de sus miembros en los días anteriores— finalmente empujó a los militares indecisos. Aunque el gobierno no había tomado parte en el asesinato de Calvo Sotelo, fue ampliamente culpabilizado por los conservadores, que el 17 de julio se unieron a la sublevación militar que había comenzado en Marruecos y que en los tres días siguientes se extendía a la Península.

La confianza en una veloz victoria de los sublevados se disipó rápidamente cuando la insurrección en las principales ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, fue aplastada en las calles por una combinación de fuerzas de seguridad leales y de militantes políticos y sindicales. Donde esta combinación no se produjo, o donde las fuerzas de seguridad se unieron a los sublevados, el alzamiento tuvo un éxito inmediato, como sucedió en Sevilla y Zaragoza. El hecho de que menos de la mitad del

ejército y de las fuerzas de seguridad se unieran a la insurrección fue la principal razón para que el golpe fracasara en su objetivo principal y se transformara en una guerra civil. El alzamiento fracturó a la República pero no la derribó: el núcleo del campesinado católico en el norte, excepto la costa cantábrica, cayó en poder de los rebeldes; lo mismo sucedió en el sur con la Andalucía latifundista y parte de Extremadura. La República mantuvo cinco de las principales ciudades españolas, el grueso de su industria y las masivas reservas de oro del Banco de España; los militares solo se habían apoderado de una gran parte de los graneros del país. Parecía que la República debía ganar la guerra.

El que no lo hiciera es la cuestión que subyace en los cinco capítulos que Casanova dedica específicamente a la guerra. Pero antes reconstruye la escena de los primeros días del conflicto. El error inicial del nuevo gobierno, que seguía siendo totalmente republicano, fue ordenar la desmovilización del ejército con la esperanza de reducir los recursos humanos de los sublevados; en vez de ello, esto condujo a la desbandada de sus propios soldados, muchos de los cuales se unieron a las milicias que los sindicatos y militantes políticos antimilitaristas estaban creando en lugar de un ejército. No obstante, el gobierno ordenó armar al pueblo, aunque ya muchos se habían apoderado de armas en los cuarteles y depósitos donde habían derrotado a los militares. Una fragmentada revolución desde abajo, que desembocó en una multitud de comités que dirigían los asuntos locales, debilitó al Estado y le privó de su poder coercitivo final, las fuerzas armadas, después de lo cual expiró. En persecución del enemigo, la revolución marchó sobre su inanimado cuerpo sin detenerse a insuflar nueva vida en él. Por parte de los sublevados, el general Franco, que había volado desde Canarias, tomó el mando en Marruecos e hizo un llamamiento de ayuda a Alemania e Italia. Ambos países rápidamente contestaron enviando aviones de transporte para trasladar hasta Sevilla al único ejército profesional español, el Ejército de África. Una columna formada por legionarios y tropas marroquíes empezó a avanzar rápidamente hacia el norte en dirección a Madrid.

El primer capítulo específico sobre la guerra nos sumerge en el horror de los asesinatos en la retaguardia de ambos bandos. Los primeros en ser fusilados fueron los oficiales del ejército, ya fuera por haberse negado a sublevarse —bajo la ley marcial los sublevados arrogantemente calificaron a los oficiales leales a la República de «rebeldes»— o, en el otro bando, como traidores por haberlo hecho. Tras ellos, para el bando de los sublevados llegó el turno de dirigentes republicanos, líderes y miembros de la CNT y de la UGT, militantes de partidos de izquierda, conocidos defensores del Frente Popular, masones, maestros republicanos, funcionarios civiles, profesionales e intelectuales. Todas «las ratas», toda «la escoria roja», tenía que ser «quirúrgicamente eliminada» para salvar la patria y la «civilización cristiana» y para asegurar la pacificación de la retaguardia, lo que provocó la muerte de cerca de 100.000 personas, según las meticulosas investigaciones realizadas en los últimos años. Por su parte, los republicanos

eliminaron a unas 55.000 personas, de las cuales 6.832 fueron miembros regulares o seculares del clero y 280 mujeres de órdenes religiosas. A continuación vinieron aquellos considerados los «opresores» del pueblo: católicos destacados, dirigentes y militantes de partidos de derechas, propietarios de empresas y patronos y pistoleros de sindicatos amarillos.

El autor, un experto en la materia, dice que la represión utilizó en ambas zonas el mismo idioma deshumanizador, la necesidad de «higiene pública» para limpiar al país de su enemigo. Con la excepción de la masacre organizada de aproximadamente 2.000 prisioneros políticos durante la defensa de Madrid, la más numerosa en ambos bandos, el peor aluvión de asesinatos en tiempo de guerra en ambas zonas se produjo en los tres primeros meses. Incluso así, hubo una diferencia significativa: muchas veces, que no se escucharon en el bando sublevado, sí se levantaron en la zona republicana en contra de las matanzas; a principios de septiembre un nuevo gobierno dirigido por Largo Caballero empezó a crear una apariencia de orden público que lentamente pusiera fin a los asesinatos. Pero no con suficiente rapidez. Las noticias de la violencia anticlerical que incluía el desenterramiento de féretros de monjas, la extendida quema de iglesias y la profanación de objetos religiosos, se difundió por todo el mundo creando una imagen extremadamente negativa de la zona republicana. En el lado rebelde, con alguna excepción ocasional, una férrea censura mantuvo los asesinatos fuera de las noticias. La Iglesia, que pronto santificaría la guerra de los sublevados como una «cruzada religiosa», cerró los ojos, aunque cientos de miembros del clero fueron testigo de la represión, llevada a cabo no solo por los militares, sino por falangistas y ciudadanos católicos conservadores normalmente respetuosos con la ley.

El lector acaba con considerable alivio las páginas de estos horribles acontecimientos y se dirige hacia la situación internacional, cuyos perfiles son bien conocidos: la completa «farsa» de la no-intervención, como la califica Casanova, celosamente promovida por una Gran Bretaña en las garras de la contemporalización, y por el Frente Popular francés, de quien partió la idea, y que no fue respetada con el mismo celo por las potencias fascistas que apoyaban a Franco. En un momento de extendido rearme europeo, «ningún país mostró interés por detener la guerra española».

Sin la ayuda fascista, la mayor parte proporcionada a crédito, los sublevados no hubieran podido continuar la guerra durante mucho tiempo, menos aún ganarla. Aparte de la Legión Cóndor, Alemania e Italia proporcionaron en conjunto decenas de miles de soldados (principalmente italianos), cerca de 1.600 aviones, miles de vehículos blindados y cientos de piezas de artillería. Igualmente importantes fueron los 3,5 millones de toneladas de combustible proporcionadas a crédito por Texaco y Shell —el doble de la cantidad importada por la República— sin las cuales el ejército de Franco no hubiera podido maniobrar tan rápidamente como lo hizo. Stalin, que no quería provocar a Francia y a Gran Bretaña, porque todavía buscaba una alianza antifascista con ellas, se mantuvo inicialmente al

margen, pero la descarada intervención nazi y fascista le alarmó cada vez más. Asegurándose de que todas las potencias europeas fueran conscientes de que la ayuda soviética para la República no pretendía hacer progresar la revolución, en octubre de 1936 llegó a Madrid la primera remesa de armas soviéticas –junto al primer contingente de las Brigadas Internacionales– justo a tiempo para ayudar a impedir la caída de la capital. En total, la Unión Soviética envió 700 aviones militares y 400 vehículos blindados, además de 2.000 pilotos, ingenieros, consejeros militares y miembros de la NKVD, la policía secreta. El número total de brigadistas que pelearon en un u otro momento fue de 35.000, pero nunca hubo más de 20.000 en el campo de batalla.

Casanova dice que «la República se gastó tanto dinero en perder la guerra como los franquistas en ganarla»: alrededor de 600 millones de dólares (de 1939) cada uno. El esfuerzo bélico de la República no hubiera podido mantenerse demasiado sin las reservas de oro del Banco de España, entre las mayores del mundo y valoradas en 805 millones de dólares. Hacia la Unión Soviética se embarcó oro por valor de 518 millones que se gastó en armas y suministros. El Banco de Francia también se hizo con oro por valor de 195 millones de dólares. Sin embargo, la igualdad de gastos de ambas partes es engañosa. Franco recibió no solo más armas, sino de una calidad incalculablemente mayor; la República, incapaz de obtener legalmente armamento de las democracias, se vio obligada a menudo a utilizar intermediarios y traficantes. Aparte de las constantes estafas, el autor dice que «la mala calidad del armamento y los sobornos le costaron al gobierno quizá 100 millones de dólares». El dinero prácticamente se agotó en agosto de 1938, y la Unión Soviética proporcionó un crédito de 60 millones de dólares para permitir que la República continuara la guerra.

El 4 de septiembre de 1936, con las milicias revolucionarias incapaces de contener el avance sobre Madrid del Ejército de África, Largo Caballero se convirtió en jefe del gobierno y ministro de Defensa, y su gabinete incluyó a dos ministros del Partido Comunista, siendo el primer gobierno de Europa occidental en hacerlo. Las principales tareas del gobierno fueron supervisar la reconstrucción del Estado, la militarización de las milicias, la contención de la revolución –y con ella el fin de la violencia en la retaguardia– y la centralización del poder. El gobierno, al que en poco tiempo se unieron dos ministros anarquistas, avanzó en todos los frentes menos en uno: el éxito militar. Ni siquiera puede reclamar la exitosa defensa de Madrid, ya que salió en secreto de la capital –abandonándola a su suerte a ojos del pueblo– en vísperas de la ofensiva de Franco. La caída de Málaga, con una caótica defensa de las milicias frente a fuerzas italianas y españolas en febrero de 1937, abrió una caja de Pandora política que fue precintada de nuevo –sellando en el proceso la suerte de Largo Caballero– con el derramamiento de sangre en las calles de Barcelona cuando militantes anarquistas y del POUM pelearon en defensa de la revolución contra las fuerzas socialistas y comunistas, que defendían un compromiso exclusivo con la guerra.

Diez meses antes, al comienzo del conflicto, el movimiento anarquista se había dado cuenta de que no era el momento de la revolución, solo importaba la derrota del enemigo. Pero la insurrección militar precipitó la misma revolución que había intentado prevenir y ante el consiguiente vacío de poder no hubo nada que detuviera su propagación. Las fábricas y empresas fueron colectivizadas o puestas bajo el control de los obreros, mientras que más de la mitad de las 5.500.000 hectáreas de tierra cultivable expropiadas en agosto de 1938 eran trabajadas legalmente por colectivos de la CNT y la UGT. Pero bajo el fermento revolucionario se libraba una lucha por el poder y por el control de las escasas armas. Ese fue el verdadero significado de la lucha en Barcelona: la creciente influencia del Partido Comunista en el ejército y en la vida política y el aumento de sus militantes debido principalmente a la ayuda soviética. La intervención directa del gobierno finalmente detuvo la pelea en las calles y poco después acabó con la revolución.

El beneficiario inmediato de la crisis fue Juan Negrín, un fisiólogo socialista de 45 años, políglota y experto reconocido en asuntos financieros —como ministro de Hacienda organizó el envío de oro a Moscú— a quien el presidente Azaña nombró jefe del gobierno para poner fin a la indisciplina y «desorganización» en la retaguardia, especialmente en Cataluña y Aragón. El gobierno tomó las riendas del orden público en Cataluña, disolvió el Consejo de Aragón dominado por los anarquistas y envió a la división comunista de Enrique Lister para romper las colectividades rurales aragonesas. Más fácil de despachar, el POUM —«provocadores trotskistas» y «espías fascistas», como proclamaba el Partido Comunista— fue declarado fuera de la ley, sus milicias desmanteladas y su líder, Andreu Nin, uno de los antiguos secretarios de Trotski, «desapareció»; de hecho fue secuestrado y asesinado por el NKVD. El asunto profundizó aún más la desconfianza entre los comunistas y el resto de las organizaciones políticas, especialmente anarquistas y socialistas de izquierda, y también dejó claro los graves problemas que estaban produciendo en la República las disputas políticas internas, siendo un considerable escollo para ganar la guerra. En el otro lado del frente no había semejante problema: Franco, para entonces cabeza del así llamado Estado nacional, aplastó la disidencia de raíz, uniendo por la fuerza a falangistas y carlistas, las únicas organizaciones políticas civiles autorizadas.

En palabras del autor, la política de guerra de Negrín fue «un desesperado intento para introducir una alternativa democrática y disciplinada [a la revolución] que ocasionara un cambio en la política británica y francesa». En pocas palabras, seguir luchando hasta que Gran Bretaña y Francia suspendieran su agobiante política de no intervención, o si eso fracasaba, vincular la guerra española a la cada vez más inminente guerra europea. En octubre de 1937 todo el norte republicano, con la industria pesada del País Vasco, había caído en manos del enemigo, inclinando el equilibrio del poder a favor de Franco. La breve reconquista republicana de Teruel en el amargo invierno de 1937-1938, y su nueva pérdida, condujo inme-

diatamente a que Franco recuperara la ofensiva en Aragón, que cayó en solo tres semanas, asegurando un punto de apoyo en el oeste de Cataluña. A mediados de abril de 1938 su ejército alcanzó el Mediterráneo en Vinaroz, dividiendo en dos a la República. A partir de marzo de 1937, y después de sus repetidos fracasos para tomar Madrid, la estrategia de Franco fue librar una guerra de desgaste, una «ocupación sistemática del territorio acompañada por una necesaria operación de limpieza» —claro eufemismo para la represión— que el Generalísimo declaró «preferible a una rápida derrota de los ejércitos del enemigo que dejaría el país infestado de adversarios».

En la primavera y principios de verano de 1938, cuando su ofensiva diplomática fracasó en alcanzar un acuerdo negociado para el fin de la guerra, Negrín lanzó su última apuesta militar: la ofensiva del Ebro, que empezó en las últimas semanas de julio de 1938. Su objetivo, de acuerdo con Casanova, no era derrotar al enemigo, una tarea imposible, sino negociar desde una posición de fuerza una «rendición algo menos que incondicional» abriendo un corredor en territorio enemigo para aliviar Valencia y restaurar la comunicación directa entre las dos zonas republicanas. De una forma más dramática, la ofensiva del Ebro siguió inicialmente el modelo de las anteriores batallas más importantes de la República: Brunete, Belchite, Teruel. En primer lugar, el ataque, un atrevido paso del Ebro por la noche, que tomó al enemigo por sorpresa, seguido por un corto avance antes de ser detenidos por los refuerzos que Franco envió rápidamente al frente. Sin embargo, esta vez las tropas republicanas —la mayoría dirigidas por los comunistas— recibieron la orden de resistir en sus posiciones, y así se mantuvieron durante casi cuatro meses, expuestas al fuego de la artillería y a los ataques de la infantería, hasta que los supervivientes recibieron a mediados de noviembre la orden de retirada, cruzando de nuevo el Ebro. No se ganó otra cosa que tiempo a costa de un gran sacrificio: 60.000 soldados curtidos en la lucha entre muertos y heridos y una considerable pérdida de material de guerra. Incluso el tiempo corría en contra de la República. A finales de septiembre, el Pacto de Múnich que firmaban Gran Bretaña y Francia ponía a Checoslovaquia —la única democracia que quedaba en el centro y el este de Europa— en manos de Hitler, evidenciando sin el menor asomo de duda la continua negativa de las democracias para ayudar a la República española. Entre las navidades y el 4 de febrero se perdió Cataluña; Barcelona cayó sin resistencia en medio de un masivo éxodo de civiles a Francia.

Para el que supiera leerlo el futuro ya estaba escrito. Medio muertos de frío y hambre en Madrid, alimentándose de 100 gramos de pan y lentejas, las llamadas popularmente píldoras del Dr. Negrín, acosados por una quinta columna y descorazonados pero no vencidos por las constantes derrotas del ejército, los verdaderos creyentes conservaban la fe; pero cada vez eran menos. Los republicanos no comunistas tenían miedo de una dictadura al estilo soviético si la guerra continuaba. Para culminar todas las disputas políticas anteriores, la guerra terminó como había empezado, con un

golpe militar, dirigido por el coronel Casado, comandante del Ejército del Centro republicano de Madrid, contra el gobierno de Negrín a principios de marzo de 1939. Los militares habían perdido la fe en el reiterado llamamiento del jefe del gobierno para continuar la resistencia. El golpe se convirtió en una guerra civil en las calles de la capital entre tropas dirigidas por los comunistas que trataban de aplastar a Casado —quien pensaba que «entre oficiales» se podía negociar una rendición más favorable de la que podía lograr Negrín— y milicianos anarquistas que apoyaban el golpe, dejando en cinco días alrededor de 2.000 muertos. Casado ganó la batalla, pero en vano. En su incesante determinación de erradicar de raíz al enemigo, Franco no ofreció otra cosa que la «rendición incondicional». Solo un mes antes había promulgado una Ley de Responsabilidades Políticas, cuyos efectos, retroactivos hasta el levantamiento asturiano de 1934, se convirtieron en su principal norma represiva. El 28 de marzo, sin ninguna garantía de evitar la sangrienta represión que se avecinaba para los republicanos, el frente de Madrid izó la bandera blanca y las tropas de Franco desfilaron por la capital de la que nunca se habían podido apoderar. Cuatro días más tarde, «después de haber capturado y desarmado al ejército rojo», Franco proclamaba el fin de la guerra.

En un breve epílogo, Casanova analiza las razones de la derrota de la República, citando a numerosos autores españoles y extranjeros que unánimemente la achacan a la situación internacional, una opinión que Casanova comparte en general. El historiador británico especializado en grandes batallas, Anthony Beevor, también citado con cierta profusión, ofrece una lectura diferente: «la desastrosa dirección de la guerra» por parte del Alto Mando de la República y de sus «consejeros soviéticos», que optaron por ofensivas convencionales, generalmente por «razones de propaganda», en contra de un ejército mejor armado y entrenado, fue lo que «gradualmente destruyó el ejército y la resistencia de la República». Esta es una perspectiva en general similar a la que algunos soldados comunistas y ex comunistas supervivientes y comisarios políticos me manifestaron, hace treinta años, sobre sus íntimos pensamientos en el transcurso de la guerra. Añadían dos errores adicionales: el que Negrín no renunciara mucho antes a toda esperanza respecto a las irresolutas democracias; y que el PCE no renunciara a su política sectaria respecto a la izquierda revolucionaria. Sin estas equivocaciones fundamentales, ellos pensaban, hubiera sido posible forjar una estrategia político-militar que respondiera a la pregunta: ¿qué podía hacer la República en condiciones desfavorables —qué fuerzas militares mal utilizadas había disponibles, qué compromisos políticos, qué sacrificios eran necesarios— para ganar la guerra? Vanas ilusiones rumiadas a posteriori, desde luego, pero el coste de la derrota fue ciertamente mayor que el de un innovador intento por evitar esa suerte.

El libro de Casanova debe situarse entre el mejor material escrito sobre la República y la Guerra Civil española disponible en lengua inglesa. Es el producto de una nueva generación de historiadores españoles que alcan-

zaron la mayoría de edad a comienzos de la Transición hacia la democracia después de la muerte de Franco, a partir de la cual el número de obras en español sobre la década de 1930 creció exponencialmente. La mayoría de ellas son estudios regionales o locales, categorías que de ninguna manera hay que despreciar porque sin ellas no es posible ninguna nueva síntesis del periodo. Un ejemplo sobresaliente de un estudio regional es el recientemente publicado *Atlas de la Guerra Civil a Catalunya* (2010), con más de 400 mapas detallando cada aspecto político y militar imaginable de la guerra en tierra, mar y aire, en el que durante cinco años ha trabajado un equipo de historiadores y cartógrafos bajo la dirección de Antoni Segura, Joan Villarroya y Víctor Hurtado de la Universidad de Barcelona, un proyecto generosamente financiado por la Generalitat de Catalunya.

En términos de «generaciones» de historiadores españoles, la nacida justamente después de la finalización de la Guerra Civil y que participó activamente en la Transición, también ha producido un destacado trabajo sobre la República y la Guerra. Santos Juliá, sobre todo con su biografía de Manuel Azaña; Ángel Viñas con su trilogía enormemente documentada –en especial con nuevo material procedente de los archivos rusos– sobre la República durante la guerra; y Julio Aróstegui con su larga dedicación a la década de 1930 en España, vienen de inmediato a la mente. La generación de Casanova, de la cual Enrique Moradiellos es otro ejemplo con su obra sobre la Guerra y sus ramificaciones internacionales, especialmente británicas, está bien preparada para trascender la estrecha perspectiva histórica de la Península Ibérica –Casanova ha enseñado en dos universidades de Estados Unidos y tiene una cátedra en la Universidad de Zaragoza; Moradiellos ha sido profesor en la London University y es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura– y destaca por su disposición para mirar impasiblemente el reciente pasado español sin que éste pese sobre sus facultades críticas. Además lo hace con estilo y brío.

LA SENDA DEL VIEJO TOPO*

Con *How to Change the World*, Eric Hobsbawm cumple más de sesenta años en los escaparates de las librerías desde que en 1948 editara *Labour's Turning Point* y en 1959 hiciera su debut como autor propiamente dicho con *The Jazz Scene* y *Primitive Rebels*. Si *How to Change the World* resultara ser el último de sus aproximadamente veinticinco títulos hasta la fecha, representaría una digna despedida para una carrera íntimamente vinculada al nombre de Karl Marx y a su legado político e intelectual. Subtitulado realmente «Marx y el marxismo, 1840-2011», en vez de los «relatos» sobre ambos que anuncia la portada, el libro no recoge de hecho todos los escritos del autor sobre el tema, que se pueden encontrar en dos espléndidas recopilaciones anteriores –*Revolutionaries* (1973) y *On History* (1997)– por no mencionar la nueva edición del *Dictionary of National Biography* que contiene su larga contribución sobre Marx. Por lo tanto, quizá no sea una coincidencia que el único marxista posterior a Marx del que se ocupa extensamente –dos capítulos de dieciséis– sea Gramsci; el único que ha alcanzado la casi incondicional aprobación de Hobsbawm desde que descubriera sus *Quaderni del carcere* en la década de 1950, y después de haber estado gravitando en lo que (en un revelador inciso en su autobiografía de 2002) describió como su «militancia espiritual» en el Partido Comunista Italiano.

Aun así, *How to Change the World* contiene el núcleo del importante material escrito desde el decisivo año de 1956, empezando por un artículo sobre la crítica de Marx del mundo victoriano, publicado en 1957 en el número inaugural de *New Reasoner*, presumiblemente como un intento serio de colaboración con la Nueva Izquierda, hasta un conjunto de reflexiones sobre «Marx en la actualidad», elaboradas para este volumen. Por ello serán indispensables por lo menos dos tipos de lectura, sin duda solapadas. La primera, naturalmente, es la de aquellos con un interés especial por el tema. Como señala Hobsbawm, *How to Change the World* es «esencialmente un estudio del desarrollo e impacto póstumo del pensa-

* Eric Hobsbawm, *How to Change the World, Tales of Marx and Marxism*, Londres, Little, Brown, 2011, 470 pp.

miento de Karl Marx (y del inseparable Friedrich Engels)». En las últimas décadas, por lo menos en inglés, han sido raros los intentos de realizar una historia del marxismo y *How to Change the World* tampoco lo es. (Simptomáticamente, Hobsbawm solamente menciona dos ejemplos: *Las principales corrientes del marxismo*, de Kolakowski en 1978 y el «estudio histórico y crítico» realizado en 1961 por George Lichtheim, a cuya memoria se dedica el libro.) Sin embargo, el núcleo de la obra –más de la mitad de su contenido– está formado por seis capítulos de gran densidad y crucición redactados en su momento para el último intento genuinamente satisfactorio de acometer esa tarea: los volúmenes que forman *Storia del marxismo*, coeditada por Hobsbawm, Georges Haupt y otros autores para Einaudi en 1978-1982 (solo fue traducido el primero de ellos, *Marxism in Marx's Days* [1982], que incluía tres de los capítulos reeditados aquí y que dejó de estar disponible hace mucho tiempo), y que tratan desde el marxismo como sistema intelectual hasta los movimientos y regímenes inspirados por él, los cuales a su vez reformaron y (deformaron) la teoría, ahora convertida en una «fuerza material» institucionalizada.

Los lectores no italianos saludarán especialmente la tardía publicación en inglés de las reflexiones sobre la interacción entre el marxismo y la cultura intelectual europea en los tiempos de la Segunda Internacional; sobre su inflexión progresista en la era del antifascismo, cuando la Unión Soviética de Stalin podía ser considerada la encarnación del racionalismo de la Ilustración traicionado por los herederos de una burguesía una vez revolucionaria; y sobre sus mutaciones posteriores a la guerra hasta el centenario de la muerte de Marx en 1983. Junto a los capítulos sobre las relaciones de los fundadores con los socialismos premarxianos, con su pensamiento político y la diferente acogida geográfica de su trabajo, los análisis aparecen ahora complementados por una investigación menos precisa sobre «Marxismo en recesión, 1983-2000». Ocasionalmente actualizado para citar un material más reciente, podría constituir un volumen independiente donde la acreditada capacidad de Hobsbawm para el análisis y la síntesis alcanzase la cima de sus facultades como historiador de las ideas; pero hay que lamentar que su revisión no haya supuesto la modificación de las incontables referencias a la obra de Marx y Engels, muchas de las cuales remiten a la *Werke* alemana a pesar del hecho de que la publicación de la edición inglesa de las *Collected Works* se finalizó en 2004.

Un segundo tipo de audiencia probablemente se vea igualmente atraída por la perspectiva de profundizar en las continuidades y discontinuidades de la actitud de Hobsbawm hacia la tradición que ha defendido desde principios de la década de 1930, cuando leyó el *Manifiesto comunista* en su liceo de Berlín. Al reunir textos procedentes de seis décadas de compromiso con el *Manifiesto*, *How to Change the World* realmente revela más sobre ese compromiso que las observaciones decepcionantemente superficiales de *Interesting Times*. Así, el magnífico capítulo, «La era del antifascismo, 1929-1945» puede leerse en parte como una apología de esta

fase de la vida de Hobsbawm como militante comunista, que tal como era de esperar defiende la experiencia de los Frentes Populares como «coincidente con el sentido común», y que finaliza con estas palabras: «Para algunos es la única parte de su pasado político sobre la cual los supervivientes de ese tiempo pueden rememorar con incondicional satisfacción».

En general, de manera implícita y explícita, podemos encontrar una recesión gradual y progresiva de la confianza de Hobsbawm en los poderes explicativos y predictivos de lo que para sus fundadores no era solo el materialismo histórico, sino también el «socialismo científico». A todos los efectos, Hobsbawm reitera las afirmaciones que realizaba en su introducción de 1964 a la sección de los *Grundrisse* de Marx sobre «formaciones económicas precapitalistas», donde el «espléndido» Prefacio de 1859 se compara favorablemente con la aproximación ética de los primeros escritos del «joven Marx»; y de nuevo repite, aunque de manera más matizada, las tesis efectuadas en la conclusión del capítulo «Marx, Engels y el socialismo premarxiano» (1978), ambos recogidos aquí. Sin embargo, como se demuestra al reeditar juntos los prefacios a *La condición de la clase obrera en Inglaterra* y al *Manifiesto comunista*, cuya composición está separada por un intervalo de treinta años (1969-1998), esas afirmaciones son ahora tan explícitamente revocadas como una vez fueron apoyadas. Allí donde el comunismo de Engels se concibe como parte integral de su perspectiva como «científico social», Marx es tratado como dissociable de su logro de ofrecer una «concisa caracterización del capitalismo al comienzo del nuevo milenio»; de hecho un no-manifiesto sin el comunismo.

Por lo menos, esto sirve para llamar la atención sobre una característica curiosa de *How to Change the World*, concretamente la falta de una explicación preliminar de su título para los no iniciados. En el prefacio a *Marxism in Marx's Day*, Hobsbawm citaba la undécima tesis sobre Feuerbach de Marx, «hasta ahora los filósofos solamente han interpretado el mundo; sin embargo, de lo que se trata es de cambiarlo», y señalaba:

El marxismo, la escuela teórica más influyente en la práctica (y enraizada en la práctica) del mundo moderno, es tanto un método de interpretar el mundo como de cambiarlo, y su historia debe ser escrita en consecuencia.

En la obra de la que nos ocupamos, la tesis se cita por primera vez transcurridas las tres cuartas partes de la misma, donde es glosada así: «Ningún intelectual ha tenido más éxito para estar a la altura de sus propios requerimientos». En el mismo capítulo —«La influencia del marxismo, 1945-1983»— el pensamiento de Marx todavía se considera que «proporciona una guía esencial para entender y cambiar el mundo»: la conjunción de Hobsbawm de la teoría y la práctica como opuesta a la contraposición de Marx.

En la corriente dominante de la tradición marxista, fielmente transmitida aquí por Hobsbawm, el propósito de la teoría de interpretar correctamen-

te el mundo aspiraba a la máxima unidad con la práctica de masas dirigida a cambiarlo. De acuerdo con la teoría, el capitalismo ofrecía las condiciones para su propia superación en el comunismo. Por encima de todo, generaba un agente social colectivo —el proletariado industrial, por necesidad una «clase verdaderamente revolucionaria»— con un interés y una capacidad para desempeñar su tarea de «sepulturero». El rechazo final de Hobsbawm de esta piedra angular del socialismo marxiano-marxista es la clave de su creciente escepticismo, desde finales de la década de 1970, sobre las perspectivas de una transición más allá del capitalismo en el hemisferio norte. En el capítulo sobre el marxismo posterior a la guerra, se dice que el desarrollo del capitalismo global —y de los movimientos obreros nacionales dentro de él— ha hecho que sea «cada vez más dudoso» que el proletariado desempeñe el papel tradicionalmente asignado. Un cuarto de siglo más tarde, introduciendo el *Manifiesto comunista* en su 150 aniversario, Hobsbawm sigue a Kołakowski al identificarlo como «una deducción filosófica más que el producto de la observación». Para cuando redactaba el capítulo final de su historia del movimiento obrero en el siglo xx, el veredicto era definitivo: «Ahora es evidente que carecía de base».

A medida de que se acercaba el centenario de la muerte de Marx en 1983, Hobsbawm se sintió obligado a expresar el resurgimiento del tema de una crisis del marxismo. Todas las «viejas certezas» sobre el capitalismo y el socialismo no solo habían sido «puestas en duda», sino que «ya no existían». Sin embargo, paradójicamente, la interrogación y revisión del marxismo en las décadas de 1960 y 1970 registrada por él, fue acompañada por una señalada expansión de su influencia intelectual por todo el Primer y Tercer Mundo, creando una cultura pluralista y cosmopolita de indudable calidad, de marcado contraste con la versión oficial y la «segregación nacional» de las décadas de 1930 y 1940. Por ello —como admite en la nueva conclusión de su capítulo sobre el periodo 1945-1983, reemplazando las cautelosas observaciones esperanzadoras del original italiano— Hobsbawm no llegó a anticipar «la velocidad y la escala de la inversión»: «los [siguientes] veinticinco años» iban a ser «los años más oscuros en la historia de la herencia [de Marx]».

El marxismo como teoría, aunque indudablemente «en recesión» desde finales de la década de 1970 y comienzos de la siguiente, no estaba aun con todo en crisis. La superficial discusión que hace Hobsbawm de esta etapa de su carrera (menos de quince páginas) pasa por alto la manera en que confirmaba la clarividente valoración de Merleau-Ponty —hecha en 1960, mientras Sartre aventuraba extravagantes afirmaciones en su favor— de que aunque el marxismo «no era ya ciertamente verdadero en el sentido en que se le creía verdadero», todavía podía «inspirar y orientar el análisis». Posiblemente desorientado por la desaparición de los autores estelares del pasado, o comprensiblemente menos versado en los *mille marxismes* más tarde invocados por André Tosel, Hobsbawm se olvida de muchos —por ejemplo, Jameson, Brenner o Harvey en el mundo anglófo-

no; Domenico Losurdo, Luciano Canfora o Costanzo Preve en Italia— y también omite el grado en que figuras diversamente afiliadas a la tradición marxista obtuvieron una audiencia totalmente global, no limitada al mundo académico, por su trabajo en esos años. La modestia le impide al autor hacerlo, pero no necesitamos ir más allá del propio relato que hace Hobsbawm del siglo xx en *Age of Extremes* (1994), que fue un éxito de ventas en inglés rápidamente traducido a decenas de idiomas.

Hobsbawm no se siente inclinado a apuntalar lo que él consideraría como fragmentos intelectuales contra ruinas prácticas. Lo que cambió todo para él, autodescrito «marxista de la vieja izquierda» y «observador participante» de la trayectoria que revela su militancia en el Partido Comunista Británico desde 1936, fue la ruina del «socialismo realmente existente». Señala que, «hasta la década de 1990, el marxismo nunca dejó de representar a unas fuerzas políticas formidables». Esta frase no está dirigida a abarcar las filas de los trotskistas de la Cuarta Internacional, o de los grupos maoístas escindidos de la Tercera (la antipatía de Hobsbawm hacia todos los timoneles, grandes y pequeños, está bien comprobada), ni a una miríada de *groupuscules* conciliares, libertarios y de toda laya y condición, sino que se refiere abrumadoramente al movimiento comunista internacional como un conjunto de regímenes y partidos. Titulado originalmente «El marxismo en la actualidad: un relato abierto», el capítulo sobre posmarxismo señalaba:

En 1956 comienza un periodo en el que la mayoría de los marxistas occidentales fueron obligados a llegar a la conclusión de que los regímenes socialistas existentes [...] estaban lejos de ser lo que ellos hubieran deseado que fuera una sociedad socialista o una sociedad en el proceso de construir el socialismo. La mayor parte de los marxistas fueron obligados a volver a la posición que mantuvieron los socialistas en todas partes antes de 1917. Una vez más, tenían que argumentar a favor del socialismo como una solución necesaria para los problemas creados por la sociedad capitalista, como esperanza de futuro, pero una solución muy insuficientemente apoyada en la experiencia práctica.

A lo que (en un párrafo omitido en el texto actual, pero que puede tomarse como compendio de la propia posición de Hobsbawm), la versión italiana añadía:

Esto no les condujo necesariamente a subestimar el resultado significativo, y en muchos aspectos positivo, de los intentos hechos hasta el momento para construir el socialismo en medio de grandes dificultades y en países que ni Marx ni Lenin [...] habían considerado tierras especialmente fértiles.

De aquí el trauma que supuso el colapso del Segundo Mundo para la gran mayoría de los socialistas: «Con sus evidentes defectos, había sido el único intento real de construir una sociedad socialista». Después de la caída, el capitalismo «perdió su *memento mori*» y el socialismo que se había de-

clarado a sí mismo «científico» forzosamente se retiró a una variedad de utopismo, en medio de proclamas sobre el liberalismo económico y político como el ineludible horizonte para la historia humana. El marxismo hoy día: ¿cuenta cerrada?

La respuesta de Hobsbawm es que no, aunque por razones que para algunos lectores parecen proporcionar un triste consuelo. Saludando el renacer del anticapitalismo en el nuevo milenio y la «implosión» del neoliberalismo en 2008, Hobsbawm duda de que haya reaparecido en el horizonte lo que, recurriendo a un solecismo, apoda «un sistema de alternativa sistemática»; la desilusión de un futuro socialista no se ha desvanecido. En consecuencia, «el regreso un tanto inesperado de Marx» en el siglo XXI se lleva a cabo no en la forma del profeta del comunismo internacional, que fracasó de manera concluyente en el siglo XX, sino como crítico de la globalización capitalista que ya ha anunciado su propio *memento mori*. Una vez que las deshonras del comunismo y del fundamentalismo de mercado han quedado aproximadamente equilibradas, Marx ha sido liberado del íncubo del «marxismo-leninismo». Las preguntas que planteó, en vez de las respuestas que dieron sus sucesores, están de nuevo en la agenda de la humanidad. Realmente, a la vista de la propensión suicida de lo que Schumpeter (en la estela de Marx) calificó como las olas de «destrucción creativa» del capitalismo, Hobsbawm llega al extremo de mantener que «ambas partes» –liberales y socialistas por igual– «están interesadas en el regreso de un gran pensador» que analizó el capitalismo «de manera histórica [...] y realista»: una definición minimalista del materialismo histórico para tiempos poslapsarios.

Teniendo en cuenta el comentario anterior de Hobsbawm sobre una intensificación del antimarxismo y del anticomunismo *después* de que la Guerra Fría hubiera acabado con la contundente victoria del capitalismo, se puede prever con seguridad que una de esas partes tendrá otras ideas (para otros intereses) y que resistirá las peticiones del browderismo. En cualquier caso, «el Marx del siglo XXI será sin duda muy diferente al Marx del siglo XX». Podemos añadir que principalmente porque la reivindicación que hace Hobsbawm de su contemporaneidad, aunque sea un gran recurso para la interpretación y la crítica del mundo (en compañía de Schumpeter y Polanyi), proporcionará poca o ninguna orientación sobre cómo cambiarlo. Despojado de la mitad del programa inscrito en su mandamiento de 1845, el *revenant* así construido corre el riesgo de rendir pocos beneficios. En este sentido, el título del libro de Hobsbawm es poco apropiado: no trata sobre cómo cambiar el mundo hoy en día, y en la medida en que se ocupa de pasados esfuerzos por hacerlo, algunos percibirán que hay un «no» que se ha perdido en algún lugar del camino.

Imperturbablemente, Hobsbawm confía como conclusión en que la predicción de Marx de la superación del capitalismo, si bien «de una manera diferente de lo que [él] anticipó», conserva su credibilidad. La imposibilidad de apaciguar el conflicto entre los imperativos de una economía

de libre mercado y los requisitos esenciales para un planeta habitable –los ecos de la «utopía negra» de Polanyi son evidentes– constituye el talón de Aquiles del capitalismo. Por todo ello «no podemos saber ahora de quién partirá la flecha que le resulte mortal»; podemos descartar un neoanarquismo renaciente, demasiado propenso a alojar la flecha directamente en su propio pie; también a una marchita socialdemocracia que se rindió incondicionalmente y que ya se encontraba severamente reducida en la década de 1990 a mero carcaj del liberalismo, cuando Bernstein «perdió sus esperanzas» tan inequívocamente como lo había hecho Lenin en la de 1980.

A sus noventa y cuatro años, Hobsbawm continúa con los ojos tan abiertos como siempre y conserva su afilada lengua (por ejemplo, cuando resume la carrera de su contemporáneo Arthur Schlesinger Jr. como «Harvard, Cambridge y la corte de J. F. Kennedy»). Desde el punto de vista editorial, menos refinada en algunos aspectos que obras anteriores a ella, *How to change the World* no es simplemente educativa, es un placer, escrita en la prosa característicamente límpida salpicada de comentarios sardónicos. Si bien su andanada de partida –una vez más ha llegado la hora de tomarse en serio a Marx– no será novedosa para aquellos que nunca dejaron de mostrar interés por él, éstos deben recordar que el libro no está dirigido exclusivamente a *agrégés* y aficionados, sino (como tantas obras de Hobsbawm) a lo que el prefacio de *The Age of Revolution* describía como «esa construcción teórica, el ciudadano inteligente y educado». Solo por esta razón se acercará más a su objetivo final de lo que la mayoría de nosotros nunca podría soñar hacer.

En el primero de los textos recogidos, Hobsbawm reflexiona: «Para aquellos que escriben libros y artículos, es una melancólica ilusión el que la palabra escrita sobreviva. Lamentablemente rara vez lo hace. La gran mayoría de los libros impresos entran a las pocas semanas o años de su publicación en un estado de suspensión del que ocasionalmente son despertados durante periodos igualmente cortos por los trabajos de estudiantes investigadores». Cuando ese estado llega a verdaderamente pocas de sus obras –la más evidente la tetralogía de las «Eras»– Hobsbawm no necesita buscar defensor contra sus temores. Mientras tanto, estaría bien pensar que se encontrará por aquí para asistir al nuevo inventario de Marx y del marxismo que se producirá con motivo del 150 aniversario de *El capital* en 2017; casualmente la fecha del centenario de la Revolución bolchevique y de su nacimiento.

SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO

Nº 71

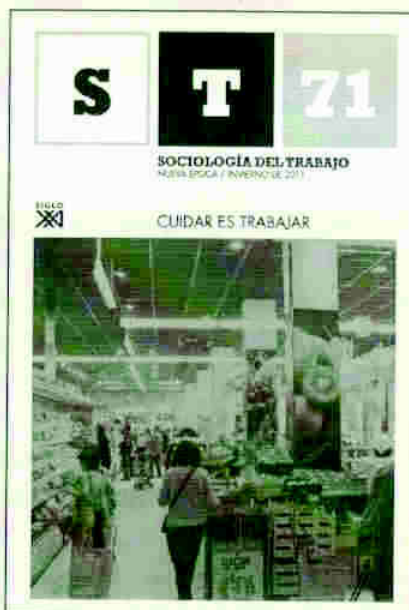
NUEVA ÉPOCA
Invierno de 2011

CUIDAR ES TRABAJAR



www.sigloxxieditores.com

0210-8364-71
160 páginas



Sociología del trabajo, por su proyección y por los primeros lugares que ocupa en los índices de excelencia, es una revista de referencia en su área, tanto en España como en Latinoamérica. Como revista académica independiente y plural se propone difundir investigaciones y reflexiones sobre la realidad del trabajo, junto al análisis crítico de la investigación sobre el mismo.

ARTÍCULOS

- Carolina Recio Cáceres**, El sector de atención a las personas en España. Una mirada desde el empleo
- Oriol Barranco**, El papel del perfil social en el consentimiento y la resistencia laborales. El caso de los trabajadores de un hipermercado
- Sandra Obiol Francés**, Competir por la precariedad. Consecuencias en las condiciones laborales del sector del textil y la confección tras su liberalización comercial
- Carmen Rodríguez Guzmán**, Prejubilados y temporales. El reemplazo de las condiciones laborales en Santana Motor
- Raúl Lorente Campos**, La reestructuración de la industria auxiliar del automóvil
- Julio Bodí Ramiro**, ¿Y ahora qué? Patrimonio, identidad y trabajo a 26 años de la reconversión industrial en el Puerto de Sagunto
- Victoria López Barahona** y **José A. Nieto Sánchez**, La ropa estandarizada. Innovaciones en la producción, comercio y consumo de vestuario en el Madrid del siglo xvii

CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS

- Juan José Castillo**, Alvin Ward Gouldner (1920-1980)
- Alvin W. Gouldner** y **Maurice R. Stein**, Procedimientos en el trabajo de campo. La organización social de un equipo de investigación compuesto por estudiantes

LAS AGONÍAS DEL CONGO*

Las guerras que desde mediados de la década de 1990 han convulsionado a la República Democrática del Congo se han desarrollado, en buena parte, fuera de la atención de los medios de comunicación; su terrible peaje, entre 3 y 4 millones de víctimas, ha estado ausente de las páginas de los periódicos y de las pantallas de televisión. La incesante carnicería y la propia complejidad de los acontecimientos –que en un momento u otro implican a los ejércitos de media docena de Estados, así como a un desconcertante despliegue de fuerzas respaldadas por terceros, de señores de la guerra regionales y de milicias locales– han demostrado ser tremendos obstáculos para el análisis. La suerte de la República Democrática del Congo (RDC) también parece representativa de la ambigua transición de África, desde el campo de batalla poscolonial de la Guerra Fría a una nueva era histórica, mucho menos predecible y que a menudo ha parecido desafiar la inteligibilidad. Dar sentido a las guerras congoleñas y al mismo tiempo entender este cambio histórico más amplio no es una tarea fácil, pero es el objetivo del nuevo y ambicioso libro de Gérard Prunier.

El propio Prunier es un personaje complejo, a caballo de los mundos del análisis académico y de la formulación política. Nacido en 1942 en Neuilly y educado en París y Nanterre a finales de la década de 1960, pasó buena parte de los primeros años de la década siguiente en África del Este –principalmente en Uganda y Tanzania, fuera de la esfera francófona– antes de regresar a Francia a finales de la misma para doctorarse en la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Obtiene su doctorado en 1981 con una tesis sobre la «cuestión india» en África del Este: había sido testigo de la expulsión de la población asiática de Uganda que realizó Idi Amin. En 1984, se incorporó al Centre National de la Recherche Scientifique donde ha permanecido desde entonces exceptuando un periodo entre 2001-2006 en el que dirigió el Centro Francés de Estudios Etiopes en Adis Abeba. Junto a su carrera académica, Prunier ha frecuentado de manera regular los círculos donde se formulan las políticas. Antiguo miem-

* Gérard Prunier, *From Genocide to Continental War. The «Congolese» Conflict and the Crisis of Contemporary Africa*, Londres, Hurst & Company, 2009, 529 pp.

bro del secretariado internacional del Partido Socialista Francés, desde donde asesoró al partido sobre temas relativos a África del Este, a finales de la década de 1990 y comienzos de la siguiente trabajó con la «Unidad Africana» en el Elíseo, y fue consultado por la comisión de investigación del Parlamento francés sobre el papel del país en el genocidio de Ruanda. Más recientemente, ha prestado testimonio como experto en el Congo ante el Tribunal Penal Internacional.

Pero quizá sea más conocido por dos intervenciones protagonizadas en tiempos del genocidio de Ruanda. La primera fue como asesor del Ministerio de Defensa durante la Operación Turquesa, la incursión francesa en Ruanda en junio de 1994 bajo los auspicios de la ONU, realizada con el pretendido objetivo de establecer «zonas de seguridad» para los desplazados por los *génocidaires*. En realidad se trató poco más que un cínico ejercicio de relaciones públicas destinado a mejorar la imagen de Francia, en entredicho después de sus años de total apoyo al régimen de supremacía hutu de Juvénal Habyarimana. El papel de Prunier, según su propio relato, consistió en proporcionar consejos logísticos y sugerir una ruta de entrada que hiriera lo menos posible la sensibilidad del Frente Patriótico de Ruanda, de obediencia tutsi; también se opuso a las voces militares francesas que pedían una invasión para proteger al gobierno hutu del avance del Frente Patriótico Ruandés (FPR). Al final, la operación no tuvo la matanza: como señaló uno de sus miembros, las tropas francesas fueron «aclamadas por asesinos» que continuaron su trabajo con impunidad hasta que el FPR les barrió del país.

Prunier se había alejado de la Operación Turquesa tan pronto como empezó, regresando inmediatamente al análisis académico. Un año después había producido el primer relato del genocidio, *The Rwandan Crisis* (1995), su segunda destacada intervención. Aquí adoptó una posición crítica con la política francesa, incluyendo la operación en la que había estado implicado. Sin embargo, sus críticas sobre la *Françafrique*, el sistema de protectorado informal francés sobre sus antiguas colonias en África, parecían ambivalentes procediendo de alguien que había estado tan estrechamente relacionado con él. En su trabajo posterior a menudo ha adoptado una posición contraria a la de la política exterior del *establishment* francés, acercándose de alguna manera a la de los «anglosajones»; como muestra de ello, sus dos principales libros desde mediados de la década de 1990 han sido escritos en inglés. *Darfur. The Ambiguous Genocide* (2005) proporciona una perspectiva general del conflicto, pero también sitúa a Prunier como un defensor del término «genocidio» y un acérrimo crítico del régimen de Jartum.

Su último libro cubre una década de prolongada violencia en África Central, que abarca desde Ruanda hasta el final de la «transición» política en la RDC en 2006. En nueve capítulos escritos con brío, el lector es transportado a través de las secuelas del genocidio de Ruanda; la Primera Guerra del Congo de 1996-1997, en la que las fuerzas ruandesas de Paul Ka-

game y las ugandesas de Yoweri Museveni derrocaron a la tambaleante dictadura de Mobutu, instalando como presidente a Laurent-Désiré Kabila; la ruptura en 1998 entre Kabila y sus antiguos aliados, que desencadenó la Segunda Guerra del Congo y la partición efectiva del país en zonas controladas respectivamente por el gobierno, por Ruanda y por Uganda; el asesinato de Kabila y su reemplazo por su hijo Joseph Kabila, que con el apoyo occidental se volvió cada vez más poderoso; y por último, el desarrollo de un precario proceso de «transición» a partir de 2003, bajo los auspicios de la diplomacia sudafricana, que ha dejado sin resolver hasta la fecha algunos conflictos en las provincias orientales de Kivu y de Ituri.

Prunier sostiene que los conflictos congoleños se han vuelto menos visibles y susceptibles de análisis debido a la polarización creada por el genocidio de Ruanda, tanto en la esfera académica como en el mundo en general. Su relato pretende evitar esta polarización buscando el terreno intermedio entre, por una parte, las narrativas que culpan principalmente a la dirección del FPR bajo el mando de Kagame de gran parte de lo sucedido en la región de los Grandes Lagos en las dos últimas décadas, como las de René Lemarchand o Filip Reyntjens, y por la otra, las de los autores que adoptan una posición más favorable hacia el FPR, como es el caso de Colette Braeckman. En este aspecto, el libro señala un significativo reajuste de la propia posición de Prunier: después de mostrar anteriormente una buena disposición hacia el FPR, parece que las Guerras del Congo le proporcionan una oportunidad para reconsiderar la figura de Kagame y corregir su relato de incidentes concretos que «malinterpretó» en *The Rwanda Crisis*. Esto resulta especialmente evidente en el capítulo inicial de *From Genocide to Continental War*, en el que Prunier aborda la escala y naturaleza de las matanzas realizadas por el FPR después del genocidio; sostiene que estas no fueron ni un «segundo genocidio» ni «matanzas incontroladas de venganza», sino el producto de «una política de control político mediante el terror». El FPR aparece aquí no como un brillante ejemplo del «renacimiento africano», en su momento alabado por los responsables políticos occidentales, sino como un movimiento autoritario y militarizado que pretendía instalar un «poder tutsi sin fisuras». (En esto Prunier va al compás de la tentativa más reciente de Occidente para disociarse del propio Kagame.)

A continuación, el libro pasa a ocuparse del tratamiento dado a los refugiados hutu de Ruanda, de los cuales cerca de 2 millones huyeron a las provincias Kivus ubicadas en lo que entonces se conocía como Zaire, acompañados y supervisados por los restos del aparato de poder hutu y de las milicias Interahamwe. Prunier sostiene que el tratamiento «humanitario» —es decir, no político— de estas poblaciones por parte de la «comunidad internacional» acabó «ayudando enormemente a los autores de los propios crímenes que no había hecho nada por detener», creando una venenosa mezcla de «asentamientos de verdaderos refugiados y de máquinas de guerra construidas para la reconquista del poder en Ruanda». Esto fue lo que incendió el ya precario tejido social y político del Zaire oriental.

El extenso país que se conoce actualmente como la República Democrática del Congo alberga a más de 60 millones de personas pertenecientes a muchos grupos étnicos, y ocupa un área del tamaño de Europa Occidental. Prunier ofrece un breve retrato geográfico del país —el 60 por 100 es bosque tropical que cubre la cuenca del río Congo; el resto es sabana con montañas al este— antes de señalar que «teniendo fronteras con siete países distintos, Zaire-Congo es el corazón del continente, pero es un corazón débil». Evoca brevemente la «despiadada explotación económica» realizada por Bélgica durante la era colonial y la «apresurada» descolonización de 1960, aunque sin mencionar la fuerza del empuje popular que llevó a Lumumba al poder. En 1965, un golpe de Estado patrocinado por la CIA instaló a Joseph-Désiré Mobutu, quien gobernaría el país durante las tres décadas siguientes. Prunier le describe como un «tirano sacado de Suetonio» que «destruyó su país para poder seguir gobernándolo», pero ofrece escasos detalles al respecto; poco se dice, por ejemplo, de la orgía de corrupción sobre la que presidía Mobutu, ni sobre la espiral de deuda que acumulaba el país como resultado de su cleptocrático gobierno, ni del empeoramiento, desde la década de 1970, de los términos del comercio para la principal exportación de Zaire, el cobre. El vaciado del Estado zaireño se aceleró en la década de 1980 con los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI; pero Mobutu, respaldado incondicionalmente por Washington durante la Guerra Fría, tenía *carte blanche* para encarcelar y torturar a sus oponentes, así como un generoso acceso a la financiación. En 1991, cuando Estados Unidos le retiró precipitadamente su apoyo, el país tenía una deuda de 10 mil millones de dólares y la inflación superaba el 4.000 por 100. Estas fueron sin duda las condiciones previas para la desintegración que iba a producirse.

Prunier denomina el conflicto de 1996 como una «guerra virtual» debido a la decrepita situación de Zaire en el momento de la invasión ruandesa-ugandesa. Registra el rápido progreso de los invasores hacia Kinshasa, donde a mediados de 1997 instalan a Laurent-Désiré Kabila, un antiguo guerrillero izquierdista de la década de 1960 que había desaparecido en el exilio y la irrelevancia. Prunier también se ocupa del muy discutido tema de los refugiados hutu desaparecidos, bien asesinados por tropas ruandesas o muertos de inanición en los bosques orientales: ofrece la cifra habitual de entre 200.000 y 300.000. Pero, como demuestra el libro a continuación, las esperanzas que surgieron después de la rápida desaparición de Mobutu pronto quedarían aplastadas por la reanudación e internacionalización de la guerra en 1998. A un lado del frente de batalla se encontraban Ruanda, Uganda y las fuerzas que apadrinaron en el este del Congo; en el otro estaban las fuerzas gubernamentales y las milicias de Kabila, las tropas enviadas al escenario por Angola y Zimbabue para impedir la caída de Kabila, así como intrusos secundarios: Chad, Sudán, Libia y Namibia. El punto muerto militar entre estos contingentes condujo a la creciente fragmentación de la RDC y a su saqueo directo por todas las partes implicadas.

A partir de 2001 el conflicto lentamente empezó a amainar, especialmente después del misterioso asesinato de Kabila por uno de sus guardaespaldas en enero de ese año. Prunier descarta la idea de que antiguos círculos próximos a Mobutu u otras potencias extranjeras pudieran haber patrocinado el asesinato y se inclina por la «hipótesis angoleña», según la cual, después de haber intervenido en 1998 para mantenerlo en el poder, los poderosos aliados angoleños de Kabila simplemente se cansaron de lo imprevisible de sus reacciones. Sin embargo, su hijo y sucesor, Joseph Kabila, se mostró menos maleable de lo esperado y escapó del dominio de sus padrinos regionales para reafirmar el control sobre las estructuras de poder, enormemente favorecido en este aspecto por la ayuda financiera, especialmente de la UE, y por el respaldo de las tropas de paz de la ONU, cuya misión en el Congo ha pasado de 5.000 hombres en 2000 a 20.000 en la actualidad. Prunier describe el periodo de «transición» que siguió a la firma de diversos acuerdos de paz en 2002-2003 como el de los «dos Congos: el antiguo territorio del gobierno que refunfunaba y se quejaba, pero que en líneas generales vivía en paz, y la antigua zona de guerra, que a veces se preguntaba si ésta había acabado realmente».

En el último capítulo del libro, Prunier intenta una síntesis analítica de las guerras. La desastrosa historia que relata es la del Congo sufriendo las consecuencias, por un lado, del legado de Mobutu de un Estado poscolonial sumamente corrupto, «una catástrofe a la espera de producirse», y por otro, de los conflictos internos y ambiciones de los países vecinos que invadieron su territorio y conectaron con las propias divisiones internas del país. El rápido colapso del Estado zaireño durante la primera guerra es quizá la mejor confirmación de la naturaleza vacía del gobierno de Mobutu, al mismo tiempo «duro» en su impulso depredador y coercitivo y, sin embargo, «débil» en cuanto a su incapacidad para institucionalizar el poder, especialmente a la hora de hacer frente a los impulsos centrifugos de las regiones del país o para formar un ejército nacional. El segundo conflicto, que se despliega a partir de 1998, fue un conflicto «congoleño» solamente en la medida en que la RDC fue el campo de batalla de sus vecinos. Pero también fue específicamente «congoleño», como señala Prunier, en el sentido de que los países vecinos (excepto Ruanda) estuvieron de hecho implicados de manera periférica y se retiraron en cuanto alcanzaron sus objetivos a corto plazo: contratos económicos en el caso de Zimbabue; la destrucción de las bases de UNITA para Angola; la expulsión de los grupos apoyados por Sudán en el caso de Uganda, etc. La locución «guerra continental» del título del libro es por ello parcialmente engañosa; el propio Prunier declara que el conflicto fue «fundamentalmente una guerra entre Ruanda y el Congo [...] lo demás fue anecdótico». La segunda mitad del subtítulo –la crisis del África contemporánea– también es una generalización: ¿la década infernal que atravesó el Congo fue un paradigma del continente en ese periodo o más bien una excepción extrema? Prunier sostiene, con razón, que el conflicto fue producto de una configuración muy específica que no es probable que pueda reproducirse, y finaliza diciendo que «ningún otro país del

África actual tiene la capacidad de crear una convulsión semejante tan extendida en el continente».

¿Qué sucede con los paralelismos históricos de la tragedia de la RDC? Prunier sostiene que las comparaciones con la Primera Guerra Mundial no son útiles: con la excepción de la propia RDC y de Ruanda, las guerras del Congo no han dado origen a una masiva movilización nacionalista, ni han sumergido a las partes enfrentadas en ningún tipo de guerra total. El conflicto debería compararse más bien con la Guerra de los Treinta años, en la que un Estado en desintegración se convierte en el campo de batalla para un cierto número de Estados vecinos, que envían tropas o respaldan a grupos y a mercenarios, todos compitiendo entre sí en el saqueo y las atrocidades contra los civiles. El atroz peaje de muerte no fue producto de grandes batallas, sino de masacres de civiles y de los trastornos en el suministro de alimentos y en las infraestructuras sanitarias. Además, como la Guerra de los Treinta Años, los conflictos congoleños fueron un «momento de transformación en la historia del continente», después del cual se encontraba una nueva era.

En el presente volumen, como en otras partes de su trabajo, Prunier se centra de manera consistente en factores ideológicos y geopolíticos y —quizá influenciado por sus muchos vínculos con los círculos oficiales— hace mucho énfasis sobre las decisiones de los dirigentes. De hecho, uno de sus argumentos clave es que las cuestiones de liderazgo son importantes. Pese a toda la complejidad del tejido social, económico e histórico de África Central, parece que el carácter y las opiniones de individuos clave marcan una diferencia significativa: ya se trate de Mobutu entrometiéndose en los asuntos de Ruanda y Angola, de la formación de Kagame en el exilio de Uganda, de la visión de Museveni de su papel histórico, o de la incoherente personalidad de Laurent-Désiré Kabila (ya señalada por Che Guevara en sus diarios del Congo). Prunier sostiene que la eliminación de Kabila de la escena también contribuyó decisivamente a dar pasos hacia un acuerdo de paz. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de estos individuos, y hasta qué punto contribuyeron cada uno de ellos a la prolongación del conflicto? El análisis de Prunier señala un cambiante conjunto de motivos. La principal preocupación de Kagame era el este del Congo, y especialmente los remanentes del poder hutu que sobrevivían allí y que suponían una amenaza potencial para el gobierno del FPR en Kigali. Por su parte Museveni estaba obsesionado por los desafíos en su contra que podían ser lanzados desde Sudán o el Congo, especialmente por el Ejército de Resistencia del Señor. En consecuencia, tanto para Ruanda como para Uganda la conquista de Kinshasa quizá no fue tanto un fin como un medio de «determinar el resultado» en el este del Congo, tanto con Kabila (en 1996-1998) como sin él (1998-2003).

Sin embargo, apoyarse exclusivamente en semejantes explicaciones tiene evidentes dificultades: en primer lugar porque las tropas de Ruanda y de Uganda ocuparon zonas cientos de millas más allá de lo que podrían exi-

gir esos propósitos; y en segundo lugar, por las evidentes ganancias materiales obtenidas por ambos Estados con su ocupación del Congo. De acuerdo con Prunier, las motivaciones económicas no tuvieron demasiada importancia en la primera guerra y fueron «aspectos secundarios» de la cruzada contra Mobutu. Solamente en la segunda guerra los intereses materiales desempeñaron un papel importante en la continuación del conflicto: tanto las tropas de Ruanda como las de Uganda extrajeron oro, coltán, casiterita y otros minerales –a menudo utilizando a la población local como mano de obra forzada– y vendieron grandes cantidades de madera. Semejantes intereses desempeñaron un papel no solo en la prolongación del conflicto, sino también en la desintegración de alianzas, especialmente la de Ruanda y Uganda que llegaron a librar batallas abiertas en el norte de la RDC en 1999 y 2000. La riqueza mineral del Congo oriental mejoró las balanzas de pago de estos dos Estados; Uganda, por ejemplo, se convirtió de la noche a la mañana en un importante exportador de oro y diamantes, a pesar de no tener yacimientos de su propiedad. Museveni y Kagame también utilizaron las guerras del Congo como una salida para las contradicciones políticas internas de sus sistemas de gobierno, especialmente en lo militar; una evidencia de que su control del poder no era tan firme como a menudo se supone. La estabilidad de Uganda y Ruanda, tan alabada por el Banco Mundial y el FMI, se ha producido a expensas de la RDC.

Al distribuir las responsabilidades por los conflictos, Prunier de nuevo concede gran importancia a la actuación de los dirigentes africanos, descartando como «paternalistas» o «conspiracionistas» las ideas de que poderosos actores internacionales estuvieran detrás de sus estrategias; especialmente la idea, ampliamente extendida en algunos círculos franceses y congoleños, de una mano «anglosajona» detrás de Museveni y Kagame. Realmente, Prunier considera las guerras congoleñas como la señal del fin del neocolonialismo en África, que trae un cambio desde el imperialismo externo (occidental) al imperialismo interno africano. Para bien o para mal, nos dice, nos encontramos ante una responsabilidad africana. También tiene palabras duras para el inadecuado manejo de la situación por parte de la «comunidad internacional»: su «conmover humanitarismo» no ha logrado resolver la cuestión de los refugiados en las Kivus, por ejemplo. Las potencias no africanas no solo fueron ineficaces sino también ingenuas, y de acuerdo con Prunier, fácilmente manipulables. Señala las habilidades de los políticos africanos para instrumentalizar los estereotipos y la ignorancia occidental: «En treinta y siete años de estudio de África he visto más blancos manipulados por negros que a la inversa. Pero el persistente racismo poscolonial hace que a las víctimas les cueste admitir que les han tomado el pelo».

En el relato de Prunier, el papel desempeñado por las potencias no africanas es simplemente pasivo o contraproducente. A Francia se la describe como básicamente carente de fuerza: aturdida por las consecuencias de su política en Ruanda e incapaz de salvar al régimen de Mobutu, se

quedó «sin saber qué hacer» en la emergente África Central posterior a la Guerra Fría; enfrentada al fallecimiento de la *Françafrique*, París achacó su frustración política a supuestas maniobras «anglosajonas» antifrancesas. Esta es seguramente una opinión demasiado indulgente. Al mismo tiempo que perdía su influencia en Ruanda y Zaire, París mantuvo una mano firme en la República Centroafricana y en Congo-Brazzaville, e incluso se las arregló para posicionarse de nuevo en la RDC como un respaldo clave para ambos Kabilas, padre e hijo. Mientras tanto, el papel negativo de Estados Unidos se resume para Prunier en su tenaz compromiso con su propia retórica sobre los «nuevos dirigentes» de la década de 1990, y hasta hace muy poco, en su inquebrantable alianza con Uganda y Ruanda a pesar de su aventurerismo militar y de sus negativos balances en cuanto a derechos humanos. Sin embargo, muchas de sus notas de pie de página apuntan a un papel mucho más directo que este, incluyendo supuestos despliegues encubiertos de personal militar y de mercenarios junto a las tropas ruandesas; pero se dan pocos detalles que permitan al lector hacerse una idea clara. Sorprendentemente, los británicos, belgas y chinos están casi por completo ausentes de su relato.

Aunque Prunier tiene razón al sugerir que la influencia de las potencias occidentales no debe sobreestimarse, no por ello se puede desechar por completo. Lamentablemente, en el libro no se investigan suficientemente muchos aspectos de su implicación en la RDC, por ejemplo, las relaciones de Joseph Kabila con sus apoyos internacionales (principalmente Estados Unidos, Francia, Bélgica y Sudáfrica) o los de las elites locales y regionales con un abanico de intereses económicos, desde compañías mineras hasta la extracción artesanal de diamantes, desde el comercio ilegal de uranio hasta la industria maderera. Diversos informes de la ONU han recogido los muchos beneficiarios del saqueo de la riqueza mineral del Congo. Entre ellos se incluyen empresas multinacionales de Canadá, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Sudáfrica, China y Zimbabue, actuando en complicidad con funcionarios de la RDC o beneficiándose del contrabando a través de Estados vecinos (Uganda, Ruanda, Zambia, Angola). Prunier deja sin explorar la mayor parte de estas turbias actividades económicas, como las de los empresarios industriales y mineros entre los que se incluían el belga George Forrest, el británico Jean-Raymond Boule o el zimbabuense Billy Rautenbach, que entre 1998 y 2000 fueron directores ejecutivos de Gécamines, la compañía minera estatal congoleña. Las responsabilidades de las instituciones financieras internacionales y de los acreedores del Congo también merecen mayor atención, especialmente respecto a la actual restructuración de la deuda de la RDC —Bélgica, Francia, Suiza y Sudáfrica son los principales «prestamistas»— y al reparto, patrocinado por el Banco Mundial, de Gécamines en beneficio de los inversores extranjeros.

El libro de Prunier proporciona un relato comprensivo y bien documentado de las guerras del Congo durante la pasada década. Dominar el turbulento flujo de los acontecimientos y el abanico de actores, mientras se

proporciona una narrativa clara en la que conflictos a escala local, como los de las Kivus, se combinan con procesos de escala casi continental, es ciertamente un logro. Pero el libro tiene un cierto número de defectos y lagunas que inevitablemente desmerecen a sus virtudes. El esquema cronológico del libro es tanto útil como frustrante: es necesario para dar sentido al desarrollo de los acontecimientos, pero esparce las perspectivas analíticas a lo largo del texto. Se plantean temas clave, pero luego se abandonan de manera que Prunier puede retornar a narrar las conspiraciones políticas que parecen fascinarle. Su interés por la intriga plantea nuevas preguntas. Se ofrecen al lector detallados relatos de acontecimientos, incluyendo asesinatos –frustrados o consumados– con muy pocos testigos. Estos detalles son a menudo reveladores, sin embargo muchas de las afirmaciones de Prunier se basan en fuentes confidenciales, normalmente miembros de los servicios de seguridad o de inteligencia, pero también en testigos de segunda fila («un pariente de uno de los guardaespaldas de Kabila que fue testigo de la escena»); algunas de sus fuentes, son incluso más dudosas («información confidencial procedente del entorno del comercio de armas»). Este tratamiento de las fuentes, a menudo improvisado, lleva a pensar cómo puede ser Prunier tan categórico sobre ciertos acontecimientos controvertidos, como la muerte del comandante del FPR Fred Ewigyema en 1990 o el asesinato de Kabila en 2001.

El libro contiene diversas partes de franca autocrítica, en las que Prunier se distancia de posiciones que mantenía en su obra anterior, producto en parte de una inevitable falta de perspectiva. Pero algunos de estos errores se debían a su proximidad a los actores involucrados, por encima de todo al FPR y a la estructura de poder en Uganda. En este sentido, el posicionamiento de Prunier es tan honesto como ambiguo. Aunque admite que algunas de sus opiniones anteriores eran erróneas no parece reconocer las implicaciones de su actual cercanía a las fuentes occidentales, y especialmente a las francesas, para su relato sobre el Congo. Claramente retiene su gusto por los pasillos del poder; al mismo tiempo expresa repetidamente su frustración con la elite política, quejándose de que sus advertencias no fueran tenidas en cuenta; critica la falta de comprensión de la «dura realidad» por parte de los políticos, que ignoran el consejo de especialistas como él que están «íntimamente sumergidos en el África real».

La narrativa de Prunier se preocupa de las estrategias políticas y militares de los líderes, no de los procesos a largo plazo de construcción del Estado o de las maneras de imaginar la nación. Sin embargo, bajo el flujo de acontecimientos, como nos recuerda Prunier, están en juego temas básicos sobre la soberanía y la protonacionalidad: ¿qué es un país en África?, ¿qué es un gobierno legítimo?, ¿quién es un ciudadano?, etc. Desafortunadamente no aborda estas preguntas con mayor detalle. Aunque hace algunos comentarios útiles sobre las diferencias en el estilo y la visión política existentes entre los líderes del Congo, Angola, Zimbabue, Ruanda y Uganda, su capítulo analítico final solamente hace declaraciones generales sobre África como conjunto —en el África actual, la lealtad hacia el Es-

tado no es un sentimiento internalizado», «el nacionalismo es esencialmente reactivo»— que aplanan las perspectivas dadas en otras partes del texto y oscurecen las diferentes trayectorias en la construcción del Estado. ¿Qué tienen en común la «espartana política cultural» del FPR y el legado de Mobutu, por ejemplo? Prunier diferencia entre el saqueo privado del Congo por parte del ejército de Uganda y la depredación más orientada por el Estado del ejército de Ruanda: hubiera sido interesante discutir los diferentes impactos de estos procesos sobre las formas de los dos Estados.

Respecto al modelo de nación, la fragmentación de la RDC ha planteado preguntas importantes relativas a su soberanía. Jeffrey Herbst y Greg Mills han sostenido en dos artículos en *Foreign Policy* («There is no Congo», marzo de 2009; y «Time to end the Congo charade», agosto de 2009) que «la única manera de ayudar al Congo es dejar de pretender que existe»; piden la renuncia al «mito del Congo», es decir, «la renuncia a la idea de que exista un poder soberano en este extenso país». Su brutal llamamiento para el desmantelamiento del país ha provocado arduos debates sobre su futuro. ¿Es la RDC, como sostienen Herbst y Mills, solamente una ficción legal mantenida a flote por potencias externas, o es una verdadera comunidad imaginada que sostiene la idea del Estado incluso en ausencia de instituciones estatales en funcionamiento? Prunier parece inclinarse por la primera opinión: su libro retrata el conflicto del Congo como un ejemplo de que ninguno de sus países vecinos se tomó en serio la soberanía congoleña. Los únicos actores que lo hicieron fueron las potencias más alejadas del escenario —Sudáfrica, Francia, Bélgica, Estados Unidos— que en este caso se atuvieron a las nociones westfalianas de Estado soberano. Pero permanecen incertidumbres de largo alcance: ¿estamos asistiendo a nuevos modelos de lealtades, que mezclan tanto conceptos territoriales precoloniales como procesos posmodernos de «glocalización»? ¿o prevalecerán los intereses creados para mantener las fronteras existentes y demostrarán que éstas no son tan artificiales?

Lo que ofrece el relato de Prunier es esencialmente una perspectiva «desde arriba». Aunque gran parte de la historia se hace seguramente en cuarteles militares y palacios presidenciales, eso deja sin explicación muchos procesos sobre el terreno. El gran ausente del libro es la gente: ¿cómo sobrevivió, vivió, pensó o actuó a lo largo de las guerras? ¿Cómo se soportan y alimentan las guerras «desde abajo»? Una perspectiva sociológica sobre el terreno, por ejemplo, podría ayudar a comprender la situación de «ni paz ni guerra» en las dos Kivus y en Ituri, o la permanencia de milicias y de prácticas de violencia socialmente arraigadas en la *longue durée*. Prunier menciona estas cuestiones —en relación al tema de la tierra en las Kivus e Ituri dice que «aquí nos estamos ocupando de un problema tan básico como el del sistema de cercamiento en la Inglaterra del siglo xvii»— pero no las desarrolla.

La ausencia de análisis sociológicos también es evidente en el compromiso de Prunier con las cuestiones de identidad. Términos esencialistas y

cosificados como «tribu» y «tribal» abundan en el libro aunque él mismo ha contribuido a su deconstrucción, especialmente en su obra de 1989 en colaboración con Jean-Pierre Chrétien, *Les ethnies ont une histoire*. Aquí, aunque tiene cuidado en afirmar que las identidades son múltiples y solapadas, que el tribalismo no es nunca una explicación sino algo a explicar, uno tiene la sensación de que da por sentadas algunas divisiones de identidades o algunos odios étnicos, ya que continuamente regresan con sigilo al análisis. No se puede negar que «las identidades son fuertes», especialmente en el contexto de brutalización y de guerra en el que estos alineamientos son a menudo necesarios para sobrevivir, pero habría sido de ayuda disponer de una discusión más completa sobre los procesos de «construcción de identidad» en condiciones de violencia, y su posible relajación o inversión. Leyendo a Prunier nos quedamos con la sensación de la inevitabilidad de choques entre etnicidades politizadas. Quizá esto explica la nota de impotencia que ocasionalmente aparece y que en una ocasión se convierte en una oración: «Un proceso enorme e incipiente está actuando ahora, y Dios ayude a los hombres y mujeres que son tanto sus actores como su impotente materia prima». Pese a todas sus afirmaciones sobre la responsabilidad africana, en su relato parece haber fuerzas y dinámicas mayores en funcionamiento, más allá del control o la comprensión tanto de actores como de analistas. Prunier nos ha dado una convincente síntesis de los acontecimientos, pero nos deja muchas cuestiones sin resolver respecto a su interpretación histórica.

New Left Review

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

SUSCRIPCIÓN

Precio de la suscripción (sin IVA):

- 77,88 €
- 69,24 € (Estudiantes acreditados)
- 311,52 € (Instituciones y bibliotecas)

La suscripción incluye:

- Envío por correo ordinario o vía superficie de un número de la revista cada dos meses y acceso al ejemplar electrónico en formato pdf o e-book.
- Acceso a ejemplares electrónicos de números atrasados en formato pdf (desde el número 0 en adelante) o e-book (desde el número 60 en adelante).

Deseo suscribirme a *New Left Review* por un periodo de un año: 6 números (periodicidad bimestral) a partir del n.º

Apellidos..... Nombre.....

Calle N.º Escalera Piso Puerta

Localidad Provincia..... C.P. País

NIF Profesión Teléfono

e-mail

FORMA DE PAGO

Tarjeta Visa Caducidad mm / aa

Domiciliación bancaria

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

ENTIDAD

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

OFICINA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CONTROL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NÚM. CUENTA

NÚMEROS ATRASADOS

Indique los números que desea recibir:

Precio unitario:

- 4,81 € - Ejemplar electrónico (en formato pdf desde el número 0 en adelante - en formato e-book desde el número 60 en adelante)
- 14,42 € - Ejemplar electrónico y libro (envío por correo ordinario o vía superficie)
- 41,42 € - Ejemplar electrónico y libro (envío por courier)

El acceso a la web para la descarga de los ejemplares electrónicos se realizará mediante una clave que será enviada por e-mail (por tanto, es imprescindible poner una dirección en el formulario).

Firmado:

Remitir a:

Ediciones Akal, S. A.

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos-Madrid

España

Teléfono: 918 061 873

Fax: 918 044 028

e-mail: atencion.cliente@akal.com



akal



CLACSO

15,00 €



www.akal.com

Esta revista ha sido impresa en papel ecológico, cuya materia prima proviene de una gestión forestal sostenible.